

RECOPILACION
DE LA
LEGISLACION
BANCARIA
CHILENA



BANCO CENTRAL DE CHILE

1980

RECOPILACION DE LA LEGISLACION BANCARIA CHILENA



BANCO CENTRAL DE CHILE

1980

EDITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFOR-
MACIONES ESTADISTICAS Y PUBLICACIONES
DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

INDICE GENERAL

	Página
I.— INTRODUCCION	7
II.— EVOLUCION DE LA LEGISLACION BANCARIA (1973-1980)	11
ETAPAS:	14
1ª— Normalización y transición hacia la intermediación privada	14
2ª— Legislación de las autoridades bancarias (1975)	19
3ª— Flexibilización del sistema y fortalecimiento de las atribuciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras	21
4ª— Consolidación de las políticas de uniformidad	26
III.— LEY ORGANICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	47
Texto	49
Indice analítico	59
IV.— LEY ORGANICA DEL CONSEJO MONETARIO Y DEL BANCO CENTRAL DE CHILE	65
Texto	67
Indice analítico	85
V.— LEY ORGANICA DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE	117
Texto	119
VI.— LEY GENERAL DE BANCOS	131
Texto	133
Síntesis histórica	167
Indice analítico	173

I. INTRODUCCION

La Fiscalía del Banco Central de Chile ha recopilado, en la presente publicación, las normas básicas que, vigentes a septiembre de 1980, regulan la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el Consejo Monetario, el Banco Central de Chile, el Banco del Estado de Chile, los Bancos Comerciales, de Fomento y Sociedades Financieras.

Los textos que se difunden contienen citas de las leyes que las han modificado o complementado como, asimismo, un índice por materias.

Finalmente, para facilitar la comprensión de las referidas normas y a modo de presentación, se inserta una explicación cronológica sobre la evolución de la legislación bancaria en el período comprendido entre septiembre de 1973 y septiembre de 1980.

Esperamos que el texto que hemos preparado facilite las decisiones de quienes tienen responsabilidades en el área financiera y de todos aquellos que se interesen por conocer su legislación básica.

**ESTA RECOPIACION HA SIDO ELABORADA POR LA FISCALIA DEL BANCO
CENTRAL DE CHILE, INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES ABOGADOS:**

FISCAL: Hernán Felipe Errázuriz Correa

ABOGADO JEFE: José Antonio Rodríguez Velasco

ABOGADO SUBJEFE: Héctor Rencoret Holley

ABOGADOS: Isabel Artigues Caldentey
Jorge Carrasco Vásquez
Carlos Correa Iglesias
Héctor Elizalde Prado
Andrés Hurtado de Mendoza Prieto
Ramiro Méndez Urrutia
Tristán Molina Concha
Carlos Olivos Marchant
Gonzalo Prieto Smythe
Francisco Serqueira Abarca
Isaac Telias Ergas

BIBLIOTECARIA: M. Inés Muggli Prieto

II. EVOLUCION DE LA LEGISLACION BANCARIA (1973-1980) (1)

[1] Este capítulo corresponde a una exposición del Fiscal del Banco Central de Chile, Sr. Hernán Felipe Errázuriz Correa.

A fines de 1973 se inicia en Chile un proceso de reformas de las instituciones financieras que abarca especialmente las entidades bancarias, Banco Central de Chile y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

El objetivo central de esta iniciativa ha sido promover el desarrollo acelerado de un mercado financiero, competitivo y eficiente, en cuanto a que la asignación de fondos se lleve a efecto por rentabilidades y al mínimo costo de intermediación, sin discriminaciones entre instrumentos e instituciones intermedias, todo con el propósito de acrecentar la libertad económica.

La tarea emprendida se intentaba en un período de grandes dificultades. El país sufría las consecuencias de la mayor crisis política y económica, la cual se había extendido también al sistema financiero.

La alternativa escogida por el Gobierno para solucionar los problemas económicos fue la aplicación de los principios de la economía social de mercado, los que se contraponían básicamente con la situación entonces existente en este sector, el cual, luego de un creciente intervencionismo estatal iniciado en la década del 40, culminó en la más completa estatización a fines del año 1970.

En efecto, todos los instrumentos de intervención que habitualmente se habían utilizado alcanzaron, al comienzo de los años setenta, la más rigurosa aplicación; es así como la fijación de la tasa de interés llegó a los niveles más negativos, no obstante que la variación de precios internos superaba a un 600%; los controles cualitativos practicados en forma de líneas de crédito selectivos, que en algunos casos se habían utilizado en el pasado para promover ciertos sectores de la economía, se extendían a todo el sector denominado "área social"; los límites cuantitativos alcanzaron su punto máximo con la fijación de tasas de encaje marginales del 100% para el crédito bancario, de manera tal que todo el aumento del crédito era otorgado directamente por el Banco Central bajo la forma de "administración delegada de fondos" y, finalmente, la importancia relativa que habían adquirido desde largos años los institutos de crédito público se hizo absoluta a través de la estatización o intervención de todos los bancos nacionales y de la fusión de éstos a la banca extranjera que fue nacionalizada. Lo anterior, sin contar con el manejo político de las instituciones y del crédito, cuyas condiciones de subsidio en la tasa de interés los hacían particularmente atractivos a los gobiernos para financiar gastos electorales y públicos.

En este contexto, debía agregarse también la existencia de un monopolio estatal de las operaciones reajustables y de plazo superior a un año, al cual no tenían acceso las instituciones privadas, salvo las Asociaciones de Ahorro y Préstamo.

Como efectos de esta situación sobrevinieron la desintermediación financiera, el desahorro, las altas tasas de inflación, los mercados paralelos o informales, etc.

Por otra parte, la implementación de las nuevas medidas se vio complicada por la estructura reglamentaria propia de nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, el sistema reglamentario aplicado en Chile ha sido de máximo detalle y difiere del aplicado en Inglaterra y otros países cuya reglamentación es mínima, pues, descansa sobre acuerdos informales entre las autoridades y los administradores de las instituciones financieras, todo en un esquema de autodisciplina de los profesionales bancarios.

A continuación expondremos cronológicamente una síntesis de las principales disposiciones pertinentes al sector bancario, dictadas desde septiembre de 1973, las cuales permiten ilustrar la evolución de la regulación bancaria.

En general, nos limitaremos a consignar las normas legales del período en examen, toda vez que el propósito de esta publicación es difundir tales disposiciones.

LEGISLACION SOBRE: BANCO CENTRAL, SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS, BANCOS COMERCIALES, BANCOS HIPOTECARIOS, BANCOS DE FOMENTO, SOCIEDADES FINANCIERAS

En este proceso pueden distinguirse las siguientes etapas:

1ª— Etapa de normalización y transición hacia la intermediación privada (1973-1974) (D.L. N°s. 231, 455, 748, 749, 818 y 1.000).

2ª— Legislación referente a las autoridades normativas y de control (1975) (D.L. N°s. 1.078, 1.097 y 1.618).

3ª— Flexibilización de las instituciones intermediarias y fortalecimiento de las atribuciones de la autoridad fiscalizadora (D.L. N°s. 1.171, 1.638, 1.683 y 1.847).

4ª— Consolidación de las políticas de uniformidad (D.L. N°s. 2.099 y 3.345).

1ª ETAPA: NORMALIZACION Y TRANSICION HACIA LA INTERMEDIACION PRIVADA

1.— *DECRETO LEY N° 231 (Diario Oficial de 31 de diciembre de 1973).*

Normas transitorias:

En su mayor parte constituye una normativa transitoria que permitió el funcionamiento del sistema dentro de un régimen de excepción.

Este decreto ley entregó la administración de los bancos a delegados nombrados por el Superintendente de Bancos, los que asumieron todas las facultades de los directorios de estas instituciones. Asimismo, suspendió la formación de nuevos bancos comerciales y permitió la aplicación de márgenes excepcionales en la relación deuda-capital, endeudamiento y créditos e inversiones. Estos márgenes se regirían durante la transición por las normas sustitutivas que debía dictar el Superintendente de Bancos, conjuntamente con el Banco Central de Chile.

También suspendió la disolución automática de los bancos por la pérdida de más de la mitad del capital y reservas.

Este régimen transitorio se fue normalizando paulatinamente de manera tal que ya en el año 1975 se aplicaban los márgenes legales y la generación de los directorios comenzó a efectuarse por las juntas de accionistas.

Para solucionar los juicios de reclamación por la adquisición, compra y, en general, por la estatización de los bancos, se dictaron normas sobre extinción

de acciones judiciales no ejercitadas y se facultó la transacción de los juicios en tramitación, sea que provinieran de la adquisición que el Estado había efectuado de la banca nacional o de las multas que se habían aplicado por el Banco Central y la Superintendencia de Bancos.

Dispuso también la fiscalización exclusiva por parte de la Superintendencia de Bancos para la banca y el Banco Central de Chile, no siendo aplicables las facultades que el D.L. N° 38, de 1973, había entregado a la Contraloría General de la República.

Implantó la prohibición de instalación en el país de los bancos extranjeros como resultado de la aplicación de la Decisión 24 (2). Como alternativa de solución de la necesaria presencia de la banca extranjera, se crearon las denominadas representaciones operativas de bancos extranjeros, las cuales estaban facultadas para realizar las operaciones que el Superintendente de Bancos les autorizara en forma general con la sola limitación de que en ningún caso podían recibir depósitos ni conceder préstamos en moneda nacional (3).

Además de las normas antes señaladas que, como hemos dicho, han perdido vigencia, ya sea por su transitoriedad o por derogación expresa, se contenían cuatro disposiciones que sí son de interés porque eliminaron restricciones al mercado financiero:

1ª— Derogó el artículo 199 de la Ley N° 13.305 y toda otra disposición legal que obligara a los bancos forzosamente a otorgar préstamos o créditos en determinadas condiciones. Estas derogaciones fueron sin perjuicio de las facultades legales del Banco Central para establecer determinadas exigencias a los bancos comerciales o de fomento para el otorgamiento de préstamos, plazos, montos y condiciones.

2ª— Derogó la exigencia de aprobación por decreto supremo del Presidente de la República para la fijación de encajes que correspondía al Banco Central. Esta situación de autonomía para el ejercicio de esta facultad se mantiene en la ley orgánica en vigencia.

3ª— Suprimió el límite de 1,75% anual para los préstamos de emergencia en moneda extranjera por un plazo de hasta quince días que podía otorgar el Banco Central a las instituciones financieras.

4ª— Facultó a los bancos comerciales y al Banco del Estado de Chile para actuar como delegados del servicio de tesorería, en la recaudación de toda clase de tributos y en el pago de las obligaciones fiscales. Esta norma fue complementada posteriormente por el artículo 47 del Código Tributario, aprobado por decreto ley de 1974, que dispuso que el Ministro de Hacienda podía facultar al Banco del Estado de Chile y a los bancos comerciales y a las demás instituciones para recibir pago de cualquier impuesto.

En virtud de estas disposiciones se dictó el Decreto de Hacienda N° 255, de 29 de marzo de 1979, publicado en el Diario Oficial de 7 de abril de 1979, que reglamenta la facultad de los contribuyentes para pagar sus impuestos y

(2) La prohibición de instalación de sucursales o agencias de bancos extranjeros fue derogada posteriormente por el artículo 9° del D.L. N° 818, de 27 de diciembre de 1974 y por el retiro de nuestro país del Pacto Andino.

(3) Las representaciones operativas de bancos extranjeros fueron suprimidas por el artículo 2°, letra a) del D.L. N° 2.099, del 13 de enero de 1978, toda vez que ya no se justificaba este régimen de excepción, en circunstancias que se había autorizado y de hecho se habían instalado agencias de bancos extranjeros en el país.

contribuciones y demás obligaciones tributarias y fiscales en el Banco del Estado, en los bancos comerciales, en los bancos de fomento y en las sociedades financieras.

2.— *DECRETO LEY N° 455 (Diario Oficial de 25 de mayo de 1974).*

El D.L. N° 455 contiene la normativa orgánica sobre las operaciones de crédito de dinero —que fijó la reglamentación de las operaciones de crédito y de dinero— y puso término al estanco y privilegio de algunas instituciones públicas de crédito, bancos de fomento y sector vivienda para contratar operaciones reajustables.

Además, el artículo 3° transitorio estableció que la organización y funcionamiento de las sociedades financieras se sujetarían a las disposiciones que dictara la Superintendencia de Bancos. En virtud de esta disposición, se dictó la Resolución 19 y, posteriormente, las Resoluciones 26 y 32 de esa Superintendencia.

Esta facultad reglamentaria de la Superintendencia de Bancos se extinguió en virtud del D.L. N° 3.345 que incorpora estas entidades a la Ley General de Bancos, manteniendo, sin embargo, la Superintendencia su vigilancia.

3.— *DECRETOS LEYES N°s. 748 Y 749 (ambos publicados en el Diario Oficial de 12 de noviembre de 1974).*

D.L. N° 748.— Modifica la Ley N° 16.253 en lo relativo a facilitar los trámites de constitución y la inversión extranjera en Bancos de Fomento.

Como es sabido, los bancos de fomento fueron autorizados por la Ley N° 16.253, de 1965; sin embargo, recién en 1975 se viene a constituir el primero de esta especie, debido a la rigidez de su reglamentación en cuanto a los plazos mínimos de sus créditos, restricciones de sus operaciones al financiamiento de "proyectos", asignación regional y sectorial del crédito, exigencia sobre constitución y, además, por la discusión política sobre la exigencia o no de participación del sector público en todos los bancos de fomento que se constituyeran. En síntesis, se diseñaron en la tendencia de la especialización del giro financiero, del crédito selectivo y, teóricamente, del ahorro y financiamiento a largo plazo.

Ahora bien, el D.L. N° 748 fue un intento para promover la formación de estos bancos, pero su normativa fue insuficiente, toda vez que se limitó a facilitar los trámites de constitución de estas instituciones y no legisló sobre los problemas de fondo antes descritos.

Con el espíritu de facilitar la creación de éstos, y dado que el artículo 42 de la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena prohibía nuevas inversiones extranjeras directas en la banca comercial y en las demás instituciones extranjeras, se invocó la excepción contenida en el artículo 44 de la misma Decisión. En efecto, el referido artículo 44 permitía aplicar normas diversas a los países receptores de capitales extranjeros cuando existían circunstancias especiales que lo justificaran. En este sentido, el Decreto Ley N° 748, haciendo uso de esa facultad, estableció que no se aplicaría el artículo 42 a las inversiones extranjeras directas en bancos de fomento, lo que en el hecho permitió la participación de tres bancos internacionales en el primer banco de fomento que se constituyó.

Esta norma, como se sabe, sólo tiene una importancia histórica por cuanto nuestro país se retiró del Pacto Andino, eliminando esta restricción a las inver-

siones extranjeras en bancos, medida que se concretó a través de los decretos leyes N°s. 1.641 y 1.642, ambos del 3 de enero de 1977.

D.L. N° 749 (Diario Oficial del 13 de noviembre de 1974).

Ordenó el aumento de los capitales de los bancos comerciales.

Dictó normas sobre fusión.

Promovió la regionalización de los bancos.

Aumentó el valor de las multas que se aplican a los bancos.

Este decreto ley obligó a aumentar los capitales de los bancos comerciales y promovió la fusión de estas instituciones para que tuvieran suficiente capacidad económica y competitiva. Así, exige un capital de E° 4.000.000.000.— para los bancos domiciliados en Santiago o Valparaíso y E° 1.000.000.— para los que estuvieran en otras ciudades. Los capitales mínimos vigentes a esa época se mantenían desde el D.F.L. N° 252, de 1960, en E° 2.000.000.— y E° 500.000.— dependiendo de su domicilio social. Si bien el texto del artículo 66 de la Ley General de Bancos conservó, hasta la dictación del D.L. 3.460, los capitales mínimos antes señalados, por el D.L. N° 818 y N° 1.638 se dispuso que estos capitales mínimos se reactualizarían anualmente por el Superintendente de Bancos, tomando en consideración especialmente las variaciones del Índice de Precios al Consumidor, y la tasa de cambio bancaria, a partir del 30 de junio de 1976. Tales capitales mínimos fueron derogados por el D.L. 3.460.

En lo relativo a las fusiones de bancos, dictó normas que facilitan los aspectos laborales y tributarios derivados de estas incorporaciones.

Como una implementación de la regionalización del país, dispuso que los bancos cuyo nombre contenía la designación de una ciudad, provincia o región de la República, deberían también tener su domicilio social en la región que correspondiera a dicho nombre. Esta disposición fue posteriormente derogada por el D.L. N° 3.345, de 29 de abril de este año. En el mismo orden de ideas se concedió la facultad al Superintendente para reglamentar los Consejos locales que debían pronunciarse sobre las operaciones que los bancos efectúan en las distintas regiones del país en las cuales mantienen sucursal. Hasta la fecha no se ha reglamentado el funcionamiento de estos Consejos.

Agravó, también, la sanción por infracción a la obligación de encaje; estas sanciones fueron materia de una nueva redacción por el Decreto Ley N° 1.847, de 4 de julio de 1977.

Finalmente, elevó a 150 sueldos vitales anuales la multa que el Superintendente de Bancos puede acordar en contra de las instituciones fiscalizadas por infracción a la Ley General de Bancos, a sus respectivos estatutos o a las órdenes legalmente impartidas por la Superintendencia, que no tuvieran establecida una multa especial. Esta multa fue posteriormente elevada, en el D.L. N° 2.099, a 5.000 Unidades de Fomento.

4.— DECRETO LEY N° 818 (Diario Oficial de 27 de diciembre de 1974).

Al igual que los textos anteriores, corresponde a un período de normalización del sistema bancario que aún se mantenía estatizado, en poder del Estado, con la decisión de transferirlo a la gestión privada. De allí que no contenga reformas sustanciales al giro bancario, sino que tan solo tenía por objeto, entre

otras cosas, definir el régimen de propiedad y de administración de los bancos y modificar la Ley General de Bancos y otras disposiciones conexas.

Los aspectos básicos de este decreto ley son los siguientes:

a) *Límites a las tenencias de acciones en bancos comerciales*: Estableció que las personas naturales o jurídicas no podían poseer en calidad de propietario o usufructuario, acciones de un banco comercial que representaran más del 1,5% del capital del respectivo banco y las personas jurídicas más del 3%. Estos límites fueron posteriormente derogados por el D.L. N° 2.099, de 1978, que debió atender las dificultades prácticas de controlar su aplicación. De esta manera se optó por reforzar las facultades de control de la gestión bancaria, contemplando severas sanciones por las infracciones a normas de publicidad y el incumplimiento de la presentación de informes, la transgresión de los límites de inversión y márgenes individuales de crédito, etc. Así, lo realmente importante en la actividad bancaria dejó de ser la tenencia de la propiedad de acciones bancarias, en beneficio del control de su gestión.

b) *Prohibición al sector público para invertir en la actividad bancaria comercial*. Consecuente con el principio de subsidiariedad, prohibió a partir de 1975 la inversión del sector público en acciones de bancos comerciales, norma que fue extendida por el D.L. N° 3.345 de reciente publicación, a la inversión en bancos de fomento y sociedades financieras, con excepción de la adquisición de acciones de bancos que funcionan en el extranjero.

c) *Directorio de los bancos comerciales*. Modificó el artículo 65 N° 15 de la Ley General de Bancos que disponía que el Directorio de los bancos debía componerse por entre 5 y 11 Directores con la posibilidad de nombrar dos suplentes. La modificación consistió en determinar un número fijo de 6 Directores y un representante de los trabajadores. El D.L. N° 3.345, de 1980, modificó esta constitución de los Directorios estableciendo un número de 9 Directores titulares, 8 elegidos por los accionistas, uno por los trabajadores y la posibilidad de nominar dos Directores suplentes.

d) *Inversión extranjera en bancos*. Como se recordará, el artículo 42 de la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, prohibía efectuar nueva inversión extranjera directa en el sector de los seguros, banca comercial y demás instituciones financieras.

Pues bien, el artículo 4° del D.L. N° 818 levantó esa prohibición haciendo uso de lo dispuesto en el artículo 44 de la misma Decisión, que prescribía que, en razón de circunstancias especiales, el país receptor podía aplicar normas diferentes a las establecidas en ella. En consecuencia, a partir de este decreto ley se permitió la inversión extranjera en la banca nacional y la apertura de sucursales de bancos extranjeros en el país.

Asimismo, modificó el artículo 30 de la Ley General de Bancos que se refiere a las sucursales de bancos extranjeros, en el sentido de que el capital que se le asigne a la sucursal pertinente debe ser efectivamente internado y convertido a moneda nacional en conformidad a las normas del D.L. N° 600, de 1974, Estatuto del Inversionista.

e) *Reactualización del capital mínimo de los bancos comerciales*. Tal como se señaló, el Decreto Ley N° 749 modificó el capital mínimo de los bancos comerciales establecido en el artículo 66 de la Ley General de Bancos; por su parte el D.L. N° 818 estableció que dicho capital se reajustaría en enero de cada año, por el Superintendente, tomando en consideración la variación del I.P.C. a partir del 30 de junio de 1974.

f) *Bancos de Fomento*. En un nuevo intento por facilitar el desenvolvimiento de estas instituciones, les permitió otorgar préstamos no sólo para proyectos sino también para gastos de explotación y los autorizó a que los préstamos a pequeños empresarios pudieran ser otorgados a menos de dos años y los créditos, en general, a plazos superiores a un año en vez de tres que era el plazo mínimo vigente.

g) *Bancos Hipotecarios*. Restringió la operación de estos bancos estableciendo que la recepción de dinero en carácter transitorio era permitida únicamente en las operaciones de letras hipotecarias.

5.— *DECRETO LEY N° 1.000 (Diario Oficial de 28 de abril de 1975).*

Facultad reglamentaria del Banco Central en las captaciones de fondos por instituciones financieras.

Modificó el artículo 80 de la Ley General de Bancos que establece la sanción aplicable al incumplimiento de la obligación de encaje.

Permitió suplir deficiencias en las facultades del Banco Central y Superintendencia de Bancos para fijar las condiciones a que deben sujetarse los bancos y las instituciones financieras, en general, en la captación de fondos del público, ya sea como mutuo, participación, cesión o transferencia de efectos de comercio o en cualquier otra forma.

Ambas normas fueron modificadas posteriormente. Las facultades que se reconocían al Banco Central fueron derogadas tácitamente por su nueva ley orgánica que contiene tales atribuciones, y las disposiciones sobre encaje, por un nuevo texto fijado por el Decreto Ley N° 1.847, del 4 de julio de 1977.

2° ETAPA: LEGISLACION DE LAS AUTORIDADES BANCARIAS (1975)

1.— *DECRETO LEY N° 1.078 (Diario Oficial de 28 de junio de 1975) que fija normas sobre autoridades monetarias, Consejo Monetario y Banco Central de Chile.*

Los aspectos más importantes de este decreto ley son los siguientes:

a) *Creación del Consejo Monetario*, integrado por los Ministros de Hacienda, Economía, el Director de Planificación Nacional, el Presidente del Banco Central y el representante del Presidente de la República.

El Consejo funcionará en el Banco Central de Chile y su objetivo principal es fijar las políticas cambiarias, de mercado de capitales, de comercio exterior y arancelaria, de cambios internacionales y del ahorro, en conformidad a las normas que le señale el Supremo Gobierno.

El Consejo Monetario ha desarrollado una actividad moderada en los últimos años debido a que la política monetaria ha sido objeto de una adecuada implementación por el Banco Central y, porque, además, se ha mantenido inalterable, con resultados satisfactorios, debido al equilibrio del presupuesto fiscal.

La creación del Consejo Monetario, como autoridad superior del Banco Central, puede interpretarse como la sustitución del Directorio del Banco Central que contemplaba la ley orgánica anterior, por un conjunto de ministros y repre-

sentantes del Presidente de la República que permita coordinar al sector económico.

b) Además, el Decreto Ley N° 1.078 estableció una nueva estructura del Banco Central de Chile radicalmente distinta a la que tenía hasta la entrada en vigor de este nuevo ordenamiento legal.

A continuación nos referiremos a los aspectos más sobresalientes de esta ley orgánica, cuyo análisis completo excede el propósito de esta evolución que estamos exponiendo:

La naturaleza jurídica del Banco Central fue consignada como la que corresponde a una institución autónoma del Estado, con personalidad jurídica propia y de duración indefinida. Como institución de derecho público, sólo puede realizar aquellas operaciones y ejercitar aquellas facultades que la ley expresamente le autoriza, a diferencia de la situación preexistente que le permitía cualquier actividad financiera que tuviera por finalidad el desarrollo económico del país. Entre estas facultades, le entrega la regulación de todo el sistema financiero, crediticio, de cambios internacionales y de comercio exterior. Se le mantienen las funciones de emisión de circulante, agente fiscal en el endeudamiento externo e interno y en las relaciones del Estado con los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano del Desarrollo, etc.

Además de estas características que se habían recogido de las leyes orgánicas anteriores, se le da autonomía en sus decisiones, salvo la consulta previa a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras sobre las regulaciones normativas financieras que acuerde.

Sin embargo, lo más sobresaliente es que la ley reconoció al Banco Central el verdadero carácter de autoridad monetaria, de manera tal que se le prohíbe la concesión de financiamientos al público y al Fisco.

En cuanto a estos últimos financiamientos, se refuerza posteriormente por el Decreto Ley N° 3.001, la prohibición para financiar al Fisco y adquirir títulos de su emisión.

Otra modificación importante en la Ley Orgánica del Banco Central, es el reconocimiento legal de un mecanismo de reclamo contra las resoluciones arbitrarias o ilegales que el banco adopte en perjuicio de los particulares, permitiéndole a éstos un procedimiento rápido y expedito ante la Corte de Apelaciones para reclamar de tales resoluciones y de las multas que se les apliquen.

Por último, la nueva Ley Orgánica marginó por completo a los particulares de la dirección del Banco y de la participación en el capital del mismo. Hasta la nueva ley, los bancos nacionales y extranjeros y los particulares eran accionistas del Banco Central, y como tales, tenían derecho a participar en el Directorio de esta Institución. La nueva Ley Orgánica eliminó ese Directorio y entregó la Dirección superior del Banco a un Comité Ejecutivo compuesto por tres personas de la designación exclusiva del Presidente de la República, con duración indefinida en sus cargos y remoción por la sola autoridad.

2.— DECRETO LEY N° 1.097 (Diario Oficial de 25 de julio de 1975). Ley Orgánica de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

En lo más importante, establece que el control ejercido tradicionalmente por la Superintendencia de Bancos sobre las empresas bancarias se extiende a las instituciones financieras en general. En consecuencia, corresponde a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la fiscalización del Banco

Central, del Banco del Estado, de las empresas bancarias, cualquiera sea su naturaleza, de las sociedades financieras, de las cooperativas de ahorro y crédito cuyas captaciones de fondos sean superiores a la cantidad que señale el Consejo Monetario, de toda entidad financiera cuyo control no esté encomendado por ley a otra institución, de los organismos de previsión bancaria, y de la Caja Central de Ahorros y Préstamos y Asociaciones de Ahorro y Préstamos en virtud de la reciente modificación introducida en su Ley Orgánica por la Ley N° 3.345.

En general, se dota a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de una nueva estructura jurídica que le permita cumplir sus funciones en forma ágil y eficiente, que se concilie con la creación del Consejo Monetario y la nueva estructura del Banco Central.

Posteriormente por el Decreto Ley N° 1.618 (Diario Oficial de 18 de diciembre de 1976), se modifica el Decreto Ley N° 1.097, particularmente en aspectos de remuneraciones y planta de su personal y se ampliaron sus atribuciones de fiscalización de instituciones incluyendo desde entonces a las sociedades auxiliares de cooperativa. Con esto, la única de su género, IFICOOP, pasó a ser controlada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

3ª ETAPA: FLEXIBILIZACION DEL SISTEMA Y FORTALECIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

1.— DECRETO LEY N° 1.171 (Diario Oficial de 5 de septiembre de 1975)

Modificó la Ley General de Bancos, la Ley sobre Bancos de Fomento, la Ley Orgánica del Banco Central y otras normas sobre instituciones financieras en las siguientes materias:

- Bancos Comerciales: Autorización de los Departamentos de Ahorro e Inversión.
 - Límites de inversión.
 - Balances al 31 de diciembre.
- Bancos de Fomento: Eliminación del plazo mínimo de un año para sus operaciones activas y pasivas.
 - Autorización para emitir letras de crédito.
- Disolución de bancos hipotecarios.
- Pone término al régimen de excepción de los márgenes de crédito e inversiones autorizados por los decretos leyes N°s. 231 y 749.
- Reactualización trimestral del capital y reserva de los bancos e instituciones financieras.
- Simplifica publicidad de Acuerdos del Banco Central y Consejo Monetario.

En efecto, sus aspectos más importantes son los siguientes:

a) *Bancos comerciales.* Permitió que los bancos comerciales pudieran operar en créditos y captaciones reajustables a plazos superiores a un año, a través de los departamentos de ahorro e inversión, los cuales quedarían regulados por el Consejo Monetario. Los créditos que se otorguen por estos departamentos no pueden exceder de 3 años ni ser inferiores a 1 año, y todas sus operaciones deben reflejarse separadamente en la contabilidad de la empresa.

Las inversiones que se realicen con cargo a captaciones de estos departamentos quedan al margen de los límites del artículo 83 de la Ley General de Bancos.

Por otra parte, de acuerdo al Decreto Ley N° 1.171, los Departamentos de Ahorro e Inversión debían mantener una reserva técnica equivalente al 30% de sus colocaciones en determinadas condiciones. Esta obligación fue posteriormente derogada por el Decreto Ley N° 2.099, de 1978.

Sin embargo, los Departamentos de Ahorro e Inversión no tuvieron un desarrollo de importancia, puesto que posteriormente por el Decreto Ley N° 2.099, fue autorizada la operación crediticia y de captación de los bancos a plazos superiores a un año. En el mismo sentido el Decreto Ley N° 3.345 modificó el artículo 83 de la Ley General de Bancos en cuanto a la posibilidad de captar ahorros a plazos superiores a un año mediante letras, pagarés, libranzas y contratos de mutuo. En consecuencia, no hay justificación en el mantenimiento de los Departamentos de Ahorro e Inversión.

Modificó los artículos 83 y 84 de la Ley General de Bancos en cuanto a las operaciones y límites de los bancos comerciales y puso término a los balances semestrales de los bancos, por los balances anuales al 31 de diciembre de cada año.

b) *Bancos de fomento*: Permitió a los bancos de fomento captar recursos a plazos inferiores a un año, por una cantidad que no exceda de las colocaciones que efectúen a los mismos plazos, y conceder créditos en moneda nacional a menos de un año plazo, siempre que el conjunto de ello no exceda del 10% de sus colocaciones totales.

Con el objeto de que pudieran servir de marco legal, receptor de los bancos hipotecarios, permitió a los bancos de fomento emitir letras de crédito.

c) *Bancos hipotecarios*. Dispuso la disolución de todos los bancos hipotecarios, al 31 de diciembre de 1976, permitiéndoles optar entre incorporar el todo o parte de su activo o pasivo a un banco de fomento o a una sociedad financiera existente o que se constituyan para este efecto o transformarse directamente en un banco de fomento o en una sociedad financiera. En esta parte, el Decreto Ley N° 1.171 es una indicación hacia una banca múltiple, dejando de lado algunas formas de instituciones especializadas.

En el hecho, los tres bancos hipotecarios existentes a la fecha del Decreto Ley N° 1.171 se transformaron en bancos de fomento.

d) *Sociedades financieras*. Facultó al Banco Central para autorizar (de acuerdo al Decreto Ley N° 1.078) a las sociedades financieras para captar recursos del público mediante la suscripción de mutuos y pagarés o la aceptación de letras de cambio.

e) *Otras modificaciones*. Derogó los decretos leyes N°s. 231 y 749 en la parte que permitía a la Superintendencia y al Banco Central establecer regímenes transitorios superiores a los márgenes individuales de crédito y de inversión de los bancos.

Modificó el Decreto Ley N° 1.078 sobre el Consejo Monetario y Banco Central en lo referente a la publicidad de sus acuerdos, designación de los representantes alternos del Consejo Monetario y otros aspectos que no inciden en el mercado de capitales.

Estableció que, para el solo efecto de los márgenes establecidos en relación al capital y reserva de las instituciones financieras, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras fijará trimestralmente revalorizaciones provisionales, en base a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor, siempre

que exceda del 10% del trimestre. Si es inferior, la referida variación se acumulará a la del o los trimestres siguientes. Esta reactualización fue posteriormente derogada por el Decreto Ley N° 3.345, como lo veremos más adelante, por ser innecesaria toda vez que el Superintendente en virtud de otra disposición podía efectuarlo cada vez que lo estimare pertinente.

Por acuerdo del Consejo Monetario tomado en sesión N° 3, publicado en el Diario Oficial de 9 de octubre de 1975, se aprobó el reglamento para el funcionamiento de los Departamentos de Ahorro e Inversión de los bancos comerciales.

2.— *DECRETO LEY N° 1.638 (Diario Oficial de 30 de diciembre de 1976).*

Modificó la Ley General de Bancos y otras disposiciones complementarias en los siguientes aspectos principales:

- Reserva bancaria: — Delito económico.
 - Mayores facultades de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
 - Presunciones.
 - Responsabilidad de los gerentes de las instituciones financieras.
 - Aumento de capital mínimo de sociedades financieras.
 - Regulación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito por el Banco Central.
 - Cuentas de Ahorro para la vivienda en bancos comerciales y de fomento.
 - Regulación de la intermediación de efectos de comercio por el Consejo Monetario.

Este decreto fue dictado en un momento de grave crisis del mercado financiero, derivada del funcionamiento de una cantidad de instituciones "informales" no autorizadas y de la constatación de irregularidades en algunas instituciones bancarias. Se caracteriza por sus aspectos sancionatorios y de fortalecimiento de las atribuciones de control del sistema legal. Los aspectos más determinantes son los siguientes:

a) *Reserva bancaria.* Dio un nuevo texto al artículo 34 de la Ley General de Bancos que establece la reserva bancaria o protección de la actividad bancaria, precisando sus alcances e infracciones para aquellos que actúen en la captación de dineros del público sin autorización legal.

— Declaró que las infracciones a esta disposición constituyen delito económico sancionable en la forma prevista en el artículo 8° del Decreto Ley N° 280 (penas de presidio menor en sus grados medio a máximo, esto es, 541 días a 5 años) y castigando al o los responsables si el público recibiere pérdidas, como autores del delito de estafa.

— Permitió que cualquier organismo público o privado denuncie, a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, las infracciones que se puedan cometer a esta disposición.

— Entregó a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras las facultades de inspección, que su Ley Orgánica le confiere, para investigar a los presuntos infractores aludidos en el artículo 34.

Vinculado a este mismo artículo, se modificó el artículo 3° transitorio del Decreto Ley N° 455, suprimiendo la posibilidad que existía para que los particu-

lares pudieran dedicarse, habitualmente, a realizar operaciones de crédito de dinero.

— Contempló responsabilidad del Gerente General de una institución financiera o quien haga sus veces, si omite contabilizar cualquier clase de operación que afecte el patrimonio o responsabilidad de la empresa.

b) *Normas sobre sociedades financieras*: Se fijó un nuevo capital mínimo para las sociedades financieras equivalente al 75% del capital exigido en un banco comercial con domicilio en Santiago, facultándose al Superintendente a rechazar sin expresión de causa el prospecto de formación de cualquier sociedad financiera.

c) *Facultad del Comité Ejecutivo del Banco Central para reglamentar las Cooperativas de Ahorro y Crédito*. Se estableció la atribución del Comité Ejecutivo del Banco Central para dictar las normas a que deben sujetarse el funcionamiento y las operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito, las que, a esa época, también atravesaban por una crisis. En ejercicio de esta facultad, el Comité Ejecutivo, en Sesión N° 1.119 (Diario Oficial de 31 de diciembre de 1976), estableció que estas cooperativas no podrían tener un pasivo superior a 20.000 U.F. y reglamentó sus operaciones.

Vinculado a las cooperativas de ahorro y crédito y demás cooperativas que capten cuotas de ahorro, el D.L. N° 1.651 facultó al Consejo Monetario para reglamentar el destino de estas cuotas, porcentaje máximo de captación, etc.

d) *Nuevas operaciones de los bancos comerciales y de fomento*. El artículo 8° de este Decreto Ley otorgó a los bancos comerciales, de fomento y al Banco del Estado de Chile, la facultad de recibir dinero en depósito de ahorro en cuentas individuales para la compra, construcción o reparación de viviendas, eximiéndose a los préstamos que se otorguen para este objeto, de la limitación del plazo de un año que señalaba el artículo 83 de la Ley General de Bancos, y liberando los depósitos del encaje previsto en el artículo 78 de la citada ley.

Sin embargo, en definitiva, estas cuentas de ahorro para la vivienda no tuvieron mayor desarrollo porque posteriormente se permitió la emisión de letras de crédito y la apertura de cuentas de ahorro sin el fin específico antes señalado.

e) *Faculta al Consejo Monetario para dictar normas sobre intermediación de efectos de comercio*. Se facultó al Consejo Monetario para dictar normas a que deben sujetarse la intermediación, la cesión o las ventas de efectos de comercio por parte de instituciones autorizadas. Esto permitió reglamentar las denominadas "operaciones de brokers", que se desarrollaban informalmente.

En ejercicio de esta facultad, el Consejo Monetario, en Sesión N° 9 (Diario Oficial de 31 de diciembre de 1976), dictó las "normas sobre intermediación financiera".

En la misma sesión, el Consejo Monetario acordó que quedarían sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras aquellas cooperativas de ahorro y crédito cuyas captaciones de fondos exceden del equivalente de 10.000 U.F.

Posteriormente, el Consejo Monetario en Sesiones N.os 9, 10, 12, 14, 16 y 17, acordó algunas modificaciones a estas normas.

3.— *DECRETO LEY N° 1.683 (Diario Oficial de 7 de enero de 1977). Establece normas sobre seguros y garantías para depósitos y captaciones de las instituciones financieras legalmente autorizadas.*

Este decreto ley estableció que las instituciones financieras legalmente autorizadas podían ofrecer por las obligaciones que contraigan provenientes de depósitos y captaciones mediante documentos de su propia emisión, un seguro de depósitos y captaciones, que debía regirse por un Reglamento que al efecto dictaría el Presidente de la República, dentro del plazo de 180 días contados desde la fecha de publicación de este decreto ley.

Mientras se dictaba ese Reglamento, se otorgó la garantía del Estado a dichas obligaciones, en moneda nacional, hasta por un monto de 100 Unidades Tributarias mensuales por acreedor.

Además, se dispuso que la liquidación de las instituciones financieras se efectuará por la persona que designe el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, y se sujetará a lo dispuesto en el Título VII de la Ley General de Bancos.

4.— *DECRETO LEY N° 1.847 (Diario Oficial de 4 de julio de 1977).*

En lo básico, tuvo por objeto promover el financiamiento de viviendas, luego de la quiebra del Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos. De allí que se legisló para permitir la participación de los bancos comerciales en el financiamiento de viviendas, a través de la emisión de letras de crédito sobre hipotecas constituidas a favor, pudiendo además adquirir por cuenta propia letras de crédito emitidas por otras empresas bancarias, en conformidad a las normas que señale el Consejo Monetario.

En ejercicio de esta facultad reglamentaria delegada en el Consejo Monetario, éste, en Sesión N° 15, publicada en el Diario Oficial de 20 de julio de 1977, dictó las normas sobre emisión de letras de crédito. Estas normas fueron modificadas en Sesiones N.os 16, 18, 20 y 21 del mismo Consejo.

Este Decreto Ley modificó además la forma de constituir encaje y permitió el encaje sobre períodos mensuales o quincenales en relación con el promedio de depósitos u obligaciones del mes o quincena precedentes, según lo determine el Banco Central de Chile. En la práctica no se ha aplicado esta disposición y se mantiene la obligación de encaje mensual sobre los depósitos del mismo mes.

5.— *DECRETO LEY N° 2.079 (Diario Oficial de 18 de agosto de 1978).
Texto Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile.*

Esta nueva Ley Orgánica dispuso que el Banco del Estado podía efectuar las funciones, actividades, operaciones e inversiones propias de los bancos comerciales y de fomento. En estos aspectos, la nueva Ley Orgánica no innova respecto a la situación anterior; sin embargo, no contempla disposiciones referentes a las operaciones de fomento agrícola e industrial. En consecuencia, esta institución sólo podrá otorgar créditos a la agricultura y a la industria en la misma medida que lo hacen los bancos comerciales y de fomento, ateniéndose al cumplimiento de las mismas normas.

La nueva ley puso término al monopolio de las cuentas de ahorro, de manera que en el futuro podrán desarrollar esta actividad los demás intermediarios financieros.

La nueva Ley Orgánica contiene varias disposiciones transitorias entre las cuales señala que podrá mantener por un período de 3 años la actividad destinada a comercialización de productos, insumos y otros bienes.

4ª ETAPA: CONSOLIDACION DE LAS POLITICAS DE UNIFORMIDAD

A.— DECRETO LEY N° 2.099 (Diario Oficial de 13 de enero de 1978).

Su objetivo fue seguir avanzando hacia la uniformidad de la legislación aplicable a las instituciones financieras en cuanto a la naturaleza de las operaciones que pueden realizar y los requisitos que deben cumplir. Además, pretendió perfeccionar las normas relativas a la fiscalización, publicidad e informes de auditoría.

A continuación se analizan las principales modificaciones introducidas por este decreto ley.

Modificaciones a la Ley General de Bancos.

- Sanciones a gerentes y directores de instituciones financieras sobre declaración y balances falsos.
- Sanciones a directores, funcionarios y auditores externos que desfiguren balances u otros documentos para dificultar fiscalización.
- Rebaja de encajes legales mínimos.
- Eliminación del plazo máximo de 1 año a los préstamos de bancos comerciales.
- Otorgamiento de avales y fianzas queda regulado por el Banco Central.
- Limitación del otorgamiento de garantías reconocidas por los márgenes individuales de crédito.
- Prohibición a los bancos comerciales de invertir en sociedades en comandita por acciones.

Extendió a todas las instituciones financieras constituidas o no como bancos comerciales, el artículo 26 de la Ley General de Bancos, relativo a las sanciones pecuniarias y privativas de libertad que pueden aplicarse a los directores y gerentes de una empresa que, a sabiendas, hubiesen hecho una declaración falsa sobre la propiedad y conformación del capital de una empresa, o aprobado o presentado un balance adulterado o falso, o disimulado su situación, especialmente las sumas anticipadas a directores o empleados.

Agregó un nuevo artículo, el artículo 26° bis, que estableció una sanción de carácter penal, presidio menor en sus grados medio o máximo, esto es, de 541 días a 5 años para los directores, agentes, funcionarios, empleados o auditores externos de las instituciones financieras que alteren o desfiguren documentos o antecedentes en los balances, libros, estados, cuentas, correspondencia u

otros documentos cualesquiera, o que oculten o destruyan estos elementos con el fin de dificultar, eludir o desviar la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Igual pena se aplica si, con el mismo fin, las personas antes señaladas proporcionan, suscriben o presentan esos elementos de juicio, alterados o desfigurados. La mencionada disposición establece que ella no excluye la obligación de las reglas previstas en los artículos 14 y 17 del Código Penal, sobre las personas responsables de los delitos y grados de participación criminal.

En materia de encaje, este decreto ley rebajó los porcentajes mínimos al 10% por los depósitos a la vista y al 4% por los depósitos exigibles a plazo, dándose así mayor flexibilidad al manejo de la política monetaria.

Por otra parte, se modificó el artículo 83 de la Ley General de Bancos, en lo referente a plazo máximo para préstamos y descuentos, permitiendo así los préstamos y descuentos de documentos de plazos superiores a un año.

La vigencia de la eliminación del plazo de un año quedó sujeta a que el Banco Central estableciera las relaciones entre las operaciones activas y pasivas de las instituciones financieras, en uso de la atribución que se le otorga por este mismo decreto ley.

Radicó en el Banco Central la regulación de la facultad de los bancos para avalar letras de cambio y otorgar fianzas simples y solidarias, antes de competencia de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Hizo más rigurosa la aplicación del margen individual especial para créditos garantizados, de manera tal que en el futuro sólo se entenderá por garantizados aquéllos sobre los cuales existan garantías reales, de un valor igual o superior a dicho exceso, no considerándose para dicho efecto, las garantías constituidas sobre letras de cambio, libranzas o pagarés comerciales.

Asimismo, se facultó a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para establecer normas sobre la valorización de las garantías para los efectos de la aplicación de los márgenes individuales.

El nuevo texto sobre márgenes individuales pretende dar un mayor resguardo a las entidades bancarias y sus colocaciones, evitando también la concentración de los recursos crediticios de una entidad bancaria en una misma persona natural o jurídica, sin las garantías adecuadas.

Finalmente, prohibió a los bancos comerciales efectuar inversiones en sociedades en comandita por acciones.

Representaciones de Bancos Extranjeros.

Derogó el inciso 3º del artículo 1º del Decreto Ley Nº 231 que permitía al Superintendente de Bancos ampliar las operaciones de las representaciones de bancos extranjeros. En el futuro, las representaciones de bancos extranjeros sólo podrán actuar como agentes de negocios de la casa matriz, no pudiendo en caso alguno efectuar actos del giro bancario, de acuerdo a lo que dispone el artículo 35 de la Ley General de Bancos.

Bancos de Fomento.

- Aumento de capital mínimo.
- Eliminación de limitaciones para operaciones activas y pasivas a más de 1 año.

Fijó el capital de los bancos de fomento que se instalaren en las provincias de Santiago o Valparaíso, en un 75% del capital exigido a un banco comercial con domicilio en dichas provincias.

Si se instalaren en el resto del país, se les exige un capital mínimo igual al de los bancos comerciales en la misma situación. Estas disposiciones sobre el capital de los bancos de fomento fueron modificadas por los D.L. 3.345 y 3.460, que los asimilaron a los bancos comerciales.

Se suprimen las limitaciones que afectaban a los bancos de fomento para contraer obligaciones o efectuar colocaciones a menos de 1 año.

Se deroga la exigencia de que al menos el 51% de las acciones de un banco de fomento debía pertenecer a personas naturales o jurídicas chilenas y otras limitaciones sobre máximo de acciones que individualmente podían pertenecer a una misma persona.

Se deroga la obligación que tenían los bancos de fomento de destinar a lo menos el 10% de sus colocaciones e inversiones entre empresarios cuyo capital y reservas no excediera de 100 sueldos vitales anuales escala A.

Por último, aplicó el Título XII de la Ley General de Bancos, a las operaciones hipotecarias que efectúen los bancos de fomento.

Modificaciones al Decreto Ley N° 818 de 1974, que reguló la propiedad y administración de los bancos.

- Restablecimiento de los Directorios y Juntas de Accionistas.
- Eliminación de los límites de tenencias de acciones.

A la dictación del Decreto Ley N° 2.099, prácticamente se había culminado el proceso de licitaciones y ventas al sector privado, de las acciones que el sector público había adquirido durante el período de estatización de la banca comercial. De allí, que era indispensable fijar los procedimientos para terminar con la intervención por delegados designados por el Superintendente de Bancos y restituir a las Juntas de Accionistas de los bancos la facultad de elegir los Directores de estas instituciones.

Con este objeto se estableció que una vez que los bancos comerciales cumplieran con el mínimo de capital y reservas fijado por la ley y que las acciones que representen a lo menos el 67% del capital se encuentren inscritas a nombre de las personas naturales o jurídicas del sector privado, tendrán a su cargo la administración de los bancos respectivos los Directorios que se designen por la Superintendencia de Bancos.

Eliminación de los límites del 1,5% y 3% de las acciones de los bancos.

Tal como lo habíamos advertido al analizar el Decreto Ley N° 818 que fijó los límites individuales del 1,5% y 3% a la tenencia de acciones bancarias, esta restricción había sido imposible de controlar de manera que no se justificaba su permanencia sin un descrédito de la norma legal. Por otra parte, las sucesivas normas dictadas a partir del año 1974 indicaban una especial preocupación del legislador para sancionar severamente y reforzar la fiscalización en la administración de los bancos.

De este modo, el Decreto Ley N° 2.099 vino a derogar los límites individuales de manera que en lo sucesivo no existieran límites para la adquisición de acciones bancarias.

Nuevos delitos.

- Presentación de datos falsos para obtener créditos.
- Captación de recursos y solicitud de préstamos por administración de empresas insolventes.

El artículo 7° del Decreto Ley N° 2.099 introdujo un nuevo inciso al artículo 8° del Decreto Ley N° 280, de 1974, sobre delito económico, estableciendo como delito y sancionando con la pena de presidio menor en su grado medio, al que obtenga créditos de instituciones financieras suministrando datos falsos o maliciosamente incompletos acerca de su identidad, actividades, estado de situación o patrimonio.

Asimismo, el artículo 8° de este decreto ley sancionó con el máximo de las penas señaladas en el artículo 467 del Código Penal, a los que, sabiendo o debiendo saber el estado de insolvencia en que se encuentran la o las empresas que administraren, solicitaren por sí o por interpósita persona, por medio de la prensa, radio o televisión o por cualquier otro medio de publicidad, dinero o valores en depósito o en préstamo; dicha pena se aumentará en un grado si el solicitante consumare su propósito.

Nuevas facultades para la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

- Dar información de carácter general sobre evaluación de activos y pasivos.
- Ordenar la corrección de la contabilización de inversiones.
- Disponer la publicación de notas sobre balances.
- Informes de Auditores Externos.

Aun cuando en la disposición anterior se prohibía dar noticias a personas extrañas a esa repartición, de cualquier situación de que hubiera tomado conocimiento en el desempeño de sus funciones, este decreto ley facultó a la Superintendencia de Bancos para dar información de carácter general acerca de la evaluación y calificación que efectúe de la composición de los activos y pasivos de las instituciones fiscalizadas, o de determinadas partidas de ellos.

Se facultó, además, al Superintendente de Bancos para ordenar que se rectifique o corrija el valor en que se encuentren contabilizadas las inversiones de las instituciones fiscalizadas, cuando establezca que dicho valor no corresponde al real, permitiéndose reclamar de dicha resolución por la vía judicial, dentro del plazo de 10 días desde que sea comunicada.

Lo anterior, sin perjuicio de las normas de valorización para la corrección monetaria de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Asimismo, se facultó a la Superintendencia de Bancos para ordenar, mediante normas de carácter general, que las instituciones fiscalizadas publiquen junto con los estados de situación, otros datos que a su juicio sean ne-

cesarios para la información al público y para exigir que auditores externos elegidos por sorteo se pronuncien sobre determinados balances o estados, sin que pueda ejercitar esta facultad con mayor frecuencia que una vez al año; además, se dispuso que el balance general de las instituciones financieras debe ser informado por auditores externos, cuyo informe deberá publicarse junto al balance general.

Otras disposiciones.

- Caducidad de depósitos.
- Faculta al Banco Central para reglamentar la emisión de títulos por las Asociaciones de Ahorro y Préstamo.

Además, el Decreto Ley N° 2.099 contiene una serie de disposiciones complementarias a la legislación financiera. Entre éstas, las más importantes son las siguientes: simplificó los procedimientos relativos al sistema de caducidad de los depósitos, captaciones o cualquier otra acreencia de las instituciones financieras a favor de terceros, derivados de sus giros financieros, incluyéndose los dividendos pagados a sus accionistas; y dispone finalmente que esas acreencias, cuando no son solicitadas, pasarán a renta general de la Nación, derogando el artículo 20 de la Ley 7.869, y toda otra disposición que se refiera a esta materia y aplicable a las instituciones financieras.

Modifica la Ley 16.807 que regula la Caja Central de Ahorros y Préstamos y a las Asociaciones de Ahorro y Préstamos, dejando expresamente establecido que las asociaciones de ahorro y préstamo quedan sujetas a las normas que dicta el Consejo Monetario para emitir y colocar en el público, bonos, pagarés u otras clases de títulos de créditos e inversión. Dispuso asimismo, que la emisión de las letras hipotecarias por dichas asociaciones se hará de conformidad a lo dispuesto en el Título XII de la Ley General de Bancos.

B.— DECRETO LEY N° 3.001 (Diario Oficial de 27 de diciembre de 1979).

- Excepciones a la Cuenta Unica Fiscal.
- Restricciones al Banco Central para financiar al Fisco.

Dentro de las normas contenidas en este texto se destacan las siguientes, que tienen incidencia en la intervención financiera:

1ª Facultó al Ministro de Hacienda para eximir a los servicios, instituciones y empresas del Estado de su obligación de mantener recursos en la Cuenta Unica Fiscal, pudiendo el Banco Central dictar normas especiales para los encajes de las instituciones exceptuadas, y

2ª Modificó la Ley Orgánica del Banco Central en el sentido de prohibirle conceder créditos al Fisco, impidiéndole, asimismo, adquirir para sí pagarés descontables de la Tesorería General de la República u otros documentos emitidos directamente por el Fisco.

Este decreto ley constituye una consolidación del proceso gradual, pero sostenido, de modernización de la estructura que sirve de marco legal a los intermediarios financieros.

El objetivo central de este decreto ley es propender a la competencia entre las distintas clases de intermediarios financieros y facilitar las funciones normativas y fiscalizadoras de la autoridad, mediante la uniformación de las regulaciones de los bancos comerciales, de fomento y sociedades financieras. Por lo mismo, se elimina una serie de funciones privativas y constitutivas de estancos que perjudicaban a algunos intermediarios en beneficio de otros.

Es así como al mismo tiempo que se amplía, moderadamente, el giro de los bancos comerciales autorizados —operaciones de underwritings, financiamiento a comitentes de comisiones de confianza, emisión de letras de crédito para fines no habitacionales, liberación de ciertos márgenes para las inversiones en bancos extranjeros, etc.—, se extiende a los demás intermediarios gran parte de las disposiciones aplicables a la banca comercial.

Al tratar de eliminar los marcos rígidos que entraban la competencia, se tuvo presente la necesaria apertura del sistema bancario chileno que por efectos de los límites de inversiones se encontraban imposibilitados de adquirir el control de un banco extranjero. En este sentido se han eliminado los márgenes individuales de inversión para la creación o adquisición de bancos extranjeros.

En lo sucesivo se podrá afirmar que la diferencia sustancial entre bancos comerciales y de fomento es el privilegio de aquéllos para abrir cuentas corrientes a terceros. Estos últimos pueden también emitir bonos o debentures y acciones con privilegio. Por otra parte, las dos clases de bancos difieren, esencialmente, de las sociedades financieras en una mayor relación deuda-capital (20 a 1 en vez de 15 a 1); capital mínimo (las financieras tienen el 50% del capital de los bancos con domicilio en Santiago) y en la prohibición, para estas últimas, de las comisiones de confianza, operaciones de comercio exterior y los underwriting.

De otro lado, se amplían las funciones de las sociedades financieras en letras de crédito y captación de depósitos. Con anterioridad no podían captar mediante depósitos ni emitir letras de crédito.

En el mismo orden de ideas y, además, para simplificar el manejo de la ley, se incorporan a un solo cuerpo legal —la Ley General de Bancos— las disposiciones aplicables a los bancos de fomento y de sociedades financieras, las cuales se encontraban dispersas en diferentes textos.

Es importante destacar que como resultado del ordenamiento aludido, se eleva a rango de ley la normativa de las sociedades financieras. Al respecto, debemos recordar que estas instituciones, de acuerdo a lo dispuesto en los decretos leyes 455, de 1974, y 1.171, de 1975, habían quedado entregadas a la regulación modificable por la decisión del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Otra de las finalidades del decreto ley en comento —y en el contexto de facilitar las funciones normativas y fiscalizadoras de la autoridad— es la centralización del control y regulación de la Caja Central de Ahorros y Préstamos y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, en el Banco Central y en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, respectivamente.

Por último, se introducen algunas modificaciones a la Ley Orgánica del Banco Central de Chile que clarifican su situación tributaria, luego de haberse

demostrado lo inconducente e impracticable de la aplicación del impuesto a la renta al Instituto Emisor; también se le elimina el manejo que éste efectuaba de la Cámara de Compensación de Cheques. En el futuro, esta función será reglamentada por el Banco Central, pero su operación deberá llevarse a cabo por una asociación de los bancos comerciales u otro tipo de organización que se constituya al efecto.

A continuación nos referiremos a las principales disposiciones de este decreto ley:

1.— Disposiciones sobre directorios, incompatibilidades y propiedad bancaria.

a) *Incompatibilidades de los directores.*— El nuevo texto del N° 10 del artículo 65 de la Ley General de Bancos extiende las incompatibilidades actualmente vigentes para ser director de un banco que afectan a los empleados de designación del Presidente de la República, a los parlamentarios, a los directores de más de dos sociedades anónimas, etc. En efecto, la incompatibilidad de los directores de bancos se extiende a los empleados o directores de cualquier institución financiera y a los funcionarios o empleados de cualquier institución fiscal, semifiscal, organismos autónomos del Estado y, en general, de cualquier servicio público creado por ley, como asimismo de las empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción o, en las mismas condiciones, representación o participación. Estas incompatibilidades no alcanzan a quienes desempeñan cargos de enseñanza superior, secundaria o especial.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3° transitorio de este Decreto Ley, las personas que resulten afectadas por las incompatibilidades antes mencionadas, deberán optar en el término de 90 días por uno de los cargos incompatibles, bajo sanción de cesar de pleno derecho en todos los cargos incompatibles.

Esta ampliación de las incompatibilidades persigue eliminar los conflictos de intereses entre los directores de instituciones financieras y los empleados públicos del sector estatal, en momentos en que se ha ido eximiendo de la Cuenta Unica Fiscal a diversas instituciones públicas, permitiendo de esta manera que el sector público pueda también utilizar los servicios de la banca privada (Art. 24 del D.L. 3.001, de 1979, D.S. de Hacienda N° 238, Diario Oficial de 16-04-80).

b) *Número de directores e integrantes de las comisiones ejecutivas de créditos.*— El nuevo texto del N° 7 del artículo 65 de la Ley General de Bancos eleva el número de directores de siete miembros en la actualidad a nueve, incluyéndose uno de ellos como representante laboral. Se contempla la posibilidad de nombrar dos directores suplentes, además de los nueve directores titulares.

Para armonizar esta nueva composición del directorio con las comisiones ejecutivas de éstos, que aprueban créditos, se eleva de cuatro a cinco miembros el número de integrantes de estas comisiones previstas en el artículo 44 de la Ley General de Bancos.

c) *Prohibición del sector público para adquirir acciones bancarias.*— De acuerdo al N° 17 del artículo 65 de la Ley General de Bancos, a partir del D.L. 818 se prohibió al sector público en general, definido conforme al número antes señalado, para invertir en acciones de bancos comerciales. La nueva redacción de esta disposición significará extender la restricción de propiedad accionaria

del sector público a bancos de fomento y sociedades financieras. Sin embargo, debe señalarse que esta disposición entra en vigencia el 31 de diciembre de 1980 (artículos 1º y 2º transitorios del D.L. 818, de 1974, reemplazados por el artículo 5º del D.L. 2.099, de 1978).

De esta manera, la intermediación financiera privada del sector público se efectuará por aquellas instituciones que han sido creadas por ley con este propósito, como es el caso del Banco del Estado, que además de sus funciones privativas se encuentra investido de todas las atribuciones de los bancos de fomento y sociedades financieras.

Con la vigencia de esta restricción del sector público se resguarda, por ley, de la vía resquicial utilizada por el Gobierno anterior para estatizar la banca comercial.

Cabe señalar que esta norma entra en aplicación luego de haberse dictado una nueva Ley Orgánica del Banco del Estado, el D.L. 2.079, de 1978, que lo ha liberado de una serie de restricciones y gravámenes que afectaban su giro financiero, competitivamente. Asimismo, la disposición en análisis, que afianza el principio de subsidiariedad del Estado, regirá cuando nos encontremos en los finales de la normalización y privatización de la propiedad de los bancos comerciales. Es así como a esta fecha, el sector público controla mayoritariamente la propiedad de un solo banco.

2.— Encaje e Inversiones en Oro.

Como es sabido, el encaje para los depósitos y obligaciones en moneda nacional puede constituirse en moneda de oro chilena y en billetes y monedas de curso legal en el país. El decreto ley en comento elimina del artículo 79 de la Ley General de Bancos al oro como medio de constituir encaje. Lo anterior se debe a que la volubilidad de su precio lo hace inadecuado desde el punto de vista de la autoridad, como unidad de encaje. En efecto, no es razonable fijar un encaje para operaciones en moneda nacional si éste puede constituirse en monedas de oro cuya valorización depende de factores externos que nada tienen que ver con los propósitos de liquidez y control monetario que han sido calculados sobre la base de unidades de cuenta fija, como la moneda de curso legal.

Con el objeto de aclarar las inversiones en oro y fijar el margen pertinente se complementa el actual N° 13 del artículo 83, estableciéndose la aplicación del margen global de inversiones de los bancos para las adquisiciones de oro.

3.— Infracciones a la Relación Deuda-Capital.

El nuevo texto del artículo 81 mantiene la aludida relación en veinte veces, aumentando y facilitando la aplicación de la multa que recae sobre las empresas que se excedan del límite. En lo sucesivo, la sanción será del 2 por mil sobre el exceso por cada día de exceso. En el texto anterior, la multa no operaba automáticamente sino que permitía a la entidad infractora encuadrarse dentro del plazo de 30 días, sin multa. Vencido este plazo, que podía prorrogarse por el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, la sanción era del 2 por mil por cada diez días en que se hubieran mantenido compromisos en una cifra superior al límite permitido.

Puede vincularse la automatización en la aplicación de estas sanciones a la política de una mayor eficiencia y voluntad de eliminar facultades discrecionales

les. Asimismo, hay que considerar que el incremento de la actividad bancaria debe significar un incremento de la relación deuda-capital de los bancos, los que actualmente se encuentran, en promedio y moderadamente, por debajo del máximo legal.

4.— Modificación al artículo 83 de la Ley General de Bancos que indica las operaciones comprendidas dentro del giro bancario

El decreto ley en comento no altera el actual esquema de la Ley General de Bancos en lo relativo a señalar taxativamente, y en especial en su artículo 83, cuáles son las operaciones autorizadas. De allí que las modificaciones que se introducen a la disposición aludida tienen por objeto complementar algunas de las normas existentes y ampliar otras.

a) *Utilización de letras de cambio, pagarés y contratos de mutuo por captaciones.* Con el propósito de complementar el N° 1 del artículo 83 se agregan, como medios alternativos de la recepción de depósitos, las captaciones mediante aceptaciones de letras de cambio, suscripción de pagarés y contratos de mutuos.

Se ha estimado razonable incluir expresamente estos instrumentos de captación, los que serán utilizados a conveniencia de las instituciones, como alternativos de los certificados de depósitos.

b) *Operaciones de underwritings y servicios financieros.*— El decreto ley en comento agrega dos nuevas funciones al giro de los bancos comerciales, incorporando los números 11 bis y 12 bis al artículo 83.

El número 11 bis contempla la función de underwriting en la gestión y la colocación garantizada de acciones, bonos, debentures y otras obligaciones de sociedades anónimas chilenas. El número 11 bis dispone, además, que los montos garantizados por el banco deberán incluirse en el margen global de las inversiones del propio artículo 83 y en los márgenes individuales del artículo 84, N° 9, uno de los cuales también se modifica según se expone más adelante.

El nuevo artículo 12 bis recoge una norma que también, en forma parecida, se encontraba en la Ley de Bancos de Fomento, en cuya virtud los bancos nacionales pueden actuar de agentes financieros de instituciones nacionales y extranjeras para colocar recursos en el país.

Se estiman de interés estos nuevos servicios financieros, que permitirán a los bancos tomar compromisos firmes para colocar y efectuar mercado secundario de títulos de mediano y largo plazo emitidos por sociedades.

La incorporación de estos mecanismos, que antes eran privativos de los bancos de fomento, podrá redundar en un mayor desarrollo del mercado de valores y en ampliación del capital accionario de las sociedades anónimas.

c) *Operaciones de letras de crédito.*— Sobre esta materia nos extendemos más adelante. Sin embargo, debemos señalar por el momento, que se elimina la restricción contenida en el N° 3 bis del artículo 83 que impedía a los bancos comerciales emitir letras de crédito con propósitos distintos de la adquisición, reparación, ampliación y construcción de viviendas.

En consecuencia, en lo sucesivo, los bancos comerciales, de fomento y sociedades financieras podrán emitir letras de crédito con igualdad de finalidades y sin la restricción antes mencionada.

d) *Adquisición de acciones de bancos extranjeros.*— De acuerdo a las normas vigentes, sólo los bancos comerciales podían adquirir acciones de bancos

extranjeros, debiendo imputar estas adquisiciones al margen global de inversiones. Sin embargo, les estaba prohibido excederse en estas inversiones, del 10% de su capital y reservas, incluyéndose en la cantidad resultante cualquier otro valor mobiliario de la sociedad cuyas acciones se trata. Por otra parte, el total de inversiones en una sociedad anónima no puede exceder del 10% del capital de la entidad emisora de las acciones.

La modificación que se introduce en el N° 15 del artículo 83 consiste en permitir este tipo de inversiones a los bancos comerciales, de fomento y sociedades financieras. Además, se eliminan las restricciones que se derivan de los márgenes individuales del 10% antes señalado, de aplicación general para la inversión en sociedades y que en el futuro no regirán para las acciones en la banca extranjera. Con todo, subsiste el límite global para todas las inversiones (del 100% del capital y reservas del banco respectivo) —artículo 83 inciso 2°—. En lo relativo a la forma de concretar estas adquisiciones, se mantiene el requisito de una autorización previa y se agrega a la necesaria conformidad del Banco Central la aprobación de estas inversiones por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Debe considerarse que la exclusión de los márgenes del N° 9 del artículo 84 resultaba indispensable para colocar a la banca nacional en igualdad de competencia con la banca internacional, la que por efectos de no tener esta restricción puede estar presente simultáneamente en los distintos países que conforman el mercado internacional, a través de bancos constituidos en el exterior y que les pertenecen en un 100%.

5.— Márgenes de crédito e inversiones.

a) *Márgenes de crédito.*— El artículo 84 de la Ley General de Bancos consigna en su número 1 diversos límites individuales de crédito. Las modificaciones que se introducen tienen por objeto simplificar estos márgenes, de la siguiente manera:

— Se mantiene el 5% del capital y reservas del banco como monto máximo de los créditos directos e indirectos, sin garantías para una misma persona natural y jurídica, sin distinguir si se trata o no de sociedades anónimas.

— Se eleva de un 10% a un 25%, como regla general, el límite de créditos a personas naturales y a todas las personas jurídicas, siempre que se hubieren constituido garantías reales en la porción que excede al 5% antes señalado. Anteriormente, las sociedades anónimas y corporaciones de derecho público podían obtener créditos por el 10% del capital y reservas del banco sin garantías y un 25% de éstos si constituyen garantías. Por otra parte, el límite de las personas naturales y de las demás personas jurídicas distintas de las sociedades anónimas y empresas de derecho público alcanzaba solamente al 10% del capital y reservas del banco cuando se otorgaban garantías reales.

— Se mantiene el concepto de no considerar como garantía para los efectos de los márgenes del artículo 84, las constituidas sobre letras de cambio, libranzas o pagarés comerciales.

— Se mantiene en un 20% y se rebaja de un 50% a un 40% —todos en relación al capital y reservas del banco respectivo y dependiendo de si han constituido o no garantías reales— el límite de créditos concedidos en moneda extranjera para exportaciones y para importaciones de materias primas, artículos de consumo esencial y bienes de capital.

— Se elimina la facultad del Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras para aumentar a un 30% y a un 75% del capital y reservas de un

banco, dependiendo también de si había o no garantías reales, el límite de créditos para exportaciones y para importaciones de bienes de capital.

— Se fija un nuevo límite del 30% del capital y reservas del banco respectivo, como máximo de los créditos que pueden otorgarse entre sí las instituciones financieras, no exigiéndose garantías.

La flexibilidad de los créditos interfinancieros es un instrumento congruente con las rebajas en las tasas de encaje y la política del Banco Central de retirarse del financiamiento de las instituciones intermediarias.

No obstante la vigencia inmediata de las modificaciones de este decreto ley, el artículo 2º transitorio dispone que los créditos otorgados por bancos y sociedades financieras dentro de los márgenes vigentes con anterioridad, podrán renovarse y mantenerse en la misma forma en que fueron contratados.

b) *Márgenes de inversiones.*— Vinculado a la operación de underwriting y para facilitar las suscripciones a firme y el otorgamiento de garantías en la colocación de bonos y debentures, se aumenta a 20% el margen individual del 10% del capital y reservas de un banco como máximo de las inversiones que éstos pueden hacer en valores mobiliarios de una misma sociedad. A este límite —que se contempla en el Nº 9 del artículo 84— ya nos habíamos referido en la letra d) del Nº 4 de este informe. Se mantienen, en todo caso, el límite del 10% del capital de la sociedad emisora y el margen global de inversiones al que también nos habíamos referido.

Este aumento resultaba necesario si a las funciones que actualmente desempeñan los bancos se les agrega la de efectuar operaciones de underwriting. Si no se flexibiliza este margen es difícil impulsar estas operaciones.

6.— *Operaciones con letras de crédito.*

Hemos señalado que se ha liberalizado el objeto de las letras de crédito anteriormente restringido a la adquisición y construcción de viviendas. Además, el decreto ley en comento agrega dos nuevos conceptos sobre el particular.

En primer lugar clarifica, para evitar equivocaciones, que su denominación es el de "letras de crédito" y no "letras hipotecarias". Esto se debe a que el nombre de letras hipotecarias puede inducir a error a los inversionistas, en el sentido de pensar que éstas están vinculadas directamente con la hipoteca que les sirvió de antecedente, en circunstancias que no es así, ya que la hipoteca se constituye en favor del banco, el cual contra la cartera hipotecaria emite las letras correspondientes, cuyo servicio se efectúa por el banco emisor como único obligado frente al tenedor de estos instrumentos. De esta manera, el decreto ley que se comenta ordena hacer las correcciones pertinentes en los términos "obligaciones hipotecarias" y "letras hipotecarias" por "letras de crédito".

En segundo lugar, se modifican las normas de liquidación y quiebra de los bancos en lo concerniente a la cartera hipotecaria, de manera que se incorpora un nuevo inciso 2º al artículo 55 que habilita al síndico o liquidador para transferir la cartera de créditos hipotecarios derivados de letras de crédito a otra institución financiera, la que deberá hacerse cargo del pago de las letras. Este privilegio de los acreedores de letras de crédito resulta necesario, dado que se trata de una inversión a largo plazo y que al no buscarse esta solución demostraría y dificultaría innecesariamente el proceso de liquidación de un banco. Como es obvio, esta innovación que separa estas obligaciones de la masa de los acreedores transforma a las letras de crédito en un título de mayor seguridad para el caso de liquidación. Es probable que en lo sucesivo los bancos deban

contabilizar separadamente con mayor explicitación en los balances este tipo de colocación o inversiones.

7.— Eliminación del plazo de las autorizaciones de los bancos comerciales.

Como es sabido, por efectos del actual artículo 63 de la Ley General de Bancos, todas las autorizaciones para el funcionamiento de los bancos comerciales se extinguirán el 30 de junio del año 2000, pudiendo prorrogarse por el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras en períodos sucesivos de 30 años. En lo sucesivo, la vigencia de las autorizaciones para funcionamiento de los bancos quedará sometida a los plazos que contemplan sus estatutos y a las normas generales aplicables a las sociedades anónimas. De esta manera, se ha puesto un resguardo frente a una discrecional negativa de prórroga en la existencia de un banco, por parte del Superintendente del ramo. Asimismo, se evitará que se encuentren en un solo período los vencimientos de las autorizaciones de las entidades intermediarias.

8.— Eliminación de la prohibición de prestar para hacer inversiones en bienes administrados en Comisiones de Confianza

Como resultado de existir libertad para la asignación del crédito y para convenir la tasa de interés, no se divisa razón para mantener la actual prohibición contenida en el N° 6 del artículo 84, que impedía a los bancos otorgar créditos para bienes entregados en comisiones de confianza. Esta prohibición se consignó, en 1960, cuando la tasa de interés era negativa y fijada por la autoridad. Se pretendió evitar que con este mecanismo se obtuvieran aparentes remuneraciones por el servicio de la comisión de confianza, que en realidad correspondían a tasas encubiertas para eludir los topes fijados por los intereses.

Vinculado a esta derogación se abroga también, en el artículo 4° del decreto ley en comento, el artículo 196 de la Ley N° 16.617, que excepcionalmente autorizaba créditos para viviendas acogidas al D.F.L. N° 2, de 1961, sobre las cuales existiera una comisión de confianza. Ya no hay razón para esta excepción si se autorizan los financiamientos para cualquier tipo de viviendas.

A continuación nos referiremos a las nuevas disposiciones aplicables a los bancos de fomento y sociedades financieras.

9.— Legislación sobre bancos de fomento.

Conforme ya lo habíamos advertido, se incorpora un nuevo Título XIII a la Ley General de Bancos que contiene, en sus artículos 107, 108 y 109, las normas particulares a los bancos de fomento.

Ahora bien, las disposiciones contenidas en el nuevo Título XIII disponen la aplicación de las normas de los bancos comerciales a los bancos de fomento con tres excepciones:

a) Les impide recibir depósitos en cuentas corrientes debido a que se ha considerado universalmente que el manejo de la cuenta corriente es exclusiva de los bancos comerciales.

b) Les permite emitir acciones con privilegios (mayor poder de votaciones y normas particulares para la devolución de aportes en la liquidación etc.) para facilitar su formación, y

c) Los autoriza expresamente para emitir bonos o debentures sin garantía, para facilitar sus aumentos de capital de trabajo y de su capital de acciones por la vía de la convertibilidad de los debentures en acciones.

La gradualidad con que se ha ido legislando en materia financiera, la no existencia en la legislación comparada de bancos de fomento con cuentas corrientes y seguramente la intención de no forzar el desaparecimiento de los bancos de fomento, han sido, probablemente, los propósitos que han llevado al legislador a mantener estas diferencias entre bancos de fomento y comerciales.

En consecuencia, se ha puesto término a las normas rígidas que estaban vigentes para estos bancos y que los circunscribían al "financiamiento de proyectos", impidiéndoles prestar para capital de trabajo o para créditos de consumo. De esta manera, el giro de los bancos de fomento será igual que el de los bancos comerciales con las tres excepciones antes señaladas. Con todo, los bancos de fomento deben incluir en su razón social la expresión "Banco de Fomento".

También se pone término a las disposiciones especiales sobre relación deuda-capital, capitales mínimos, límites de crédito, inversiones, captaciones, directorios, imposibilidad de actuar en comisiones de confianza, etc. En todas estas materias, como ya se ha dicho, rigen las normas aplicables a los bancos comerciales.

Sin perjuicio de la aplicación inmediata del decreto ley en comentario, el artículo 1º transitorio dispone que los bancos de fomento podrán conservar por dos años las inversiones que adquirieron conforme a los márgenes de la Ley Nº 16.253 y que no se encuadren en los nuevos límites de aplicación general.

10.— Legislación sobre Sociedades Financieras.

Al igual que como se explicó respecto de los bancos de fomento, se incorpora a la Ley General de Bancos un nuevo Título XIV de legislación aplicable a las sociedades financieras.

Hasta la dictación de esta ley, las sociedades financieras se regían por las disposiciones sin rango de ley, que podían dictar la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y, en algunas materias, el Banco Central de Chile. Así el Título XIV, que se extiende desde el artículo 110 al 115, constituye una mayor seguridad jurídica para la existencia y funcionamiento de estas entidades.

10.1 Concepto: En dictamen del artículo 110, se define a las sociedades financieras como sociedades anónimas, cuyo único y específico objeto social es actuar como agentes intermediarios de fondos y realizar las operaciones que les autoriza el Título XIV. Se agrega, además, que su nombre debe contener la palabra "Financiera".

10.2 Capital mínimo y relación deuda-capital (Arts. 112 y 115).— El capital mínimo de las sociedades financieras que rige actualmente, corresponde al 50% del establecido para los bancos, esto es, 200.000 U.F., ello, en virtud de la modificación establecida por el D.L. 3.460.

La relación deuda-capital para estos intermediarios se fija en quince veces su capital y reservas. De esta manera, el artículo 115 dispone que el total de compromisos para con terceros de las financieras no podrá exceder de quince veces su capital y reservas.

Esta norma particular podría fundarse en la existencia de un menor capital mínimo para las sociedades financieras en relación con los demás intermediarios.

Probablemente, por error, se establece como sanción a la infracción de la relación deuda-capital de las financieras en 1 por mil sobre el exceso, a diferencia de igual situación en bancos de fomento y comerciales, que se castiga con un 2 por mil.

10.3 Disposiciones legales aplicables.— Los artículos 111 y 113 disponen que les serán aplicables las normas de los bancos, siempre que sea procedente y, además, las disposiciones del Código de Comercio. Con todo, no rigen para estas sociedades el D.F.L. N° 251 sobre sociedades anónimas y las siguientes disposiciones de la Ley General de Bancos, aplicables a los bancos comerciales:

- a) Título VI que los habilita para mantener departamentos de comisiones de confianza;
 - b) Artículos 29, 30, 35 y 47 aplicables a las sucursales y representaciones de bancos extranjeros que se autorizan para funcionar en el país;
 - c) Artículo 44 sobre comisiones ejecutivas de crédito;
 - d) Artículo 62 que define a los bancos comerciales;
 - e) Artículo 65 N° 7 sobre composición de los directorios, rigiendo entonces las normas generales de las sociedades anónimas;
 - f) Artículo 66 inciso 1° que fija el capital mínimo de los bancos;
 - g) Artículo 68 que establece el requisito de cumplir con el capital mínimo de bancos que funcionen en Santiago o Valparaíso, para los bancos regionales que deseen abrir oficinas en cualquiera de las dos ciudades antes señaladas;
 - h) Artículo 81, sobre relación deuda-capital, y 83 N° 1, en cuanto a que no pueden mantener cuentas corrientes bancarias;
 - i) Artículo 83, N°s. 6, 7, 9, que autoriza a los bancos para realizar, respectivamente, operaciones de cambios internacionales, emitir cartas de crédito y emitir letras, libranzas, órdenes de pago y giros contra sus propias oficinas y corresponsales. Esta excepción se configura dentro de la exclusión de las operaciones de comercio exterior para las sociedades financieras.
- No obstante lo señalado en esta letra, el artículo 114 permite a las sociedades financieras efectuar operaciones de cambios internacionales, con autorización del Banco Central.
- j) Artículo 83, N°s. 10, 11, 11 bis y 12 bis, sobre boletas de garantía, custodia de valores, operaciones de underwriting y agencias financieras.

En consecuencia, puede afirmarse que la Ley General de Bancos permite a las financieras las mismas operaciones que a los bancos comerciales, salvo la cuenta corriente bancaria, underwriting, operaciones de comercio exterior, boletas de garantía, custodia de valores y comisiones de confianza. Estas restricciones existían hasta la publicación de este decreto ley, de manera que también se puede concluir que la nueva legislación amplía su giro en lo concerniente a letras de crédito que antes no podían emitirse por estas sociedades y a la captación de depósitos.

Cabe recordar que la regulación inicial de las financieras (Resolución 26 del Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, publicada en el Diario Oficial de 10 de diciembre de 1974) había fijado una relación deuda-capital de cinco veces, pudiéndose elevar a seis, si el exceso correspondía a obligaciones contingentes. Asimismo, se había prohibido realizar operaciones de cambios internacionales y se les habían fijado normas especiales sobre inversiones, límites de créditos, etc.

11.— Modificaciones a Ley Orgánica del Banco Central de Chile.

Los artículos 5º y 7º del decreto ley en informe modifican, respectivamente, el D.L. Nº 1.078, de 1975, orgánico del Banco Central y su situación tributaria en lo concerniente al impuesto a la renta.

Las modificaciones a la ley orgánica dicen relación, en general, con su funcionamiento interno, salvo en aquello que facilita el procedimiento de reclamación judicial en contra de sus acuerdos y la operación de la Cámara de Compensación de cheques y otros valores.

a) En efecto, se reemplaza el Nº 5 del artículo 19 que imponía al Banco Central la obligación de actuar como Cámara de Compensación por cheques cobrados en Santiago y en las demás ciudades en que tenga sucursal. El nuevo texto circunscribe la función del Banco Central, para estas materias, a la autorización de la creación y reglamentación de las cámaras compensadoras de cheques.

Para un mejor conocimiento podríamos describir a las Cámaras de Compensación como el sistema mediante el cual se reúnen los diversos bancos de una misma plaza con el objeto de proceder al canje de cheques y demás documentos que han recibido los unos en contra de los otros y al pago de las diferencias que resulten de la compensación de dichos valores.

b) Para facilitar la resolución y fallo del recurso de ilegalidad contra los acuerdos del Comité Ejecutivo, se agrega al artículo 37 del Decreto Ley Nº 1.078 un inciso que otorga preferencia para la vista y fallo del recurso correspondiente.

c) Finalmente, se reemplaza el actual texto del inciso 2º del artículo 49 que rigidizaba los procedimientos de inutilización de billetes exigiendo la presencia de ministros de fe y el registro de los billetes inutilizados. La nueva norma ordena al Banco Central adoptar medidas de control y seguridad adecuadas para este propósito sin imponer las rigideces.

12.— Traspasa funciones de la Caja Central de Ahorros y Préstamos al Banco Central de Chile y a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y somete a la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos a la regulación y control, respectivamente, del Banco Central y de la Superintendencia del ramo.

El artículo 8º del decreto ley continúa el proceso de centralización en el control y regulación de todo el sistema financiero; así es como mediante esta norma se somete a las Asociaciones de Ahorro y Préstamo a la fiscalización exclusiva de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras con todas las atribuciones que puede ejercitar para los demás intermediarios.

El traspaso de la función fiscalizadora deberá efectuarse transcurridos seis meses desde la publicación de este decreto ley.

Asimismo, se entrega al Banco Central de Chile y al Consejo Monetario, en lo que corresponde, la facultad normativa para las operaciones del Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos.

13.— Modificaciones al D.L. Nº 455, de 1974.

Como es sabido, el artículo 19 del Decreto Ley Nº 455, de 1974, establece que en las operaciones de crédito de dinero sólo puede pactarse reajustabilidad en los términos del artículo 4º bis del mismo texto legal, salvo que el Banco

Central autorice, para operaciones *específicas*, otros índices de reajustabilidad. Ahora bien, el artículo 10, letra a) del texto legal en comentario, suprime en dicho artículo 19 la palabra "específicas", de modo que, en el futuro, el Banco Central podrá autorizar el empleo de sistemas distintos de reajustabilidad sin que ellos estén referidos a operaciones concretas o específicas.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 10, letra b), agrega un nuevo artículo 19 al D.L. N° 455, el cual faculta a las partes de una operación de crédito de dinero para pactar, sin necesidad de autorización del Banco Central, el sistema de reajustabilidad de la Unidad de Fomento. De esta manera, los particulares y las instituciones financieras podrán prescindir, en las operaciones de crédito de dinero que celebren, del engorroso sistema de reajustabilidad del artículo 4° bis del D.L. N° 455, reemplazándolo por el más expedito de la Unidad de Fomento.

Debe recordarse que la Unidad de Fomento es una unidad de cuenta que se originó del artículo 6° de la Ley N° 16.253 sobre bancos de fomento, que facultó al Presidente de la República para reglamentar las operaciones reajustables. Como consecuencia de la derogación de la Ley N° 16.253 fue necesario incorporar este mecanismo de reajustabilidad a otro texto legal.

D.— DECRETO LEY N° 3.460.

Este decreto ley regula tres materias diferentes, a saber: transformación de sociedades financieras en empresas bancarias; capital mínimo de las empresas bancarias y sociedades financieras; y objeto de las cooperativas de ahorro y crédito.

Hasta la dictación de este decreto ley, la Superintendencia de Bancos se encontraba impedida para autorizar la transformación de las sociedades financieras a bancos por carecer de facultades expresas para ello. Esta circunstancia obligaba a que dichas empresas, que deseaban emprender el giro bancario, debían previamente, proceder a su disolución y posteriormente a la constitución de un banco. Para obviar esta situación que se ha presentado en varias ocasiones, el legislador estableció expresamente la facultad del Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras para autorizar o rechazar la modificación de estatutos de una sociedad financiera que solicite su transformación a empresa bancaria.

Como es sabido, a la fecha de publicación de este decreto ley, el mínimo de capital y reservas de un banco comercial con domicilio u oficina en las provincias de Santiago o Valparaíso y de las sucursales de bancos extranjeros era de \$ 190.000.000 (equivalente aproximadamente a US\$ 4.870.000 al tipo de cambio del Banco Central de Chile), mientras que para las sociedades financieras se exigía un 75% del mismo (\$ 142.500.000 o US\$ 3.653.000) y para los bancos regionales un 25% (\$ 47.500.000 o US\$ 1.217.000).

Ahora bien, este decreto ley modifica dichos montos y establece que el mínimo de capital pagado y reservas de un banco será el equivalente a 400.000 Unidades de Fomento, y que el de las sociedades financieras será de 200.000 Unidades de Fomento, lo que corresponde a \$ 401.400.000 o US\$ 10.200.000 y a \$ 200.700.000 o US\$ 5.100.000, respectivamente, considerando el valor de la U.F. al 31 de agosto de 1980 (\$ 1.003,50).

Además, se terminan las distinciones entre bancos regionales y bancos nacionales, que difieren únicamente en los capitales mínimos y en la posibilidad de abrir oficinas en Santiago y Valparaíso. Esta distinción había pasado a ser más bien teórica, puesto que los bancos regionales tendían naturalmente a rea-

lizar operaciones en Santiago, para lo cual debían completar los recursos mínimos exigidos para la capital.

El aumento de capital, además de uniformar este requisito, recoge la tendencia universal de incrementar el capital de riesgo de estas empresas con la mira de fortalecer las bases del sistema financiero y permitir que las instituciones puedan afrontar de mejor forma la competencia en el mercado.

Mientras que para los bancos casi duplica el mínimo exigido, para las sociedades financieras el aumento es más reducido, en atención, a nuestro juicio, a la menor extensión de sus funciones, a la carencia de operaciones de comercio exterior y a la inferior relación deuda-capital que les impone el artículo 115 de la Ley General de Bancos.

El tercer y último propósito de este decreto ley consiste en fijar el objeto de las cooperativas de ahorro y crédito, de manera tal que estas personas jurídicas no tengan el objeto múltiple de cualquier cooperativa, sino solamente el que corresponda a su giro financiero. Esta restricción es propia de toda institución crediticia, y es así como a los bancos, que están organizados como sociedades anónimas, la ley les restringe su objeto al de institución financiera, impidiéndoles, por tanto, realizar las operaciones que pueden desarrollar las sociedades anónimas en general.

La revisión de la legislación bancaria del período de diciembre de 1973 a agosto de 1980, que hemos efectuado, no sería verdaderamente útil si no llegamos a extraer algunas conclusiones sobre sus efectos en el esquema vigente y los vacíos que aún se mantienen.

A nuestro juicio los aspectos más relevantes de este proceso han sido los siguientes:

1.— Codificación de la legislación financiera.

No obstante la aparente dispersión legislativa, se ha ido configurando un marco legal orgánico de normas básicas y crecientemente flexibles.

En efecto, a pesar de la profusión y gradualidad de normas legales del período 75-78, que es justificable no sólo por la crisis inicial del sistema sino por la sensibilidad y repercusiones de cualquier modificación financiera, se han recogido prácticamente en cuatro leyes orgánicas todas las disposiciones aplicables respecto del Consejo Monetario, Banco Central de Chile, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, bancos comerciales, de fomento y sociedades financieras y Banco del Estado.

Al mismo tiempo, el Banco Central de Chile, por primera vez en la historia, ha recopilado y simplificado todas las reglamentaciones complementarias en los denominados Compendios sobre Normas Financieras.

2.— Limitaciones al intervencionismo estatal y procedimiento y reclamo de los particulares por decisiones ilegales de la autoridad.

El intervencionismo estatal a la intermediación de fondos se ha ido reduciendo, consistentemente, dando lugar a la iniciativa individual, a la libertad económica y, en general, a la flexibilidad característica de los principios de mercado.

El primer paso en este sentido lo constituye la decisión de privatizar las instituciones bancarias existentes conservando el Estado su presencia en el

mercado a través del Banco del Estado de Chile. El segundo paso, también dentro del régimen de propiedad del sistema, lo constituyen las prohibiciones al sector público para adquirir acciones de instituciones financieras, de cualquier denominación. Relativamente a la ampliación del mercado para la intermediación de fondos del sector público se dio un avance notable en el Decreto Ley N° 3.001 que liberalizó al sector público de la obligación de mantener sus recursos en la Cuenta Unica Fiscal.

Sin embargo, la mayor trascendencia en cuanto a la no intervención de las autoridades es la falta de fijación en las tasas de interés de créditos selectivos forzosos y la tendencia a eliminar controles cualitativos y cuantitativos.

Complementariamente, se va limitando la discrecionalidad por la vía de establecer normas objetivas de mayor precisión para la aplicación general a todos los intermediarios financieros.

Por último, se reconoce el derecho de las instituciones autorizadas para recurrir ante los Tribunales de Justicia frente a la ilegalidad de la autoridad monetaria, y en menor medida para reclamar de las multas y algunas resoluciones dictadas por la Superintendencia.

3.— Definición de un marco legal para la autoridad monetaria y de control.

El Estado ha redefinido el papel de la autoridad monetaria y de la autoridad fiscalizadora, modernizando estas instituciones y fortaleciendo sus facultades, cuidando, como lo hemos dicho, de proteger a los particulares de las discriminaciones y actos ilegales que éstas puedan ejercitar.

En efecto, se encuadró al Banco Central de Chile en un patrón de auténtica autoridad monetaria, eliminándose sus facultades de financiamiento al público, al Fisco y al sector fiscal, entregándole los instrumentos necesarios para la regulación monetaria, crediticia, cambiaria y de comercio exterior.

El control de la gestión bancaria en defensa de los depositantes y del interés general, y la existencia de una banca sólida y técnicamente eficiente en la captación de recursos y la distribución del crédito experimentaron un viraje sustancial. Así, las nuevas facultades con que se dotó a la Superintendencia agregan, a la revisión formal de las normas, la exigencia de publicidad de su gestión bancaria, la posibilidad de valorizar y clasificar la cartera de colocaciones y de las inversiones de los intermediarios financieros.

De este modo, la fiscalización de la gestión bancaria permitirá que la Superintendencia no sólo compruebe el cumplimiento formal de las regulaciones, sino que analice sus operaciones para determinar los activos de las instituciones frente a la exigibilidad de sus pasivos y, además, permitir el análisis de los administradores.

4.— Uniformación de las normas aplicables a los intermediarios financieros.

El nuevo ordenamiento financiero ha reconocido el hecho práctico de la sustituibilidad de los servicios financieros y sus positivos efectos en la competencia mediante la uniformación de las normas aplicables a los intermediarios financieros. En este sentido, se ha uniformado la legislación aplicable por la vía de ampliar las funciones de los bancos comerciales, de manera que contemplen todas las atribuciones privativas de la banca especializada. Al mismo tiempo, se obligó a la transformación de los bancos hipotecarios en bancos de fomento

y a estos últimos se les flexibilizó con la única restricción de no operar las cuentas corrientes.

En consecuencia, se ha llegado a un amplio cauce para todas las operaciones activas y pasivas sin restricciones en plazos, instrumentos de captación, etc. Sin embargo, debe mencionarse la política de limitar las inversiones de los bancos, especialmente aquellas relativas a las inmobiliarias y valores mobiliarios. En este sentido, la legislación vigente pretende separar la actividad financiera para evitar que los bancos "copen" o concentren en mayor medida los mercados de valores que han sido insuficientemente desarrollados y asuman innecesarios riesgos de liquidez, especulaciones y concierten negocios de difícil valorización y fiscalización.

5.— Apertura al exterior

La última característica que debemos analizar es la apertura de la banca a la inversión extranjera. Complementariamente se abre la posibilidad para que la banca nacional pueda operar e invertir en el exterior.

En el contexto de la integración de nuestra economía al exterior, de la búsqueda de una mayor competencia interna y externa, del abaratamiento del crédito y de los servicios financieros y de una transferencia de tecnología del exterior, se ha liberalizado la inversión extranjera de manera de permitir la adquisición de bancos existentes y la apertura de sucursales de bancos extranjeros en el país.

De otro lado, se han ampliado los márgenes de inversión para la adquisición o constitución de bancos extranjeros por los bancos nacionales, quedando por regular tan sólo la apertura de sucursales de bancos nacionales en el exterior.

Para terminar con esta exposición nos referiremos a aspectos que, a nuestro juicio, necesitan de un mayor desarrollo legal, ellos son la protección de los particulares frente a la autoridad y a los mismos intermediarios financieros, y la profesionalización bancaria.

Protección de los particulares:

Un sistema financiero constituye un ordenamiento de trascendencia social. Es una normativa legal que crea cauces y abre posibilidades a la iniciativa privada de manera tal que los particulares deben tener el amparo de mecanismos a los cuales puedan recurrir en defensa de sus derechos, ya sea como accionistas minoritarios, depositantes, inversionistas, clientes, administradores o como intermediarios financieros propiamente tales.

En este sentido deben perfeccionarse los medios de reclamación de las resoluciones de la autoridad fiscalizadora y monetaria y al mismo tiempo contemplarse normas de publicidad, de los costos de créditos, servicios financieros, información de la gestión bancaria y de aquellas conductas específicas que puedan atentar contra la libre competencia.

Autodisciplina y enjuiciamiento de la gestión de los administradores:

No cabe duda que la mayor liberalización de la actividad bancaria implica también nuevas responsabilidades para sus accionistas mayoritarios y administradores que, en la medida en que sean asumidas, servirán de protección al sis-

tema frente a cualquier intento de intervención estatal. De esta manera se afianzarán las reformas que se han efectuado hasta la fecha.

Por lo mismo, es particularmente importante profesionalizar la actividad bancaria, permitiendo el reconocimiento a la seriedad de algunas instituciones y el desprestigio de aquellas que no dan una auténtica interpretación a los acuerdos de la autoridad y que buscan resquicios o caminos paralelos que dejen sin cumplir en lo sustantivo las resoluciones de la misma.

En este sentido, las asociaciones bancarias deben ser un centro de debate, control y calificación, todo para lograr una autodisciplina de los administradores financieros y evitar que frente al incumplimiento se llegue a la intervención de la autoridad y a la desconfianza del público en todo el sistema.

Hernán Felipe Errázuriz C.
Fiscal.

III. LEY ORGANICA
DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
E INSTITUCIONES FINANCIERAS

DECRETO LEY N° 1.097 (*)

(*) Publicado en el Diario Oficial del 25 de julio de 1975.

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO LEY Nº 1.097, DE 1975

*Crea la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
y señala sus funciones*

(Publicado en el "Diario Oficial" Nº 29.213, de 25 de julio de 1975).

Núm. 1.097.— Santiago, 16 de julio de 1975.— Vistos: lo dispuesto en los decretos leyes Nºs. 1 y 128, de 1973, y 527, de 1974, y teniendo presente:

1º Que el interés nacional exige mantener una adecuada vigilancia y control sobre las instituciones financieras que en el giro de sus negocios utilizan fundamentalmente recursos del público;

2º Que esta labor, cumplida hasta ahora por la Superintendencia de Bancos, en cuanto se refiere a las empresas bancarias en general, debe extenderse a otras entidades financieras, surgidas como consecuencia del desarrollo alcanzado por el mercado de capitales, y

3º Que en tal virtud, se hace necesario dotar a la Superintendencia de Bancos, que pasa a denominarse Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de una nueva organización jurídica, que le permita cumplir sus funciones en una forma más ágil y eficiente y que, al mismo tiempo, se concilie con la creación del Consejo Monetario y la nueva estructura asignada al Banco Central.

La Junta de Gobierno de la República de Chile ha acordado dictar el siguiente

DECRETO LEY:

La Superintendencia de Bancos se denominará en lo sucesivo Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y se regirá por las siguientes disposiciones:

TITULO I

DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Artículo 1º— La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras es una institución autónoma, con personalidad jurídica, de duración indefinida, que se regirá por la presente ley y se relacionará con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda.

Su domicilio será la ciudad de Santiago y no obstante su carácter de institución de derecho público, no se considerará como integrante de la Administración Orgánica del Estado ni le serán aplicables las normas generales o

especiales dictadas o que se dicten para el sector público y, en consecuencia, tanto la Superintendencia como su personal se regirán por las normas del sector privado, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 5°.

Artículo 2°— Corresponderá a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la fiscalización del Banco Central, del Banco del Estado, de las empresas bancarias, cualquiera que sea su naturaleza, de las entidades financieras cuyo control no esté encomendado por la ley a otra institución y de los organismos de previsión bancaria.

Le corresponderá, además, la fiscalización de las operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito cuyas captaciones de fondos sean superiores a la cantidad que señale el Consejo Monetario y de las sociedades e institutos auxiliares de financiamiento cooperativo. Para este efecto, les serán aplicables las disposiciones de esta ley sin perjuicio de que en su constitución, modificación y disolución queden sujetos a la Ley General de Cooperativas e intervengan en dichos actos exclusivamente las autoridades que la referida ley señala (1).

Le corresponderá, también, la fiscalización de los Almacenes Generales de Depósito (2) (3).

Artículo 3°— Un funcionario con el título de Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras será el jefe superior de la Superintendencia. El Superintendente será nombrado por el Presidente de la República y tendrá el carácter de jefe de oficina para los efectos legales.

Afectarán al Superintendente las prohibiciones e incompatibilidades que afectan a los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central y no podrá solicitar créditos de las entidades que fiscalice, salvo los que pueda obtener como imponente del organismo de previsión a que se encuentre acogido.

Artículo 4°— El Superintendente será subrogado en caso de vacancia, ausencia o incapacidad por el Intendente. Si hubiere varios Intendentes, la subrogación se hará en el orden de precedencia que señale el Superintendente.

Afectarán a los Intendentes las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades que establece el artículo anterior para el Superintendente.

Artículo 5°— El personal de la Superintendencia será nombrado por el Superintendente el que designará, por tanto, uno o más Intendentes y los empleados, inspectores, agentes especiales y demás personas que, a su juicio, le sea necesario ocupar y determinará sus obligaciones o deberes.

La Planta del personal de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el sistema de sus remuneraciones, beneficios, gratificaciones, incentivos o estipendios de cualquier naturaleza, y las modificaciones que corresponda, serán aprobados por el Consejo Monetario a proposición del Superintendente y con el voto favorable del Ministro de Hacienda (4).

(1) Artículo reemplazado por el que aparece en el texto, por el artículo 3° del decreto ley N° 1.618, de 18 de diciembre de 1976.

(2) Inciso agregado por el artículo 4° del D.L. N° 3.344, de 10 de junio de 1980.

(3) El inciso 1° del artículo 8° del D.L. N° 3.345, de 29-4-80, dispuso que: "A partir de 6 meses contados desde la publicación de este decreto ley, la fiscalización de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo corresponderá exclusivamente a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, quien tendrá a su respecto las atribuciones que le confiere el decreto ley número 1.097, de 1975."

(4) Inciso reemplazado por el que aparece en el texto, por el Art. 1° del decreto ley N° 1.618, de 18 de diciembre de 1976.

El Superintendente podrá celebrar contratos de prestación de servicios a honorarios para la ejecución de labores específicas. Estos contratados no tendrán, en caso alguno, la calidad jurídica de empleados ni de imponentes de la caja de previsión a que esté afecto el personal.

El Superintendente gozará de la más amplia libertad para el nombramiento y remoción del personal, con entera independencia de toda otra autoridad. Para estos efectos, y en especial para los de terminación del contrato de trabajo, todo el personal de la Superintendencia es de la exclusiva confianza del Superintendente.

El Presidente de la República, dentro del plazo de 4 meses, dictará las demás normas laborales a que estará afecto dicho personal.

En lo no previsto en el presente decreto ley o en el Estatuto del Personal a que se refiere el inciso anterior, regirá el Estatuto Administrativo como legislación supletoria.

Artículo 6º— El personal de la Superintendencia no podrá solicitar créditos en las empresas bancarias y financieras sujetas a su fiscalización ni adquirir bienes de tales empresas sin haber obtenido previamente permiso escrito del Superintendente. Tampoco podrá recibir, directa o indirectamente de esas empresas o de los jefes o empleados de ellas, dinero u objetos de valor, en calidad de obsequio o en cualquiera otra forma.

El que infrinja las prohibiciones establecidas en este artículo y las demás personas que resulten implicadas quedarán sujetos a las penas que consulta la ley para el delito de cohecho.

Artículo 7º— Queda prohibido a todo empleado, delegado, agente o persona que a cualquier título preste servicios en la Superintendencia, revelar cualquier detalle de los informes que haya emitido, o dar a personas extrañas a ella noticia alguna acerca de cualesquiera hechos, negocios o situaciones de que hubiere tomado conocimiento en el desempeño de su cargo. En el caso de infringir esta prohibición, incurrirá en la pena señalada en los artículos 246 y 247 del Código Penal.

Esta prohibición no obstará a las informaciones que sobre los entes fiscalizados debe proporcionar el Superintendente dentro del ejercicio de sus funciones al Ministro de Hacienda, al Consejo Monetario o al Comité Ejecutivo del Banco Central.

No obstante lo dispuesto en este artículo, la Superintendencia podrá dar a conocer al público información de carácter general acerca de la evaluación y calificación que efectúe de la composición de los activos y pasivos de las instituciones fiscalizadas o de determinadas partidas de ellos (5).

Artículo 8º— Los recursos para el funcionamiento de la Superintendencia serán de cargo de las instituciones fiscalizadas.

La cuota que corresponda a cada institución será de un medio por mil semestral del término medio del activo de ella en el semestre inmediatamente anterior, según aparezca de los balances y estados de situación que esos organismos presenten.

Para los efectos del cálculo de la cuota que deba enterar cada institución, no se considerarán como parte de su activo los bienes y partidas que deban excluirse en concepto del Superintendente.

(5) Inciso agregado por el artículo 9º, letra a), del decreto ley N° 2.099, de 13 de enero de 1978.

La cuota deberá ser pagada dentro de los diez días siguientes al requerimiento.

Artículo 9º.— El Superintendente recaudará los fondos con que las instituciones sometidas a su fiscalización deben contribuir al mantenimiento de la Superintendencia y los depositará en el Banco del Estado. De esa cuenta girará para efectuar los gastos que demande el funcionamiento de la Superintendencia.

Artículo 10.— El Superintendente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Superintendencia y podrá ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus fines y, dentro de tales facultades, efectuar libremente la adquisición y enajenación de bienes muebles.

No obstante, para la adquisición o enajenación de bienes inmuebles, se requerirá la aprobación del Presidente del Consejo Monetario.

El Superintendente podrá delegar algunas de sus facultades en los Intendentes u otros funcionarios de la Superintendencia y para casos especiales conferir poderes a terceros.

Artículo 11.— La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de sus gastos.

TITULO II

DE LA FISCALIZACION

Artículo 12.— Corresponderá al Superintendente velar por que las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan y ejercer la más amplia fiscalización sobre todas sus operaciones y negocios.

La facultad de fiscalizar comprende también las de aplicar o interpretar las leyes, reglamentos y demás normas que rijan a las empresas vigiladas.

Para los efectos indicados, podrá examinar sin restricción alguna y por los medios que estime del caso, todos los negocios, bienes, libros, cuentas, archivos, documentos y correspondencia de dichas instituciones y requerir de sus administradores y personal, todos los antecedentes y explicaciones que juzgue necesarios para su información acerca de su situación, de sus recursos, de la forma en que se administran sus negocios, de la actuación de sus personeros, del grado de seguridad y prudencia con que se hayan invertido sus fondos y, en general, de cualquier otro punto que convenga esclarecer.

Podrá, asimismo, impartirles instrucciones y adoptar las medidas tendientes a corregir las deficiencias que observare y, en general, las que estime necesarias en resguardo de los depositantes u otros acreedores y del interés público.

Dentro de sus facultades, el Superintendente podrá ordenar que se rectifique o corrija el valor en que se encuentran contabilizadas las inversiones de las instituciones fiscalizadas cuando establezca que dicho valor no corresponde al real. De las resoluciones que se dicten en virtud de este inciso podrá reclamarse dentro de 10 días desde que sean comunicadas, aplicándose en lo demás el procedimiento establecido en el artículo 21. Con todo, para los

finde de la aplicación del sistema de la corrección monetaria de la Ley de Impuesto a la Renta se estará a las pautas de valorización indicadas en el artículo 41 de la mencionada ley; sin embargo, el Director del Servicio de Impuestos Internos podrá establecer que se esté al valor que haya determinado el Superintendente (6).

El Superintendente podrá ejercitar las facultades que esta ley le otorga desde que se inicie la organización de una institución fiscalizada hasta que termine su liquidación.

Artículo 13.— Con el objeto indicado en el artículo anterior, el Superintendente, personalmente o por intermedio de sus inspectores o agentes especiales, visitará con la frecuencia que estime conveniente, las instituciones sometidas a su fiscalización.

Del mismo modo visitará periódicamente la Casa de Moneda de Chile y examinará el material que sirva para la impresión de los billetes y la acuñación de las monedas del Banco Central y su impresión, emisión y custodia.

En las inspecciones que la Superintendencia realice, podrá integrar su propio personal con el de la empresa visitada.

Artículo 14.— El Superintendente fijará las normas para la presentación de balances y estados de situación de las instituciones fiscalizadas y la forma en que deberán llevar su contabilidad.

Artículo 15.— El Superintendente podrá pedir a las instituciones sometidas a su vigilancia cualquiera información, documento o libro que, a su juicio, sea necesario para fines de fiscalización o estadística.

Deberá, en especial, a lo menos, cuatro veces al año, requerir la presentación de estados sobre la situación de sus negocios. Al solicitar los estados de situación, el Superintendente fijará la fecha a que éstos se referirán, que será anterior a la de dicha notificación, y el plazo dentro del cual deberán ser presentados. El estado se publicará, dentro de los quince días siguientes a su entrega, en uno de los periódicos de la ciudad donde la institución tenga su casa matriz.

Dentro de los treinta días siguientes a la recepción de los estados, el Superintendente publicará en el Diario Oficial un resumen de los presentados por las instituciones sometidas a su vigilancia, que demuestre la situación de cada una de ellas y del conjunto de cada grupo de instituciones.

Conjuntamente con la publicación de los estados de situación a que se refiere este artículo, la Superintendencia podrá ordenar que las instituciones fiscalizadas publiquen los datos que, a su juicio, sean necesarios para la información del público. Las normas que se impartan sobre esta materia deberán ser de aplicación general (7).

En las instituciones fiscalizadas por la Superintendencia, el Balance General deberá ser informado por una firma de auditores externos. En las mismas instituciones no será necesario que se designen inspectores de cuentas por los accionistas. Los auditores harán llegar copia de su informe con todos sus anexos a la Superintendencia y la institución financiera lo hará publicar junto con el balance (8).

(6) Inciso agregado por el artículo 9º, letra b), del decreto ley N° 2.099, de 13 de enero de 1978.

(7) (8) Incisos agregados por el artículo 9º, letra c), del decreto ley N° 2.099, de 13 de enero de 1978.

En esas mismas instituciones, la Superintendencia podrá exigir que auditores externos se pronuncien sobre determinados balances o estados, sin que pueda ejercitar esta facultad con mayor frecuencia que una vez en cada año calendario respecto de una misma institución, debiendo los auditores enviar el informe y todos sus anexos directamente a la Superintendencia. Los auditores serán elegidos mediante sorteo efectuado por la Superintendencia, de una lista que ésta mantendrá con firmas idóneas, no pudiendo recaer la elección en la misma firma que efectúe la auditoría del Balance (9).

Artículo 16.— El gerente de una institución fiscalizada o la persona que haga sus veces dará cuenta al directorio o al cuerpo directivo correspondiente en la próxima reunión que éste celebre de toda comunicación recibida del Superintendente y de ello se dejará testimonio en el acta de la sesión.

En los casos en que el Superintendente lo pida, la comunicación será insertada íntegramente en el acta.

Artículo 17.— El Superintendente y sus inspectores, delegados o agentes especiales estarán facultados para llamar a cualquiera persona a declarar, bajo juramento, acerca de cualquier hecho cuyo conocimiento estimaren necesario para esclarecer alguna operación de las instituciones fiscalizadas o la conducta de sus funcionarios.

Artículo 18.— Sin perjuicio de las facultades que esta ley le confiere, el Superintendente tendrá, además, respecto de las instituciones fiscalizadas y en lo que proceda, las que el Código de Comercio, y las leyes y reglamentos otorguen al Superintendente de Sociedades Anónimas respecto de dichas sociedades.

Sólo deberán enviarse a toma de razón de la Contraloría General de la República las resoluciones que expresamente señala el Código de Comercio como sujetas a dicho trámite.

TITULO III

DE LAS SANCIONES

Artículo 19.— Las instituciones sometidas a la fiscalización de la Superintendencia que incurrieren en alguna infracción a la ley que las rige, a sus leyes orgánicas, a sus estatutos o a las órdenes legalmente impartidas por el Superintendente, que no tenga señalada una sanción especial, podrán ser amonestadas, censuradas o penadas con multa hasta por una cantidad equivalente a cinco mil Unidades de Fomento. En el caso de tratarse de infracciones reiteradas de la misma naturaleza podrá aplicarse una multa hasta de cinco veces el monto máximo antes expresado (10).

Artículo 20.— Los directores, administradores, gerentes, apoderados o empleados de una institución fiscalizada que aprueben o ejecuten operaciones no autorizadas por la ley, por los estatutos o por las normas impartidas por la

(9) Inciso agregado por el artículo 9º, letra c), del decreto ley N° 2.099, de 13 de enero de 1978.

(10) Modificado en la forma en que aparece en el texto, por el artículo 9º, letra d), del decreto ley N° 2.099, de 13 de enero de 1978.

Superintendencia, responderán con sus bienes de las pérdidas que dichas operaciones irroguen a la empresa.

Artículo 21.— Todas las multas que las leyes establecen y que correspondan aplicar a la Superintendencia serán impuestas administrativamente por el Superintendente a la institución infractora y deberán ser pagadas dentro del plazo de diez días contados desde que se comuniquen la resolución respectiva. La institución afectada podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente a su domicilio social, salvo que la empresa tenga oficina en Santiago, caso en el cual será competente la Corte de Apelaciones de Santiago. El reclamo deberá formularse dentro del plazo de diez días contados desde el entero de la multa. La Corte dará traslado por seis días al Superintendente y evacuado dicho trámite, o acusada la correspondiente rebeldía, la Corte oírán el dictamen de su Fiscal y dictará sentencia sin ulterior recurso.

Estas multas prescribirán en el plazo de seis años contado desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse el hecho o de ocurrir la omisión sancionados.

Este plazo será de diez años si se hubiere actuado con dolo y éste se presumirá cuando se hayan hecho declaraciones falsas a la Superintendencia relacionadas con los hechos cometidos.

Los referidos plazos de prescripción se suspenderán desde el momento en que la Superintendencia inicie la investigación de la que derive la aplicación de la multa respectiva.

Artículo 22.— El producto de las multas que se apliquen a las instituciones fiscalizadas por la Superintendencia será de beneficio fiscal. El Superintendente enterará periódicamente en la Tesorería Fiscal las multas no reclamadas y aquéllas en que el afectado haya perdido su reclamación por sentencia ejecutoriada. Mientras esté pendiente el reclamo, las cantidades recaudadas por multas se mantendrán en una cuenta especial en el Banco del Estado de la que el Superintendente girará para efectuar la devolución correspondiente en caso de acogerse algún reclamo por sentencia firme.

Artículo 23.— Si una institución fiscalizada hubiere incurrido en infracciones o multas reiteradas, se mostraré rebelde para cumplir las órdenes legalmente impartidas por la Superintendencia o hubiere ocurrido en ella cualquier hecho grave que haga temer por su estabilidad económica, el Superintendente podrá designarle un inspector delegado a quien le conferirá las atribuciones que señale al efecto y especialmente, le delegará la de suspender cualquier acuerdo del cuerpo directivo o de los apoderados de la institución.

En los mismos eventos, podrá el Superintendente, haya designado o no el inspector delegado, nombrar un administrador provisional de la institución, el que tendrá todas las facultades de administración del giro ordinario que la ley y los estatutos señalan al directorio o a quien haga sus veces y al gerente.

La designación de administrador provisional no podrá tener una duración superior a un año, sin perjuicio de que pueda renovarse las veces que el Superintendente estime necesario.

De la designación de administrador provisional y de su renovación podrán reclamar los administradores suspendidos, previo acuerdo de la mayoría de ellos, ante la Corte de Apelaciones que corresponda. El reclamo deberá interponerse dentro del plazo de diez días contado desde la fecha en que se comuniquen a la institución la designación del administrador provisional aplicándose el mismo procedimiento y norma de competencia que señala el artículo

21. Por la interposición del reclamo no se suspenderá la administración provisional ni podrá la Corte decretar medida alguna con ese objeto mientras se encuentre pendiente la reclamación.

TITULO IV

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 24.— La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras será la sucesora legal del servicio denominado Superintendencia de Bancos. En lo que fuere compatible con el presente decreto ley, declárase que todas las referencias al Superintendente de Bancos o a la Superintendencia de Bancos contenidas en leyes, decretos, reglamentos o cualquier otro cuerpo normativo, se entenderán hechas al Superintendente o a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Artículo 25.— En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º en relación con los artículos 11 y 18 del presente texto legal, el ámbito de fiscalización de la Contraloría General de la República respecto de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras será solamente el que en dichos preceptos se señala.

Artículo 26.— El personal de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras continuará afecto al régimen de previsión de la Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco del Estado de Chile.

Artículo 27.— Deróganse los Títulos I, II y III de la Ley General de Bancos, cuyo texto fue fijado por el DFL. N° 252, de 1960, con excepción de los artículos 19 y 26. Deróganse, además, los incisos finales de los artículos 28 y 80 de la misma ley.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo primero transitorio.— No obstante lo dispuesto en el artículo 18 las sociedades financieras que hayan presentado prospecto a la fecha de publicación de este decreto ley continuarán la tramitación de su autorización de existencia ante la Superintendencia de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para conferirles la autorización que requieren para funcionar.

Artículo segundo transitorio.— Transfiérense a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras los bienes raíces que actualmente ocupa la Superintendencia de Bancos, los bienes muebles que figuran en su inventario y los saldos disponibles de sus cuentas corrientes.

Dentro de los sesenta días siguientes a la publicación del presente decreto ley, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras enviará al Departamento de Bienes Nacionales del Ministerio de Tierras y Colonización y a la Contraloría General de la República, un inventario de los bienes inmuebles y muebles que, en razón de lo dispuesto en el inciso anterior, pasarán al dominio de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Los bienes raíces se encuentran inscritos a fs. 2.365, Nº 3.426, del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 1971, y el Conservador practicará las inscripciones que procedan con el solo mérito de esta disposición.

Regístrese en la Contraloría General de la República y publíquese.— AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.— JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.— GUSTAVO LEIGH GUZMAN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.— CESAR MENDOZA DURAN, General, Director General de Carabineros.— Jorge Cauas Lama, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a U. para su conocimiento.— Saluda atentamente a U.— Pedro Larrondo Jara, Capitán de Navío (AB), Subsecretario de Hacienda.

INDICE ANALITICO
DE LA LEY ORGANICA
DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INDICE ANALITICO DE MATERIAS

ADMINISTRADOR PROVISIONAL

Designación de un administrador provisional.

Art. 23, incs. 2º y 3º.

Reclamo de la designación.

Art. 23, inc. 4º.

AUDITORES EXTERNOS

Balance General deberá ser informado por una firma de auditores externos.

Art. 15, inc. 5º.

BALANCE GENERAL

Normas para su presentación.

Art. 14.

Obligación de ser informado por una firma de auditores externos.

Art. 15, inc. 5º.

BIENES INMUEBLES

Adquisición y enajenación de bienes inmuebles.

Art. 10, inc. 2º.

CONSEJO MONETARIO

Facultad para aprobar planta de personal, remuneraciones, de la Superintendencia.

Art. 5º, inc. 2º.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fiscalización de la Superintendencia exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de sus gastos.

Art. 11.

ESTADOS DE SITUACION

Presentación de estados de situación.

Art. 15, inc. 2º.

Publicación en el Diario Oficial.

Art. 15, inc. 3º.

FACULTADES FISCALIZADORAS

Instituciones fiscalizadas.

Art. 2º.

FACULTADES FISCALIZADORAS

Para aplicar o interpretar normas que rigen a empresas vigiladas.
Art. 12, inc. 2º.
Para examinar operaciones y documentos de empresas fiscalizadas.
Art. 12, inc. 3º.
Para impartir instrucciones.
Art. 12, inc. 4º.
Para ordenar rectificación o corrección del valor contable de inversiones.
Art. 12, inc. 5º.
Para examinar material que sirve para impresión de billetes y acuñación de monedas.
Art. 13, inc. 2º.
Para pedir información, documentos o libros a entidades fiscalizadas.
Art. 15, inc. 1º.
Para requerir estados de situación.
Art. 15, inc. 2º.
Para fijar normas sobre presentación de balances, estados de situación e instrucciones contables.
Art. 14.
Para llamar a declarar de hechos relativos a operaciones de instituciones fiscalizadas.
Art. 17.
Facultades similares a las del Superintendente de Sociedades Anónimas.
Art. 18.

FONDOS DE LA SUPERINTENDENCIA

Fondos con que las instituciones sometidas a su fiscalización deben contribuir.
Art. 9º; Art. 8º.

INSPECTOR DELEGADO

Designación de un inspector delegado.
Art. 23, inc. 1º.

INSTITUCIONES FISCALIZADAS

Instituciones fiscalizadas por la Superintendencia.
Art. 2º.

MULTAS

Aplicadas a las instituciones fiscalizadas.
Art. 19.
Plazo de pago.
Art. 21.
Prescripción de las multas.
Art. 21, incs. 2º, 3º y 4º.
Producto de las multas.
Art. 22.
Reclamo de multas.
Art. 21, inc. 1º.

NATURALEZA JURIDICA DE LA SUPERINTENDENCIA

Art. 1º.

OBJETO DE LA SUPERINTENDENCIA

Objeto de la Superintendencia.

Art. 2º.

PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA

Nombramiento del personal.

Art. 5º, inc. 1º.

Previsión del personal.

Art. 26.

Prohibiciones al personal.

Arts. 6º y 7º.

Remuneraciones y beneficios.

Art. 5º, inc. 2º.

RECURSOS

Recursos para el funcionamiento.

Arts. 8º y 9º.

RECLAMO JUDICIAL DE RESOLUCIONES

Art. 12, inc. 5º y Art. 21, inciso 1º.

REPRESENTACION LEGAL

Art. 10.

SANCIONES

Aplicadas a las instituciones fiscalizadas.

Art. 19.

SUPERINTENDENTE DE BANCOS

Nombramiento.

Art. 3º, inc. 1º.

Prohibiciones e incompatibilidades.

Art. 3º, inc. 2º.

Subrogación.

Art. 4º, inc. 1º.

IV. LEY ORGANICA
DEL CONSEJO MONETARIO
Y DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

DECRETO LEY N° 1.078 (*)

(*) Publicado en el Diario Oficial del 28 de junio de 1975.

DECRETO LEY N° 1.078, DE 1975

Fija nueva Ley Orgánica del Banco Central de Chile; deroga y modifica diversos cuerpos legales; crea el Consejo Monetario; otras disposiciones

(Publicado en el "Diario Oficial" N° 29.190, de 28 de junio de 1975).

Núm. 1.078. — Santiago, 25 de junio de 1975.— Vistos: lo dispuesto en los decretos leyes N°s. 1 y 128, de 1973, y 527, de 1974, la Junta de Gobierno de la República de Chile ha acordado dictar el siguiente

DECRETO LEY

TITULO I

GENERALIDADES

Artículo 1º— Para todos los efectos de esta ley se entiende por:

Banco: el Banco Central de Chile.

Consejo: el Consejo Monetario.

Empresas Bancarias: el Banco del Estado de Chile, los Bancos Comerciales y de Fomento y los Bancos de cualquiera otra naturaleza.

Comité: el Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile.

TITULO II

DEL CONSEJO MONETARIO

Artículo 2º— Créase el Consejo Monetario que estará integrado por los Ministros de Hacienda, Economía, Fomento y Reconstrucción; por el Director de Planificación Nacional, por el Presidente del Banco y por un representante del Presidente de la República.

Este Consejo funcionará en el Banco Central de Chile (1).

Artículo 3º— El Consejo Monetario fijará la política monetaria crediticia, de mercado de capitales, de comercio exterior y arancelaria, de cambios internacionales y del ahorro, en conformidad con las normas que le señale el Supremo Gobierno.

(1) El decreto ley N° 1.370, de 16 de marzo de 1976, suprimió el Ministerio de Coordinación Económica y Desarrollo, que originalmente integraba el Consejo Monetario.

Artículo 4º— El Consejo será presidido por el Ministro de Hacienda o en su ausencia, por quien señale su Reglamento de Sala.

El quórum para celebrar sesiones será de cuatro miembros, los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, y en caso de empate, quien presida tendrá voto decisorio.

Artículo 5º— Cada miembro titular designará un representante alterno. El alterno del Presidente del Banco será el Vicepresidente y el alterno del representante del Presidente de la República será designado por éste. Cada representante alterno podrá asistir a todas las sesiones, pero sólo tendrá derecho a voto en ausencia del titular respectivo (2).

Los representantes de los Ministros de Coordinación Económica, de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción y del Director de Planificación Nacional, deberán ser funcionarios de los Ministerios u Organismos respectivos (3).

En caso de ausencia, vacancia o impedimento del Vicepresidente del Banco, será reemplazado por quien lo subrogue.

Las funciones de representante alterno estarán sujetas a las incompatibilidades establecidas en el inciso 2º del artículo 29. Asimismo, el representante titular del Presidente de la República estará afecto a dichas incompatibilidades (4).

Artículo 6º— El Consejo podrá designar comisiones de información o asesoría, permanentes u ocasionales, en los casos que estime conveniente.

Artículo 7º— El Superintendente de Bancos tendrá derecho a concurrir a las Sesiones del Consejo con derecho a voz.

Artículo 8º— El Consejo designará un Secretario, que será de su exclusiva confianza y tendrá el carácter de ministro de fe de sus acuerdos y actuaciones.

El Secretario tendrá la responsabilidad del funcionamiento administrativo del Consejo y desempeñará los demás cometidos que éste le encomiende.

Artículo 9º— Serán atribuciones del Consejo, de conformidad con las normas que le señale el Supremo Gobierno:

- a) Determinar la política monetaria;
- b) Determinar la política de créditos;
- c) Determinar la política en materia de endeudamiento interno o externo;
- d) Determinar la política y dictar normas en materia de mercado de capitales y emisión y colocación de valores mobiliarios, efectos de comercio, documentos negociables y, en general, cualquier otro título que sea susceptible de colocación en el público;
- e) Determinar la política en materia de captación de dinero del público, mediante cuentas de ahorro, de depósitos, o en cualquiera otra forma y elaborar planes nacionales de ahorro;
- f) Determinar la política en materia de intereses;
- g) Determinar la política sobre encaje y reservas técnicas de las empresas bancarias e instituciones financieras y de crédito;

(2) (4) Incisos modificados en la forma que aparece en el texto, por el Art. 10, letras a) y c), respectivamente, del decreto ley N° 1.171, de 5 de septiembre de 1975.

(3) Inciso agregado por el artículo 10, letra b), del decreto ley N° 1.171, de 5 de septiembre de 1975.

- h) Determinar la política en materia de cambios internacionales, e
- i) Determinar la política de comercio exterior y arancelaria. Para ejercer la facultad a que se refiere esta letra, el Consejo se integrará, además, con el Ministro de Relaciones Exteriores cuando corresponda.

Artículo 10.— El Consejo deberá orientar las actividades de las empresas bancarias y de las sociedades o entidades que realicen operaciones financieras, con el fin de lograr la debida coordinación de ellas, acorde con las necesidades de la economía nacional.

Artículo 11.— Las políticas que determine el Consejo serán obligatorias para los organismos que tengan las facultades normativas necesarias para ponerlas en ejecución.

La vigilancia y control del cumplimiento de dichas políticas o de las normas que emanen de ellas, corresponderá al Consejo, quien las ejercerá a través de los organismos de fiscalización que correspondan.

TITULO III

NATURALEZA, OBJETO, DOMICILIO Y CAPITAL DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

Artículo 12.— El Banco Central de Chile es una institución autónoma, con personalidad jurídica, de duración indefinida, que se regirá por la presente ley y su Reglamento y se relacionará con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda.

En lo que sea compatible con los objetivos del Banco fijados por la presente ley y en lo no previsto en ella, le serán aplicables, además, las disposiciones de la Ley General de Bancos.

Artículo 13.— El Banco Central de Chile tendrá por objeto propender al desarrollo ordenado y progresivo de la economía nacional, mediante las políticas monetaria, crediticia, de mercado de capitales, de comercio exterior y cambios internacionales, del ahorro y demás que le sean encomendadas por ley.

Artículo 14.— No obstante su carácter de institución de derecho público, el Banco Central de Chile no se considerará como integrante de la Administración del Estado ni le serán aplicables las normas generales o especiales, dictadas o que se dicten para el sector público y, en consecuencia, tanto el Banco como su personal se regirán por las normas del sector privado (*).

Artículo 15.— El Banco Central de Chile tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago y podrá establecer oficinas en todo el territorio nacional. Para hacerlo fuera del país, se requerirá acuerdo del Consejo Monetario.

Artículo 16.— El capital autorizado del Banco será fijado por decreto supremo, previo informe de la "Superintendencia de Bancos". El capital inicial será de E° 50.000.000.000.—

(*) El decreto ley N° 2.873, de 13 de octubre de 1979, dispuso que los funcionarios del Banco Central de Chile no podrán participar en negociaciones colectivas, no obstante lo dispuesto por su Ley Orgánica, en cuanto señala que su personal se rige por las normas del sector privado.

TITULO IV

FACULTADES Y OPERACIONES DEL BANCO

Artículo 17.— Es potestad exclusiva del Banco Central emitir billetes y acuñar moneda de acuerdo a las normas del Título VIII de esta ley.

Artículo 18.— Son atribuciones normativas del Banco Central las siguientes (5):

1.— Dictar las normas y condiciones a que se sujetarán los Bancos e instituciones financieras y de crédito, públicos o privados, en la captación de fondos del público, ya sea como depósito mutuo, participación, cesión o transferencia de efectos de comercio o en cualquiera otra forma, así como también para regular cuantitativa y cualitativamente los créditos que concedan y otras operaciones que efectúen dichas instituciones, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra d) del artículo 9°.

Se entienden comprendidas en todo caso en este número las sociedades financieras, las cooperativas de ahorro y crédito, las asociaciones de ahorro y préstamo y cualquier particular o empresa que realice habitualmente operaciones de captación y colocación de dinero con el público (6).

Las normas que se dicten para regular las captaciones de fondos o los créditos que estas entidades puedan conceder, deberán ser generales y no serán procedentes otras discriminaciones, como no sea respecto de la clase de ente o de actividad financiera, de la distribución de los créditos en las distintas regiones del país o del hecho de tratarse de instituciones que, atendida la fecha de su creación, no puedan regirse por las normas de general aplicación.

2.— Fijar los intereses máximos bancarios para operaciones reajustables y no reajustables de acuerdo a la ley.

3.— Fijar los intereses a que se refiere el artículo 8° de la Ley N° 3.777 sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques y los intereses máximos que puedan pagarse sobre depósitos a la vista o a plazo.

4.— Fijar los encajes y las reservas técnicas que los bancos y demás entes mencionados en el N° 1 deban mantener en proporción a sus depósitos y obligaciones.

Los encajes o reservas técnicas que pueda fijar el Banco Central deberán ser generales para las diversas clases o tipos de bancos o entes que participen en el mercado financiero. Sin perjuicio de lo prescrito anteriormente, al fijarse los encajes o las reservas técnicas para determinada clase de bancos o instituciones podrán establecerse normas diferentes, ya sea atendiendo a la natura-

(5) El artículo 8° del decreto ley N° 3.345, de 29 de abril de 1980, dispone:
"Artículo 8°— A partir de 6 meses contados desde la publicación de este decreto ley, la fiscalización de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo corresponderá exclusivamente a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, quien tendrá a su respecto las atribuciones que le confiere el decreto ley N° 1.097, de 1975.

El Banco Central de Chile, a partir de la publicación del presente decreto ley, tendrá respecto de la Caja Central de Ahorro y Préstamos y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamos, la facultad exclusiva de dictar normas en las materias a que se refiere el Título IV del decreto ley N° 1.078, de 1975, en cuanto sean aplicables a dichas entidades, todo ello sin perjuicio de las atribuciones que competen al Consejo Monetario."

(6) Inciso modificado, en la forma que se expresa, por el artículo 6°, N° 1), del decreto ley N° 1.818, de 15 de junio de 1977.

leza de los depósitos u obligaciones, a partes del monto total de cada clase de ellos o a las diversas monedas en que estén expresados, o la circunstancia de tratarse de una institución que, atendida la fecha de su creación, no pueda regirse por las normas de general aplicación. Podrá, asimismo, siempre que estas resoluciones sean de carácter general, fijar distintos porcentajes de encaje o reserva técnica relacionándolos con las finalidades de determinadas colocaciones o con la región en que éstas se efectúen.

5.— Autorizar a los Bancos para cobrar comisiones a sus clientes por el manejo de cuentas corrientes bancarias.

6.— Determinar los máximos que pueden cobrar los Bancos y demás entes mencionados en el N° 1 de este artículo por concepto de comisiones y gastos.

7.— Dictar las normas y limitaciones a que se sujetarán las instituciones financieras en materia de avales y fianzas, sin perjuicio de la aplicación de los límites de crédito que contienen las leyes respectivas (7).

8.— Establecer las relaciones que deben existir entre las operaciones activas y pasivas de las instituciones financieras (7).

Los acuerdos que el Banco Central adopte sobre la materia a que se refiere este artículo requerirán de una consulta previa a la Superintendencia de Bancos acerca de su aplicabilidad. La Superintendencia impartirá las instrucciones que sean necesarias para su ejecución.

Artículo 19.— Son atribuciones del Banco Central en materia de financiamiento y coordinación del sistema bancario y financiero:

1.— Conceder a las empresas bancarias, a las sociedades financieras y a los demás entes financieros públicos o privados autorizados por la ley para operar en créditos y captación de recursos financieros en el público, préstamos en caso de urgencia por un plazo no superior a 90 días. Para otorgar estos préstamos a más de quince días o para renovar los ya concedidos, se requerirá informe de la Superintendencia o del ente fiscalizador que corresponda, sobre su necesidad y la efectividad de las circunstancias que motivan el préstamo. El Banco Central podrá condicionar el otorgamiento de estos préstamos al cumplimiento por parte del solicitante de determinadas normas de administración financiera. Aceptadas estas exigencias, la infracción de ellas se sancionará administrativamente por la Superintendencia o por el ente fiscalizador que corresponda, previa citación del afectado con multa a beneficio fiscal de hasta una suma equivalente al monto del préstamo, sin perjuicio de otras sanciones legales o contractuales.

2.— Abrir líneas de crédito y celebrar los contratos correspondientes, otorgar refinanciamiento y descontar y redescantar letras de cambio, pagarés y otros documentos negociables en moneda nacional o extranjera, sólo respecto de los entes mencionados en el N° 1 del artículo anterior, sin perjuicio de lo que disponen o se establezca en leyes especiales (8).

En los casos en que el Banco Central proporcione recursos en moneda nacional a los entes mencionados en el N° 1 del artículo 18 a través de la apertura de líneas de crédito, refinanciamiento o redescuentos de documentos con el objeto de que dichas entidades otorguen créditos, no regirán para estos últimos las limitaciones de plazo establecidas en la ley cuando la naturaleza o destino de estos créditos así lo aconsejen (9).

(7) Los N.os 7 y 8 fueron agregados por el artículo 10 del decreto ley N° 2.099, de 13 de enero de 1978.

(8) Inciso sustituido por el que aparece en el texto, por el artículo 6°, N° 2), del decreto ley N° 1.818, de 15 de junio de 1977.

(9) El artículo 6°, N° 3), del decreto ley N° 1.818, de 15 de junio de 1977, reemplazó por estos incisos el inciso segundo de este número 2.

Los créditos en moneda extranjera que concedan las instituciones financieras con créditos o refinanciamientos del Banco Central de Chile, no estarán sujetos a las limitaciones legales que rijan su otorgamiento cuando así lo establezca en forma fundada el Comité Ejecutivo, por acuerdo unánime (10).

3.— Fijar las distintas tasas de interés aplicables a las operaciones que efectúe el Banco Central. Estas tasas podrán ser superiores a las máximas que se fijen en conformidad al N° 2 del artículo anterior.

4.— Ceder documentos de su cartera de colocaciones o de inversiones a los entes mencionados en el N° 1 de este artículo.

5.— Autorizar la creación y reglamentar el funcionamiento de las cámaras compensadoras de cheques y de otros valores (11).

6.— Recibir depósitos en moneda nacional o extranjera de las entidades indicadas en el N° 1, precedente.

Por acuerdo unánime del Comité, el Banco podrá recibir depósitos de otras instituciones o empresas del Estado.

7.— Recibir valores o bienes en garantía, en las condiciones que fije el Comité (12).

Artículo 20.— Es atribución del Banco Central actuar como Agente Fiscal en la contratación de créditos externos e internos y en aquellas operaciones que le encomienda el Fisco, que sean compatibles con las finalidades del Banco.

En ningún caso el Banco Central podrá adquirir para sí pagarés descontables de la Tesorería General de la República u otros documentos de crédito emitidos directamente por el Fisco, como tampoco otorgar créditos directos a las entidades y empresas, de los sectores público y privado, excepto a las instituciones financieras, sean públicas o privadas (13).

Artículo 21.— Son atribuciones del Banco Central en materia internacional, de comercio exterior y operaciones de cambios internacionales, las siguientes:

1.— Participar en representación del Gobierno de Chile y con la garantía del mismo, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Corporación Andina de Fomento y en otros organismos que determine la ley y operar con ellos.

2.— Aplicar las disposiciones contenidas en los tratados o convenciones celebrados por el Gobierno que correspondan a las finalidades del Banco y en los convenios en que sea parte el mismo banco.

Si estos tratados o convenios celebrados por el Gobierno establecieren créditos recíprocos y con arreglo a sus estipulaciones fuese necesario cancelar un saldo deudor, el Fisco pondrá a disposición del Banco los cambios correspondientes, contra entrega por éste de las cantidades en moneda corriente que hubiere recibido de los beneficiarios.

3.— Contratar en el exterior toda clase de créditos, mediante líneas de créditos, préstamos o cualquier otra forma y cederlos o traspasarlos a las em-

(10) El artículo 6°, N° 3), del decreto ley N° 1.818, de 15 de junio de 1977, reemplazó por estos incisos el inciso segundo de este número 2.

(11) Número reemplazado por el artículo 5°, letra a), del decreto ley N° 3.345, de 29 de abril de 1980.

(12) El artículo 28 del decreto ley N° 3.001, de 27 de diciembre de 1979, derogó el N° 8 del artículo 19 de este decreto ley.

(13) Artículo reemplazado, por el que se transcribe en el texto, por el artículo 27 del decreto ley N° 3.001, de 27 de diciembre de 1979.

presas bancarias o a las demás entidades a que se refiere el artículo 19, N° 1. Para ejercer esta facultad, se requerirá el acuerdo unánime del Comité (14).

4.— Ejercer las facultades y atribuciones que las leyes otorguen al Banco Central o al Comité Ejecutivo en materia de Comercio Exterior y Cambios Internacionales.

5.— Realizar operaciones de cambios internacionales y autorizar a Bancos e instituciones financieras y particulares para realizarlas. Los Bancos e instituciones financieras y particulares deberán actuar en estas materias ateniéndose a las instrucciones y normas del Banco Central.

6.— Comprar y vender oro, exportarlo e importarlo, sin sujeción a restricción, contribución ni gravamen fiscal alguno, salvo el impuesto establecido en el Título II de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, por las compras de oro que efectúe (15).

La facultad de importar o exportar oro sólo podrá ser suspendida por el Presidente de la República, previo informe del Consejo Monetario.

7.— Conceder créditos en moneda nacional o extranjera a Estados extranjeros, Bancos Centrales o entidades bancarias o financieras extranjeras o internacionales cuando dichos créditos tengan por objeto facilitar el cumplimiento de los objetivos del Banco. Para ejercer esta facultad se requerirá el voto unánime de los miembros integrantes del Comité (16).

8.— Recibir depósitos en moneda nacional o extranjera de Bancos Centrales o entidades bancarias o financieras extranjeras o internacionales (17).

Artículo 22.— Son atribuciones del Banco Central en materia de emisión de valores y operaciones en mercado abierto, las siguientes:

1.— Emitir y colocar en el mercado títulos a su propio cargo. El Banco deberá establecer los montos, tasas de interés, plazos, clases de monedas y demás condiciones en que se efectuará la emisión y pago de estos títulos. Podrán éstos ser reajustables de acuerdo al índice que determine el Banco y podrán ser nominativos, a la orden o al portador. El acuerdo pertinente será publicado en el Diario Oficial. También podrá rescatarlos mediante amortizaciones extraordinarias por sorteo cuando las circunstancias lo aconsejen y adquirir en el mercado las obligaciones emitidas en caso de estimarlo conveniente.

No obstante lo dispuesto anteriormente, podrán emitirse títulos sin sujeción a plazos fijos de amortización.

El Banco podrá colocar los títulos a que se refiere este número en el público y, en especial en instituciones fiscales, semifiscales y de administración autónoma o empresas del Estado, en empresas bancarias, sociedades financieras, asociaciones de ahorro y préstamo, compañías de seguros, sociedades administradoras de fondos mutuos y sociedades de capitalización, sin que rijan respecto de todas ellas las limitaciones o prohibiciones contenidas en las leyes que les sean aplicables.

Los títulos de las obligaciones que se contraten de acuerdo a lo prescrito en este número y en cuyo acuerdo de emisión conste expresamente, deberán ser recibidos a la par por la Tesorería General de la República o por las Aduanas, en pago de cualquier impuesto, tributo, derecho, gravamen o servicio, sea en moneda nacional o extranjera.

(14) Número reemplazado en la forma que aparece en el texto, por el artículo 6°, N° 4), del decreto ley N° 1.818, de 15 de junio de 1977.

(15) Inciso reemplazado, por el que se indica, por el artículo 4° del decreto ley N° 2.415, de 22 de diciembre de 1978.

(16) (17) Números agregados por el artículo 6°, N° 5), del decreto ley N° 1.818.

La emisión de instrumentos a plazos superiores a un año deberá efectuarse de acuerdo a las normas que dicte el Consejo Monetario.

2.— Comprar y vender en mercado abierto con fines de regulación monetaria títulos del Fisco, de los organismos públicos o valores que tengan garantía directa o indirecta del Estado.

3.— Comprar y vender en mercado abierto, con los mismos fines del número anterior, bonos o debentures u otros títulos de renta fija, de acuerdo a las normas que establezca el Reglamento de esta ley. El Reglamento deberá contener normas para que el ejercicio de esta facultad se realice de manera general en el mercado, no pudiendo autorizarse exclusivamente para valores emitidos por determinadas instituciones o empresas.

Artículo 23.— El Banco Central podrá adquirir y mantener los bienes raíces que sean necesarios para el funcionamiento de sus oficinas y servicios anexos.

Podrá también adquirir y mantener bienes raíces transferidos en pago de créditos concedidos en el giro de sus operaciones, ya sea que los hubiere directamente del deudor o en remate judicial.

El Banco enajenará los bienes raíces adquiridos en pago de obligaciones.

Artículo 24.— El Banco Central podrá realizar todos los actos, contratos y operaciones bancarias y comerciales que sean necesarias para el cumplimiento de su objetivo, ajustándose a las facultades y atribuciones que el presente título le entrega y sin perjuicio de las demás limitaciones legales.

Artículo 25.— Fuera de los casos permitidos en forma expresa en ésta u otras leyes, el Banco Central sólo podrá realizar operaciones de crédito de dinero con las personas o entes mencionados en el artículo 19, N° 1 y en el artículo 20, sea que estén establecidos en el país o en el exterior, quedándole por tanto prohibido realizar estas operaciones con cualquiera otra persona, sea en forma directa, indirecta, por administración delegada o en cualquiera otra forma.

TITULO V

DEL COMITE EJECUTIVO Y OTRAS AUTORIDADES DEL BANCO

Artículo 26.— El Comité Ejecutivo tendrá a su cargo la dirección y administración del Banco sin perjuicio de las demás funciones que le encomiende la ley. Le corresponderá, asimismo, ejercer todas las facultades o atribuciones que ésta u otras leyes otorguen al Banco Central.

Artículo 27.— El Comité estará compuesto por el Presidente, el Vicepresidente y el Gerente General del Banco; funcionará con la mayoría de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría de los que asistan. El que presida tendrá voto decisorio en caso de empate.

Las remuneraciones de los miembros del Comité Ejecutivo serán fijadas por el Consejo Monetario.

Los miembros del Comité serán nombrados por el Presidente de la República mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda y tendrán el carácter de jefes de oficina para los efectos legales.

Artículo 28.— En caso de vacancia, ausencia u otra imposibilidad para ejercer sus funciones, los miembros del Comité Ejecutivo serán subrogados en la siguiente forma:

- a) El Presidente por el Vicepresidente;
- b) El Vicepresidente por el Gerente General, y
- c) El Gerente General por el funcionario del Banco que corresponda según el orden que señale el Comité Ejecutivo.

Artículo 29.— Las funciones de los miembros titulares del Comité Ejecutivo y sus subrogantes son incompatibles con todo empleo, trabajo o servicio retribuido con fondos fiscales o municipales y con las funciones, remuneradas o no, de consejero, director o empleado de instituciones fiscales, semifiscales, organismos autónomos, empresas del Estado y, en general, de todos los Servicios Públicos creados por ley, como, asimismo, de las empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado, sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción o, en las mismas condiciones, representación o participación. No regirá esta incompatibilidad en los casos en que las leyes dispongan que un miembro del Comité Ejecutivo deba integrar un determinado Consejo o Directorio ni para las labores docentes.

También son incompatibles dichas funciones con la participación en la propiedad, gestión, empleo o servicios remunerados en instituciones bancarias, financieras o de crédito, sean públicas o privadas, y con el ejercicio del comercio exterior sea como empresa individual o como socio, administrador, director, apoderado, empleado o asesor remunerado de sociedades o empresas cuyo objeto sea la importación, la exportación o la realización de operaciones de cambios internacionales (18).

Todas o algunas de las incompatibilidades que afecten a los miembros del Comité Ejecutivo podrá éste hacerlas extensivas a determinados empleados del Banco Central, atendidas las responsabilidades inherentes a sus funciones.

En todo caso, no será aplicable la incompatibilidad establecida en el inciso primero de este artículo, cuando así lo disponga el Presidente de la República por decreto supremo fundado.

Artículo 30.— Ningún miembro del Comité podrá intervenir ni votar en operaciones de crédito, inversiones u otros negocios que interesen a él o a empresas o particulares con quienes mantenga vínculos de participación, dependencia o injerencia en su administración; igual prohibición regirá respecto de los negocios u operaciones que interesen a sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive.

No se entenderán comprendidos en estas prohibiciones los acuerdos destinados a producir efectos de carácter general.

Artículo 31.— El Comité Ejecutivo podrá contratar el personal que estime necesario dentro de la planta aprobada por el Consejo Monetario y fijar sus remuneraciones, deberes y obligaciones. Al mismo Comité le corresponde la representación judicial del Banco con las facultades de ambos incisos del artículo 7º del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33, inciso tercero de este decreto ley.

Artículo 32.— El Comité podrá delegar sus facultades de administración, operación y representación en el Presidente, el Vicepresidente, el Gerente Ge-

(18) Inciso reemplazado, por el que aparece en el texto, por el artículo 10, letra e), del decreto ley N° 1.171, de 5 de septiembre de 1975.

neral, otros Gerentes, Subgerentes y funcionarios del Banco y, para casos determinados, podrá otorgar poderes especiales a terceros.

Artículo 33.— El Presidente del Banco tendrá la representación extrajudicial de éste y será subrogado, en caso de ausencia, vacancia o imposibilidad, por el Vicepresidente.

El Presidente y el Vicepresidente tendrán las facultades y desempeñarán las funciones que les señale el Comité.

El Gerente General tendrá la representación judicial del Banco en los términos del artículo 8º del Código de Procedimiento Civil y ejercerá la administración inmediata del Banco de acuerdo a las facultades conferidas e instrucciones impartidas por el Comité.

Artículo 34.— El Secretario y el Revisor General del Banco serán designados por el Comité. La designación y remoción de estos funcionarios deberán ser acordadas por la unanimidad de los miembros integrantes. En caso de ausencia, vacancia o imposibilidad para ejercer el cargo, serán subrogados por los funcionarios que corresponda, según el orden que al efecto señale el Comité.

Al Secretario corresponderá actuar como tal en las sesiones del Comité Ejecutivo y será ministro de fe para atestiguar la veracidad y autenticidad de las actuaciones y documentos del Banco.

El Revisor General estará encargado de la fiscalización y vigilancia inmediata de todas las reparticiones del Banco. Los inspectores actuarán bajo las directivas de este funcionario. El Revisor General comunicará por escrito al Gerente General las observaciones que estime convenientes sobre las operaciones del Banco. Si ellas no fueren atendidas, dará cuenta al Comité.

En todo caso, el Revisor General deberá enviar directamente copia de todas sus observaciones a la Superintendencia.

TITULO VI

PROCEDIMIENTO DE RECLAMO Y PUBLICIDAD

Artículo 35.— De los acuerdos, reglamentos, órdenes o resoluciones que el Comité Ejecutivo del Banco Central dicte en el ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 18, 19, 21 y 22 y de las normas que el Consejo Monetario dicte en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 9º letra d) que se estimen ilegales, podrá reclamarse por el interesado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en la forma y condiciones que se señalan en este Título.

El plazo para interponer la reclamación será de 10 días contados desde la fecha de notificación del acuerdo, reglamento, orden o resolución que se reclama, y al interponerse el recurso, deberá acompañarse boleta de consignación a la orden del Tribunal, equivalente al 10% del monto total de la operación o del perjuicio que se reclama, debiendo emplearse para el cálculo de dicho porcentaje el valor que resulte mayor.

En todo caso, el monto mínimo de la consignación a que se refiere el inciso anterior, no podrá ser inferior al equivalente en moneda corriente de 5 sueldos vitales anuales vigentes para la provincia de Santiago en el momento de interponerse el reclamo.

Artículo 36.— El reclamante señalará en su escrito, con precisión, la ley que supone infringida, la forma en que se ha producido la infracción, las razones

por las cuales el acuerdo, reclamo, orden o resolución lo perjudican y el monto en que estima el perjuicio (19).

El Tribunal rechazará de plano el recurso si el escrito no cumple con las condiciones señaladas en el inciso precedente, o no acreditare haber hecho la consignación previa ordenada en el artículo anterior.

Artículo 37.— Si la Corte de Apelaciones declarare admisible la reclamación, dará traslado de ella por seis días al Banco Central.

Evacuado el traslado por el Banco o acusada la rebeldía, la Corte oír el dictamen de su Fiscal y dictará sentencia en el término de 30 días.

La reclamación de que trata esta disposición tendrá preferencia para su vista y fallo (20).

Artículo 38.— Si la Corte de Apelaciones desecha la reclamación, declarará a beneficio fiscal el monto de la consignación a que se refiere el artículo 35.

Artículo 39.— Si la reclamación fuere aceptada, se devolverá al reclamante la suma del dinero consignada y éste podrá presentarse ante los Tribunales ordinarios de justicia, para demandar, conforme a las reglas generales, la indemnización por los perjuicios que hubiere sufrido y la aplicación de las sanciones penales que fueran procedentes.

Artículo 40.— Las resoluciones o acuerdos de carácter general que adopte el Comité Ejecutivo sobre materias de comercio exterior y de cambios internacionales, así como también sobre fijación de tasas de interés, encaje y reservas técnicas a que se refieren los números 2, 3 y 4 del artículo 18, y características de los billetes y monedas o sobre cualquiera otra que, a juicio de dicho Comité, requieran de conocimiento público, deberán publicarse en el Diario Oficial.

Igual publicidad se dará a las resoluciones de aplicación general que adopte el Consejo Monetario en materia de mercado de capitales y emisión y colocación de valores mobiliarios, efectos de comercio, documentos negociables y, en general, cualquier otro título que sea susceptible de colocación en el público, y a todas aquellas resoluciones o acuerdos que estime necesario dar a conocer en esta forma.

Para todos los efectos legales la fecha de adopción del respectivo acuerdo o resolución será la de su publicación.

Las resoluciones o acuerdos de carácter particular del Comité Ejecutivo que se refieran a materias de comercio exterior y cambios internacionales serán notificados a los interesados y al público mediante su inclusión en una lista que será fijada por tres días dentro del local en que funciona el Comité, y en un lugar al cual tenga acceso el público. Para todos los efectos legales, será fecha de adopción del acuerdo o resolución, la de su inclusión en la respectiva lista, la que deberá fijarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a su adopción (21).

(19) En este inciso se transcribe un error del texto oficial que usó la expresión "reclamo" en vez de "reglamento".

(20) Inciso agregado por el artículo 5º, letra b), del decreto ley N° 3.345, de 29 de abril de 1980.

(21) Artículo reemplazado, por el que aparece en el texto, por el artículo 10, letra f), del decreto ley N° 1.171, de 5 de septiembre de 1975, y modificado por el artículo 6º, N° 6), del decreto ley N° 1.818, de 15 de junio de 1977.

TITULO VII

RESERVA DE ORO Y MONEDAS EXTRANJERAS

Artículo 41.— El Banco Central de Chile mantendrá un fondo de reserva en oro, en divisas extranjeras, o en ambas.

Artículo 42.— Este fondo de reserva podrá consistir en:

a) Oro amonedado o en barras o divisas extranjeras disponibles en caja en el propio Banco.

b) Oro amonedado o en barras o divisas depositados en bancos del exterior de reconocida responsabilidad que señale el Comité por la unanimidad de sus miembros.

Las barras de oro que formen parte de la reserva deberán tener el peso y contenido de fino que establezca el Comité.

Artículo 43.— El producto en moneda corriente que resulte de la valorización de la reserva de oro o en moneda extranjera por efecto de una modificación de la paridad de la moneda, se destinará en la proporción que fije el Comité a los siguientes fines:

- 1.— A amortizar o cancelar obligaciones del Fisco con el Banco Central, y
- 2.— A incrementar los fondos de reserva contemplados en esta ley.

Artículo 44.— El Banco Central podrá ordenar la acuñación de monedas de oro a la Casa de Moneda de Chile sin limitación de cantidad, con arreglo al arancel respectivo y esta repartición le dará atención preferente respecto de otras entidades o particulares.

TITULO VIII

DEL CIRCULANTE

Artículo 45.— El Banco Central podrá contratar dentro o fuera del país la impresión de billetes y la acuñación de monedas.

Artículo 46.— Los billetes y monedas expresarán su valor en la unidad monetaria vigente, sus múltiplos o submúltiplos y tendrán las características que señale el Comité, por acuerdo que será publicado en el Diario Oficial.

Artículo 47.— Los billetes y monedas emitidos por el Banco Central serán los únicos medios de pago con poder liberatorio y circulación ilimitados. Tendrán curso legal en todo el territorio de la República y serán recibidos por su valor nominal.

No se aplicará lo dispuesto en este artículo a las monedas de oro.

Artículo 48.— El Banco Central retirará de la circulación los billetes en mal estado.

Cuando faltaren a estos billetes sus dos quintas partes y conservaren las restantes, el Banco pagará su valor nominal.

Si estuvieren destruidos en menos de las tres quintas partes y conservaren en buen estado más de las dos quintas partes restantes, serán canjeados por la mitad de su valor nominal, siempre que pueda verificarse su serie y número.

El Banco no estará obligado a canjear los billetes mutilados que no estén comprendidos en las disposiciones anteriores.

Artículo 49.— Los billetes retirados definitivamente serán inutilizados en la forma que determine el Comité, y no tendrán desde ese momento poder liberatorio ni curso legal.

El Banco velará porque la inutilización sea uniforme en todas sus oficinas y adoptará las medidas de control y de seguridad que estime necesarias para resguardar debidamente la corrección de dicho proceso (22).

TITULO IX

DE LOS FONDOS DE RESERVA Y EXCEDENTES DEL BANCO

Artículo 50.— Se practicará un balance de las operaciones del Banco al término de cada ejercicio financiero anual y en él se efectuarán las revalorizaciones que determine el Comité. Los excedentes que se produzcan en cada ejercicio, después de efectuados los castigos y provisiones que acuerde el Comité, se destinarán por éste a los siguientes fines:

a) A formar fondos de reservas para cubrir el riesgo de sus colocaciones, operaciones de cambio o de cualquier otro evento, en el porcentaje que determine.

b) El remanente, que será de beneficio fiscal, a pagar preferentemente las deudas pendientes del Fisco con el Banco.

Artículo 51.— Será necesario el acuerdo unánime de los miembros integrantes del Comité para efectuar cargos en los fondos de reserva. Estos cargos tendrán por objeto exclusivo cubrir pérdidas ya producidas.

TITULO X

FISCALIZACION DEL BANCO

Artículo 52.— Corresponderá a la Superintendencia de Bancos la fiscalización exclusiva del Banco Central.

Artículo 53.— El Banco Central deberá presentar al Superintendente de Bancos los informes y estados que éste solicite, el Balance y una memoria anual.

Artículo 54.— Se presentará al Superintendente de Bancos un estado de situación mensual que contenga los datos que determine dicho funcionario.

Los balances y estados de situación del Banco quedarán a disposición del público en sus propias oficinas, tanto en Santiago como en sus sucursales y serán publicados en el Diario Oficial dentro de los plazos que fije la Superintendencia de Bancos.

Los balances y estados de situación deberán llevar un anexo en que se consignen los nuevos endeudamientos fiscales con el Banco Central que se hayan producido a partir del primero de enero del año a que correspondan.

(22) Este inciso fue sustituido, por el que aparece en el texto, por el artículo 5º, letra c), del decreto ley N° 3.345, de 29 de abril de 1980.

TITULO XI

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 55.— El Banco Central estará exento de todo derecho, impuesto o contribución, sean éstos internos o externos, con excepción de los siguientes gravámenes: impuesto territorial sobre bienes raíces; impuesto a las ventas; impuesto a los servicios o tarifas generales de remesas de fondos y giros postales y telegráficos, y gravámenes aduaneros. Los billetes, monedas, metales, papel y cualquier otro elemento que sirva para la impresión de billetes o acuñación de monedas estarán exentos de todo impuesto o gravamen, cualquiera que sea su naturaleza (23) (24).

Artículo 56.— Derógase el decreto con fuerza de ley N° 247, de 30 de marzo de 1960, y sus modificaciones.

Artículo 57.— Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley sobre Comercio de Exportación e Importación y de Operaciones de Cambios Internacionales, cuyo texto se fijó por el decreto de Economía N° 1.272, de 7 de septiembre de 1961:

a) Reemplázase el artículo 23 por el siguiente:

“Artículo 23.— Las personas que infrinjan las obligaciones impuestas por los artículos 7°, 8° y 9° de la presente ley, o que no cumplan las normas establecidas por el Banco Central de Chile en relación con las mismas disposiciones, sufrirán las penas de prisión en su grado medio a presidio menor en su grado máximo y multa a beneficio fiscal, equivalente al doble de las cantidades no retornadas.

Las personas que incurrieren en falsedad maliciosa en los documentos que acompañen en sus actuaciones de comercio exterior regidas por esta ley, sufrirán las penas de prisión en su grado medio a presidio menor en su grado máximo y multa a beneficio fiscal, equivalente al doble del monto de la operación.

En todo caso, tratándose de los delitos a que se refieren los incisos precedentes, el Comité Ejecutivo podrá, facultativamente, aplicar al infractor una multa a beneficio fiscal, cuyo monto no podrá ser superior al 500% ni inferior al 200% del monto total de la respectiva operación. En este caso, no se podrá aplicar en contra del infractor ninguna otra pena por la misma causa, ni se podrá ejercer la acción penal a que se refiere el inciso quinto de este artículo.

En caso de que el autor del delito sea una persona jurídica, las penas corporales establecidas en los incisos 1° y 2° de este artículo se aplicarán a su gerente o representante legal.

Los delitos a que se refiere este artículo sólo podrán ser pesquisados por denuncia del Comité Ejecutivo.

Los extranjeros nacionalizados que hayan sido condenados por contravenir la presente ley, serán privados de su carta de nacionalización y podrán ser expulsados del territorio nacional.”

b) Sustitúyese el inciso 2° del artículo 24 por el siguiente:

(23) El artículo 2° del D.F.L. N° 1, de 5 de mayo de 1979, derogó las franquicias y liberaciones aduaneras contenidas en este artículo.

(24) El artículo 7° del decreto ley N° 3.345, de 29 de abril de 1980, eximió al Banco Central, a partir del año tributario 1980, del Impuesto a la Renta y Habitacional.

"Esta multa será a beneficio fiscal y no podrá ser superior al 200% ni inferior al 1% del monto total de la operación".

- c) Derógase el inciso 3º del artículo 24;
- d) Suprímese en el artículo 25 las palabras "reducidas a moneda corriente" y la coma que las precede;
- e) Reemplázase el artículo 26 por el siguiente:

"Artículo 26.— Las multas a que se refieren los artículos 23, 24 y 25 de la presente ley, se aplicarán en la misma moneda en que se efectuó o pretendió efectuar la operación sancionada o en dólares moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, a elección de la autoridad que las aplique. Estas multas deberán ser pagadas en moneda corriente al tipo de cambio del mercado bancario vigente a la fecha del pago.

Los acuerdos del Comité Ejecutivo que apliquen las multas tendrán mérito ejecutivo y en el juicio no podrá oponerse otra excepción que la de pago. La persona afectada, previo pago de la multa y dentro del plazo de cinco días de adoptado el acuerdo, podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones de Santiago, contra cuya resolución no cabrá recurso alguno", y

- f) Deróganse los artículos 27, 28 y 30.

Artículo 58.— Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 3º de la ley Nº 15.192:

a) Reemplázanse en el inciso primero las palabras "equivalente a cinco veces el monto de la operación", por las siguientes: "que no podrá ser superior al 500% ni inferior al 100% del monto de la operación";

b) Agréganse a continuación del inciso 1º los siguientes incisos nuevos:
"En todo caso, el Comité Ejecutivo del Banco Central podrá, facultativamente, aplicar al infractor una multa a beneficio fiscal, cuyo monto no podrá ser superior al 500% ni inferior al 100% del monto de la operación. En este caso, no se podrá aplicar en contra del infractor ninguna otra pena por la misma causa y la comprobación del pago de la suma correspondiente enervará definitivamente la acción pública a que se refiere el inciso 5º de este artículo.

El acuerdo del Comité Ejecutivo que aplique la multa tendrá mérito ejecutivo y en el juicio no podrá oponerse otra excepción que la de pago. La persona afectada, previo pago de la multa y dentro del plazo de cinco días de adoptado el acuerdo podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones de Santiago, contra cuya resolución no cabrá recurso alguno.

Las multas a que se refieren los incisos anteriores, se aplicarán en la misma moneda en que se efectuó o pretendió efectuar la operación sancionada o en dólares, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, a elección de la autoridad que las aplique y deberán ser pagadas en moneda corriente al tipo de cambio del mercado bancario vigente a la fecha de pago".

Artículo 59.— Modifícase la ley Nº 3.777, sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, en la siguiente forma:

- a) Reemplázase el artículo 8º por el siguiente:

"Artículo 8º— Los Bancos podrán cobrar comisión y abonar intereses en las cuentas corrientes, de acuerdo a las normas que dicte el Banco Central".

- b) Deróganse en el artículo 39 las frases finales:

"Esta devolución deberá hacerse antes de las tres de la tarde del día del canje. Pasado este término, el Banco librado no podrá repetir contra el Banco que lo dio en canje".

Artículo 60.— Deróganse las siguientes leyes y preceptos legales: ley 7.397, ley 9.869, Art. 1º de la ley 7.140, Art. 15 de la ley 7.200, Art. 137 de la ley 14.171 y sus modificaciones, Art. 16 de la ley 16.528 y Art. 27 de la ley 3.896, sobre Almacenes Generales de Depósito.

Artículo 61.— Deróganse los artículos 9 a 16 de la ley Nº 17.318. Deróganse, asimismo, las referencias que el artículo 1º de la ley Nº 16.407 y el artículo 46 bis de la ley Nº 4.657 y otras disposiciones legales o reglamentarias hacen a la Comisión Nacional del Ahorro, sin perjuicio de las facultades que esta ley confiere al Consejo Monetario y al Comité Ejecutivo del Banco Central sobre las materias de que tratan tales disposiciones.

Artículo 62.— Las referencias que las normas legales y reglamentarias hagan al Directorio y Directores del Banco Central, se entenderán hechas al Comité Ejecutivo y a los miembros del Comité, respectivamente.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º.— El Banco Central podrá adquirir las acciones de las clases "B", "C" y "D" del mismo Banco que existan en circulación, para lo cual realizará las gestiones conducentes a tal compra en el precio y condiciones que se fijen de común acuerdo con los respectivos dueños de las acciones, dentro del plazo de noventa días a contar de la publicación de esta ley.

Transcurrido el plazo indicado, decláranse de utilidad pública dichas acciones, las que quedarán expropiadas y sin efecto por el solo ministerio de la ley.

La indemnización, a falta de acuerdo entre el Banco Central y el propietario, se fijará en conformidad al procedimiento del Título XV del Libro IV del Código de Procedimiento Civil, pudiendo el propietario interesado iniciar el procedimiento.

Artículo 2º.— El capital a que se refiere el artículo 16 se formará con la actual cuenta capital y con las cantidades que sea necesario traspasar de sus actuales fondos de reserva y desde ese momento quedarán sin valor las acciones emitidas en conformidad al DFL. 247, de 1960; salvo para los efectos de la compra o expropiación que se autorizan en el artículo anterior. El excedente de las actuales reservas quedará como tal y de él se deducirán las cantidades necesarias para efectuar el pago del precio de las compras de acciones o de las indemnizaciones.

Artículo 3º.— Los títulos de renta emitidos por el Banco Central durante la vigencia del DFL. Nº 247, de 1960, conservarán las franquicias que la referida ley les reconocía. Tales franquicias se harán extensivas a los Certificados de Ahorro Reajustables, CAR, Serie E, que hayan sido emitidos antes del 1º de enero de 1976, a los Certificados de Ahorro Reajustables, Serie "F", emitidos antes del 1º de octubre de 1978 y a los Certificados de Ahorro Reajustables Serie "D", emitidos por el Banco Central de Chile a contar del 28 de junio de 1975 (25).

(25) Artículo modificado, en la forma que aparece en el texto, por el artículo 5º del decreto ley Nº 2.324, de 31 de agosto de 1978, y por el artículo único del decreto ley Nº 2.656, de 23 de mayo de 1979.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.— AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.— JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.— GUSTAVO LEIGH GUZMAN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.— CESAR MENDOZA DURAN, General, Director General de Carabineros.— Jorge Cauas Lama, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a U. para su conocimiento.

Saluda atentamente a U.— Pedro Larrondo Jara, Capitán de Navío (AB), Subsecretario de Hacienda.

INDICE ANALITICO
DE LA LEY ORGANICA
DEL CONSEJO MONETARIO
Y DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

ACCIONES

Facultad para adquirir las acciones de las clases B, C y D.

Art. 1º, transitorio, inc. 1º.

Anulación de las emitidas en conformidad al D.F.L. 247 de 1960.

Art. 2º, transitorio.

Deducción de las reservas de las cantidades necesarias para el pago de las adquiridas o expropiadas.

Art. 2º, transitorio.

ACUERDOS DEL COMITE

Adopción por mayoría de votos.

Art. 27, inc. 1º.

Publicación y notificación.

Art. 40.

Voto unánime de los integrantes del Comité para:

Conceder créditos en moneda extranjera otorgados por instituciones financieras, sin sujeción a limitaciones legales establecidas para su otorgamiento.

Art. 19, Nº 2, inc. 3º.

Recibir depósitos de otras instituciones o empresas del Estado.

Art. 19, Nº 6, inc. 2º.

Contratar créditos externos en el exterior.

Art. 21, Nº 3.

Conceder créditos en moneda nacional o extranjera a Estados extranjeros o entidades financieras internacionales o extranjeras.

Art. 21, Nº 7.

Designar y remover al Secretario y Revisor General.

Art. 34, inc. 1º.

Efectuar cargos en los fondos de reserva para cubrir pérdidas.

Art. 51.

ACUERDOS DEL CONSEJO

Adopción por mayoría de votos.

Art. 4º, inc. 2º.

ACUÑACION DE MONEDAS

Potestad exclusiva del Banco.

Art. 17.

Facultad para contratarla dentro o fuera del país.

Art. 45.

Exención de todo impuesto o gravamen.

Art. 55.

ACUÑACION DE MONEDAS DE ORO

Facultad para ordenarla a la Casa de Moneda de Chile.
Art. 44.

ADMINISTRACION DEL BANCO

Facultades del Comité.
Art. 26.
Delegación de facultades del Comité en sus integrantes y otros funcionarios.
Art. 32.
Funciones del Gerente General.
Art. 33, inc. 3º.

ADMINISTRACION DEL ESTADO

El Banco no se considerará como integrante de la Administración del Estado.
Art. 14.

ADQUISICION DE ACCIONES

Véase: Acciones.

ADQUISICION DE TITULOS

Véase: Valores.

ADUANAS

Obligación de recibir a la par valores emitidos por el Banco en pago de gravámenes a servicios aduaneros.
Art. 22, Nº 1, inc. 4º.
Obligación del Banco de pagar derechos aduaneros.
Art. 55.

AGENTE FISCAL

Actuación del Banco como agente fiscal en materias compatibles con sus finalidades.
Art. 20, Nº 1.

AHORRO

Fijación de políticas por el Consejo.
Arts. 3º y 9º, letra e).

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITOS

Derogación del Art. 27 de la Ley Nº 3.896 referente a control y vigilancia.
Art. 60.

AMORTIZACIONES

Facultad para rescatar títulos emitidos mediante amortizaciones extraordinarias.
Art. 22, Nº 1, inc. 1º.

AMORTIZACIONES

Facultad para emitir títulos sin plazos fijos de amortización.
Art. 22, Nº 1, inc. 2º.

ARANCELES

Fijación de política arancelaria por el Consejo.
Arts. 3º y 9º, letra i).
Obligación del Banco de pagar derechos aduaneros.
Art. 55.

ASISTENCIA A SESIONES DEL CONSEJO

Representantes alternos.
Art. 5º, inc. 1º.
Superintendente de Bancos.
Art. 7º.
Ministro de Relaciones Exteriores.
Art. 9º, letra i).

ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO

Facultad del Banco para dictar normas sobre captación de fondos y regulación de créditos.
Art. 18, Nº 1, incs. 1º y 2º.

ATRIBUCIONES DEL BANCO

Normativas para las empresas bancarias e instituciones financieras y de crédito.
Art. 18.
En materia de financiamiento y coordinación de sistema bancario y financiero.
Art. 19.
Con relación al Fisco.
Art. 20.
Cambios internacionales.
Art. 21.
Comercio Exterior.
Art. 21.
En materia internacional.
Art. 21.
Emisión de valores y operaciones en mercado abierto.
Art. 22, inc. 1º.
Generales.
Art. 24.

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO

Véase: Consejo Monetario.

AUSENCIAS DEL

Presidente del Consejo. Reemplazo.
Art. 4º, inc. 1º.

AUSENCIAS DEL

Titular del Consejo. Derecho a voto del altermo.

Art. 5º, inc. 1º.

Vicepresidente del Banco. Subrogación.

Art. 5º, incs. 2º y 28, letra b).

AVALES Y FIANZAS

Facultad para dictar normas aplicables a instituciones financieras.

Art. 18, Nº 7.

BALANCES

Obligación de practicarlos anualmente.

Art. 50, inc. 1º.

Presentación a Superintendencia de Bancos.

Art. 53.

Normas de presentación y publicidad.

Art. 54, incs. 2º y 3º.

BANCO

Alcance del término para los efectos de la Ley Orgánica.

Art. 1º, inc. 1º.

BANCO CENTRAL

Todas las materias que se refieren al Banco están indicadas de acuerdo al tema más específico posible y se encuentran distribuidas en el respectivo orden alfabético del Índice. Como ejemplo pueden citarse las siguientes materias:

Acuerdos, Administración, Atribuciones, Capital, Comité Ejecutivo, Domicilio, Emisión, Gerente General, Naturaleza Jurídica, Objeto, Personal, Presidente, Quórum, Vicepresidente.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Participación del Banco en representación del Gobierno.

Art. 21, Nº 1.

BANCO INTERAMERICANO DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO

Participación del Banco en representación del Gobierno.

Art. 21, Nº 1.

BIENES DE CAPITAL NACIONALES

Créditos para su adquisición interna no estarán sujetos a limitaciones legales para su otorgamiento.

Art. 19, Nº 2, inc. 2º.

BIENES EN GARANTIA

Facultad del Banco para recibirlos.

Art. 19, Nº 7.

BIENES RAICES

Adquisición y mantención para funcionamiento de oficinas.

Art. 23, inc. 1º.

Adquisición y mantención de los transferidos en pago por créditos concedidos.

Art. 23, inc. 2º.

Enajenación de los adquiridos en pago de obligaciones.

Art. 23, inc. 3º.

BILLETES

Emisión exclusiva.

Art. 17.

Publicación en el Diario Oficial de los acuerdos que se refieren a las características.

Art. 40, inc. 1º.

Facultad para contratar la impresión en el país o el extranjero.

Art. 45.

Valor y características.

Art. 46.

Retiro de circulación de unidades en mal estado.

Art. 48, inc. 1º.

Pago de su valor nominal o fracción de él, según partes destruidas.

Art. 48, inc. 2º y siguientes.

Forma de inutilización.

Art. 49.

Curso legal, poder liberatorio y circulación ilimitada

Art. 47.

Exención de impuesto y gravámenes a elementos para impresión.

Art. 55.

BOLETA DE CONSIGNACION

Véase: Consignación.

BONOS Y DEBENTURES

Compra y venta en mercado abierto.

Art. 22, Nº 3.

CAJA AUTONOMA DE AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

Derogación del Art. 15 de la Ley Nº 7.200, que facultaba al Presidente de la República para contratar préstamos descontables en el Banco.

Art. 60.

CAJA DE PREVISION DE EMPLEADOS PARTICULARES

Derogación de Ley Nº 9.869, que autorizaba préstamos del Banco Central.

Art. 60.

CAMARAS DE COMPENSACION

Facultad del Banco para autorizar su creación y reglamentar su funcionamiento.

Art. 19, Nº 5.

CAMBIOS INTERNACIONALES

Fijación de políticas por el Consejo.

Arts. 3º y 9º, letra h).

Atribuciones del Banco.

Art. 21.

Ejercicio de facultades y atribuciones que las leyes otorguen al Banco.

Art. 21, Nº 4.

Facultad para realizar operaciones, dictar instrucciones y normas y para autorizar a bancos, instituciones financieras y particulares para realizarlas.

Art. 21, Nº 5.

Publicación en el Diario Oficial de acuerdos o resoluciones de carácter general.

Art. 40, inc. 1º.

CANJE DE BILLETES

Destruídos.

Art. 48.

CANJE DE CHEQUES

Véase: Cámara de Compensación.

CAPITAL

Forma de fijar el capital autorizado y monto del capital inicial.

Art. 16.

Formación por intermedio de la cuenta capital y con traspasos de fondos de reserva.

Art. 2º transitorio.

CAPTACION DE FONDOS DEL PUBLICO

Facultad para dictar normas a bancos, instituciones financieras y de crédito.

Art. 18, Nº 1, inc. 1º.

Carácter general de las normas que se dicten.

Art. 18, Nº 1, inc. 1º.

Facultad para establecer relaciones entre operaciones activas y pasivas de las instituciones financieras.

Art. 18, Nº 8.

CAR

Véase: Certificados de Ahorro Reajustables.

CARTERA DE COLOCACIONES

Cesión a bancos e instituciones financieras.

Art. 19, Nº 4.

CASA DE MONEDA DE CHILE

Acuñación de monedas de oro por orden del Banco.

Art. 44.

CASTIGOS Y PROVISIONES

Acuerdo del Comité al término de cada ejercicio financiero anual.
Art. 50, inc. 1º.

CERTIFICADOS DE AHORRO REAJUSTABLES

Franquicias.
Art. 3º transitorio.

CESION DE CARTERA

Facultad del Banco para ceder documentos de cartera a bancos e instituciones financieras.
Art. 19, Nº 4.

CIRCULANTE

Véanse los siguientes encabezamientos: Billetes, Emisión y Monedas.

COLOCACIONES BANCARIAS

Facultad del Banco para fijar distintos porcentajes de encaje o reservas técnicas en relación con finalidades o regiones.
Art. 18, Nº 4, inc. 2º.
Facultad para establecer las relaciones entre operaciones activas y pasivas de instituciones financieras.
Art. 18, Nº 8.

COMERCIO EXTERIOR

Fijación de políticas para el Consejo.
Arts. 3º y 9º, letra i).
Atribuciones del Banco.
Art. 21.
Ejercicio de facultades y atribuciones que las leyes otorguen al Banco.
Art. 21, Nº 4.
Publicación en el Diario Oficial de acuerdos o resoluciones de carácter general.
Art. 40, inc. 1º.

COMISION NACIONAL DEL AHORRO

Derogación de Arts. 9º a 16 de la Ley. Nº 17.318 que la creaba, y referencias del Art. 1º de la Ley Nº 16.407, Art. 46 bis de la Ley Nº 4.657 y otras disposiciones legales.
Art. 61.

COMISIONES BANCARIAS

Facultad para autorizar cobro a clientes por manejo de cuentas corrientes.
Art. 18, Nº 5.
Facultad para determinar máximos que pueden cobrar bancos e instituciones financieras.
Art. 18, Nº 6, inc. 1º.
Facultad para fijar las aplicables a cuentas corrientes.
Art. 59, letra a).

COMISIONES DE INFORMACION O ASESORIA

Designación por el Consejo.

Art. 6º.

COMITE EJECUTIVO

Alcance del término Comité para los efectos de la Ley.

Art. 1º, inc. 5º.

Funciones de dirección y administración del Banco, y de ejercicio de las facultades y atribuciones otorgadas al Banco Central.

Art. 26.

Integrantes.

Art. 27, inc. 1º.

Adopción de acuerdos por mayoría de votos.

Art. 27, inc. 1º.

Remuneraciones fijadas por el Consejo.

Art. 27, inc. 2º.

Designación de miembros por el Presidente de la República.

Art. 27, inc. 3º.

Subrogación.

Art. 28, inc. 1º.

Incompatibilidad de sus integrantes y subrogantes.

Art. 29, inc. 1º.

Inhabilidad para intervenir en operaciones de interés particular y de sus consanguíneos.

Art. 30.

Representación judicial del Banco.

Art. 31.

Determinación de facultades y funciones del Presidente y Vicepresidente del Banco.

Art. 33, inc. 2º.

Facultades e instrucciones impartidas a Gerente General para ejercer la administración del Banco.

Art. 33, inc. 3º.

Designación del Secretario y el Revisor General del Banco.

Art. 34, inc. 1º.

Votación unánime para diversas materias. Véase: Acuerdos del Comité.

COMPRA DE ACCIONES

Véase: Acciones.

CONSEJO MONETARIO

Alcance del término "Consejo" para los efectos de la Ley Orgánica.

Art. 1º, inc. 2º.

Creación e integrantes.

Art. 2º.

Sede de funcionamiento en el Banco.

Art. 2º, inc. 2º.

Funciones.

Art. 3º.

Presidencia.

Art. 4º, inc. 1º.

CONSEJO MONETARIO

Quórum y adopción de acuerdos.

Art. 4º, inc. 2º.

Representantes alternos.

Art. 5º.

Sujeción de los representantes alternos a las incompatibilidades del

Art. 29.

Art 5º, inc. 3º.

Designación de comisiones de información o asesoría.

Art. 6º.

Designación y atribuciones del Secretario.

Art. 8º, inc. 1º.

Atribuciones generales.

Art. 9º.

Atribuciones destinadas a orientar las actividades de las empresas bancarias y de entidades financieras.

Art. 10.

Acuerdo para establecer oficinas del Banco en el extranjero.

Art. 15.

Informe previo para la suspensión de la facultad de exportar o importar oro que puede decretar el Presidente de la República.

Art. 21, Nº 6, inc. 2º.

Facultad para dictar normas sobre emisión de instrumentos superiores a un año.

Art. 22, Nº 1, inc. 5º.

Fijación de remuneraciones del Comité.

Art. 27.

Aprobación de la planta de personal del Banco.

Art. 31.

Reclamo de ilegalidad contra las normas que dicte el Consejo.

Art. 35, inc. 1º.

Publicación en el Diario Oficial de resoluciones de aplicación general.

Art. 40, inc. 2º.

CONSIGNACION

Valor de la boleta de consignación y monto mínimo para reclamaciones.

Art. 35, incs. 2º y 3º.

Declaración a beneficio fiscal.

Art. 38.

Devolución a reclamante.

Art. 39.

CONTRATOS

Facultad del Banco para celebrarlos en cumplimiento de su objetivo.

Art. 24.

CONTRATOS DE CREDITOS

Facultad del Banco para celebrarlos.

Art. 19, Nº 2, inc. 1º.

CONTROL CREDITICIO

Carácter general de normas que se dicten y sus excepciones específicas.
Art. 18, Nº 1, inc. 3º.

CONTROL CUALITATIVO DEL CREDITO

Facultad del Banco para dictar normas.
Art. 18, Nº 1, inc. 1º.

CONTROL CUANTITATIVO DEL CREDITO

Facultad del Banco para dictar normas.
Art. 18, Nº 1, inc. 1º.

CONVENCIONES INTERNACIONALES

Aplicación de disposiciones que correspondan a finalidades del Banco.
Art. 21, Nº 2, inc. 1º.

CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO

Entrega por el Fisco de cambios equivalentes en moneda corriente del saldo deudor.
Art. 21, Nº 2, inc. 2º.

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

Facultad del Banco para dictar normas sobre captación de fondos y regulación del crédito.
Art. 18, Nº 1, incs. 1º y 2º.

COOPERATIVAS DE CONSUMO

Derogación de la Ley Nº 7.397, que autorizaba al Banco para concederles préstamos.
Art. 60.

COORDINACION DEL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO

Atribuciones del Banco Central.
Art. 19.

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

Participación del Banco en representación del Gobierno.
Art. 21, Nº 1.

CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO

Recepción de reclamos de ilegalidad.
Art. 35, inc. 1º.
Traslado de reclamación admitida.
Art. 37, inc. 1º.

CREDITOS

Fijación de políticas por el Consejo.
Arts. 3º y 9º, letra b).

CREDITOS

Facultad del Banco para dictar normas.

Art. 18, inc. 1º.

Facultad para establecer relaciones entre operaciones activas y pasivas de las instituciones financieras.

Art. 18, Nº 8.

Facultad del Banco para conceder préstamos en casos de emergencia.

Art. 19, Nº 1.

Refinanciamiento en moneda nacional y extranjera.

Art. 19, Nº 2.

Facultad del Banco para realizar operaciones de crédito de dinero con determinadas instituciones y prohibición de efectuarlas con cualquier otra persona.

Art. 25.

Facultad para conceder créditos.

Art. 21, Nº 7.

CREDITOS EN MONEDA EXTRANJERA

Concedidos con recursos obtenidos del Banco no estarán sujetos a limitaciones legales que rijan su otorgamiento.

Art. 19, Nº 2, inc. 3º.

CREDITOS EXTERNOS

Facultad para contratarlos en cualquier forma.

Art. 21, Nº 3.

Facultad para concederlos a Estados extranjeros, a Bancos Centrales o a entidades financieras extranjeras o internacionales.

Art. 21, Nº 7.

CUENTA CAPITAL

Formación del capital autorizado del Banco.

Art. 2º transitorio.

CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

Facultad para fijar intereses.

Art. 18, Nº 3.

Facultad para autorizar a bancos el cobro de comisión a sus clientes.

Art. 18, Nº 5.

CUENTAS DE AHORRO

Determinación por el Consejo de política de captación de dinero del público.

Art. 9º, letra e).

CURSO LEGAL

De billetes y monedas emitidos por el Banco.

Art. 47.

DEBENTURES

Ver: Bonos y Debentures.

DELEGACION DE FACULTADES

El Comité podrá hacerlo en determinados funcionarios del Banco.
Art. 32.

DEPOSITOS

Recepción de depósitos, en moneda nacional o extranjera, de las empresas bancarias e instituciones financieras.

Art. 19, Nº 6, inc. 1º.

Recepción de depósitos en moneda nacional o extranjera de otras instituciones o empresas del Estado, previo acuerdo unánime del Comité.

Art. 19, Nº 6, inc. 2º.

Recepción de depósitos en moneda nacional o extranjera de entidades financieras internacionales o extranjeras.

Art. 21, Nº 8.

DEPOSITOS A PLAZO

Facultad para fijar interés máximo aplicable.

Art. 18, Nº 3.

DEPOSITOS A LA VISTA

Facultad para fijar interés máximo aplicable.

Art. 18, Nº 3.

DEPOSITOS DE AHORRO

Determinación por el Consejo de política de captación de dinero del público.

Art. 9º, letra e).

DERECHO A VOTO

Representantes alternos del Consejo en ausencia del titular.

Art. 5º, inc. 1º.

DERECHO A VOZ

Superintendente de Bancos en las Sesiones del Consejo.

Art. 7º.

DERECHOS ADUANEROS

Obligación de pagarlos.

Art. 55.

DESARROLLO ECONOMICO

Objeto del Banco: propender al desarrollo mediante políticas que está facultado a aplicar.

Art. 13.

DESCUENTOS

Facultad para descontar a las entidades financieras, letras de cambio, pagarés y otros documentos negociables en moneda nacional y extranjera.

Art. 19, Nº 2.

DEUDA EXTERNA O INTERNA

Determinación de política por el Consejo.
Art. 9º, letra c).

DEUDAS DEL FISCO

Amortización o cancelación de deudas con el Banco con el producto de la valorización de las reservas.
Art. 43, Nº 1.
Pago a obligaciones con el Banco.
Art. 50, letra b).
Consignación en anexos de balances y estados de situación.
Art. 54, inc. 3º.

DIARIO OFICIAL

Publicación de acuerdos relativos a emisión y colocación de títulos del Banco.
Art. 22, Nº 1.
Publicación de resoluciones de carácter general del Consejo y del Comité.
Art. 40, incs. 1º y 2º.
Publicación de acuerdos sobre características de monedas y billetes fijados por el Comité.
Arts. 40 y 46.
Publicación de balances y estados de situación.
Art. 54, inc. 2º.

DIRECTOR DE ODEPLAN

Integrantes del Consejo.
Art. 2º.

DIRECTORES Y DIRECTORIO

Referencias de los textos legales se entenderán hechas a los miembros del Comité Ejecutivo.
Art. 62.

DIVISAS EXTRANJERAS

Fondo de reserva a mantenerse en el Banco.
Art. 41.
Fondo disponible en caja del Banco.
Art. 42, letra a).
Fondo depositado en bancos del exterior.
Art. 42, letra b).

DOCUMENTOS DEL BANCO

Corresponderá al Secretario atestiguar su veracidad y autenticidad.
Art. 34, inc. 2º.

DOCUMENTOS NEGOCIABLES

Facultad del Consejo para dictar normas sobre emisión y colocación.
Art. 9º, letra d).

DOMICILIO

Art. 15.

EFFECTOS DE COMERCIO

Facultad del Consejo para dictar normas sobre emisión y colocación.
Art. 9º, letra d).

EMISION

Potestad exclusiva para emitir billetes.
Art. 17.

EMISION DE TITULOS

Véase: Valores.

EMPATES DE VOTACION

Consejo Monetario.
Art. 4º, inc. 2º.
Comité Ejecutivo.
Art. 27, inc. 1º.

EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO

Derogación del Art. 1º de la Ley Nº 7.140 que disponía el descuento por el Banco de las letras de cambio aceptadas por la empresa.
Art. 60.

EMPRESAS BANCARIAS

Alcance del término para los efectos de la Ley Orgánica.
Art. 1º, inc. 3º.
Coordinación de actividades por el Consejo.
Art. 10.

EMPRESAS DEL ESTADO

Depósitos en el Banco previo acuerdo unánime del Comité.
Art. 19, Nº 6, inc. 2º.

ENCAJE BANCARIO

Determinación por el Consejo de política sobre exigencia a empresas bancarias.
Art. 9º, letra g).
Facultad para fijar los encajes y reservas técnicas y para establecer normas de excepción.
Art. 18, Nº 4, inc. 1º.
Publicación en el Diario Oficial de acuerdos o resoluciones de carácter general.
Art. 40, inc. 1º.

ESTADO DE SITUACION

Presentación al Superintendente de Bancos.
Arts. 53 y 54, inc. 1º.
Normas de publicidad y presentación.
Art. 54, inc. 2º y 3º.

EXCEDENTES DE RESERVAS

Véase: Fondo de Reservas.

EXCEDENTES DEL BANCO

Productos en cada ejercicio.
Art. 50, inc. 1º.
Destino.
Art. 50, letras a) y b).

EXPROPIACION DE ACCIONES

Declaración de utilidad pública.
Art. 1º transitorio, inc. 2º.
Deducción de las reservas de las cantidades necesarias para efectuar el pago de las indemnizaciones.
Art. 2º transitorio.

FIANZAS

Facultad para dictar normas sobre avales y fianzas aplicables a instituciones financieras.
Art. 18, Nº 7.

FINANCIAMIENTO DE SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO

Atribuciones del Banco.
Art. 19.

FISCALIZACION DEL BANCO

Corresponde la fiscalización y vigilancia al Revisor General.
Art. 34, inc. 3º.
Atribución exclusiva de la Superintendencia de Bancos.
Art. 52.

FISCO

Atribuciones del Banco con relación al Fisco.
Art. 20.
Facultad del Banco para actuar como agente fiscal.
Art. 20, Nº 1.
Obligación de entregar al Banco los cambios correspondientes para cancelar saldos deudores producidos en conformidad a convenios de créditos recíprocos.
Art. 21, Nº 2, inc. 2º.
Amortización o cancelación de deudas con el Banco con el producto de la valorización de las reservas.
Art. 43, Nº 1.

FISCO

Pago de deudas con remanente del ejercicio anual del Banco.
Art. 50, letra b).

FONDO DE RESERVAS

Formas de mantención.
Arts. 41 y 42.
Fijación por el Comité del contenido de fino y peso de las barras de oro que forman parte de la reserva.
Art. 42, letra b), inc. 2º.
Destino del producto en moneda corriente de la valorización por modificación de la paridad monetaria.
Art. 43, inc. 1º.
Amortización de las obligaciones del Fisco por la valorización del Fondo de Reserva.
Art. 43, Nº 1.
Incremento del Fondo de Reserva.
Art. 43, inc. 2º.
Formación para cubrir riesgos de colocaciones y operaciones de cambio.
Art. 50, letra a).
Cargos para cubrir pérdidas producidas.
Art. 51.
Deducción de las cantidades necesarias para la compra o indemnización de acciones.
Art. 2º transitorio.
Traspaso de las cantidades necesarias para la formación del capital autorizado.
Art. 2º transitorio.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Participación del Banco en representación del Gobierno.
Art. 21, Nº 1.

GASTOS BANCARIOS

Facultad para fijar los aplicables a cuentas corrientes bancarias.
Art. 18, Nº 3.
Facultad para determinar máximos que pueden cobrar bancos e instituciones financieras.
Art. 18, Nº 6, inc. 1º.

GERENTE GENERAL

Integrante del Comité.
Art. 27, inc. 1º.
Subrogante del Vicepresidente en el Comité.
Art. 28, letra b).
Subrogancia por el funcionario que corresponda según el orden señalado por el Comité.
Art. 28, letra c).
Delegación de facultades del Comité.
Art. 32.

GERENTE GENERAL

Representación judicial del Banco de acuerdo al Art. 8º del Código de Procedimiento Civil.

Art. 33, inc. 3º.

Ejercicio de la Administración inmediata del Banco y de las facultades y funciones que señala el Comité.

Art. 33, inc. 3º.

GERENTES DEL BANCO

Delegación de facultades del Comité.

Art. 32.

GIROS POSTALES

Obligación del Banco de pagar impuesto a los servicios y tarifas generales de giros postales y telegráficos.

Art. 55.

IMPRESION DE BILLETES

Facultad para contratarla dentro o fuera del país.

Art. 45.

Exención de todo impuesto o gravamen.

Art. 55.

IMPUESTOS

Compra, venta, exportación e importación de oro.

Art. 21, Nº 6, inc. 1º.

Recepción de títulos emitidos por el Banco en pago de impuestos, tributos, derechos, gravámenes o servicios de Tesorerías o Aduanas.

Art. 22, Nº 1, inc. 4º.

Exenciones y gravámenes aplicables al Banco.

Art. 55.

INCOMPATIBILIDADES

Funciones de representante alterno y del titular del Presidente de la República en el Consejo.

Art. 5º, inc. 4º.

Integrantes del Comité y sus subrogantes.

Art. 29, inc. 1º.

Facultades para extender las incompatibilidades de los integrantes del Comité a determinados funcionarios del Banco.

Art. 29, inc. 3º.

Inaplicabilidad por decreto supremo fundado del Presidente de la República.

Art. 29, inc. 4º.

INDEMNIZACION

Aplicación de las normas del Código de Procedimiento Civil por la expropiación de las acciones del Banco.

Art. 1º transitorio, inc. 3º.

INDEMNIZACION

Deducción de las reservas para efectuar el pago por la expropiación de acciones del Banco.
Art. 2º transitorio.

INFORMES

Presentación de los que solicite la Superintendencia de Bancos.
Art. 53.

INHABILIDADES

De miembros del Comité para votar o intervenir en operaciones que interesen a ellos o a parientes.
Art. 30, inc. 1º.

INSPECTORES DEL BANCO

Actuación bajo directiva de Revisor General.
Art. 34, inc. 3º.

INSTITUCION DE DERECHO PUBLICO

Naturaleza jurídica del Banco.
Art. 14.

INSTITUCIONES FINANCIERAS

Orientación y coordinación de actividades por el Consejo.
Art. 10.

INSTITUCIONES DEL ESTADO

Depósitos en el Banco previo acuerdo unánime del Comité.
Art. 19, Nº 6, inc. 2º.

INTERES BANCARIO

Determinación de política por el Consejo.
Art. 9º, letra f).
Facultad para fijar los intereses máximos aplicables a operaciones reajustables y no reajustables.
Art. 18, Nº 2.
Facultad para fijar los intereses abonables a cuentas corrientes bancarias y los máximos que puedan pagarse por depósitos a la vista o a plazo.
Art. 18, Nº 3.
Véase además: Tasas de Interés.

INUTILIZACION DE BILLETES

Forma de determinarla y efectuarla.
Art. 49.

INVERSIONES

Cesión de su cartera de documentos a bancos e instituciones financieras.
Art. 19, Nº 4.

JEFES DE OFICINA

Integrantes del Comité tendrán el carácter de Jefe de oficina para efectos legales.

Art. 27, inc. 3º.

LEY DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Modificaciones a los artículos 23, 24, 25 y 26 y derogación de los artículos 27, 28 y 30.

Art. 57.

LEY DE ESTIMULO A LAS EXPORTACIONES

Derogación del Art. 16 de la Ley N° 16.528 sobre líneas de créditos para exportaciones.

Art. 60.

LEY DEL ORO

Modificación al artículo 3º de la Ley N° 15.192.

Art. 58.

LEY GENERAL DE BANCOS

Aplicabilidad de sus disposiciones en lo compatible con los objetivos del Banco.

Art. 12, inc. 2º.

LEY ORGANICA DEL BANCO CENTRAL

Rige a la Institución.

Art. 12, inc. 1º.

Derogación del DFL. N° 247, de 1960.

Art. 56.

LEY SOBRE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS Y CHEQUES

Modificaciones a los artículos 8º y 39.

Art. 59, letra a).

LEY SOBRE RECONSTRUCCION Y FOMENTO

Derogación de facultad del Banco para conceder créditos en moneda extranjera por intermedio del sistema bancario o CORFO.

Art. 60.

LINEAS DE CREDITO

Facultad para abrirlas.

Art. 19, N° 2, inc. 1º.

MEMORIA ANUAL

Presentación a Superintendencia de Bancos.

Art. 53.

MERCADO DE CAPITALES

Fijación de políticas por el Consejo.

Art. 9º, letra d).

Facultad del Consejo para dictar normas sobre emisión y colocación de títulos.

Art. 9º, letra d).

Publicación en el Diario Oficial de resoluciones de aplicación general que adopte el Consejo.

Art. 40, inc. 2º.

MINISTERIO DE HACIENDA

Relación del Banco con el Gobierno.

Art. 12, inc. 1º.

MINISTRO DE ECONOMIA

Integrante del Consejo.

Art. 2º.

MINISTRO DE FE

Secretario del Consejo.

Art. 8º, inc. 1º.

Secretario del Banco.

Art. 34, inc. 2º.

MINISTRO DE HACIENDA

Integrante del Consejo.

Art. 2º.

Presidente del Consejo.

Art. 4º.

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

Integración al Consejo para determinar políticas de comercio exterior y arancelaria.

Art. 9º, letra i).

MONEDAS

Acuñación exclusiva.

Art. 17.

Publicación en el Diario Oficial de los acuerdos que se refieren a características.

Art. 40, inc. 1º.

Facultad para contratar acuñación en el país o extranjero.

Art. 45.

Valor y características.

Art. 46.

Curso legal, poder liberatorio y circulación ilimitada.

Art. 47.

Exención de impuestos y gravámenes a elementos para acuñación.

Art. 55.

MONEDAS DE ORO

Facultad para ordenar acuñación en Casa de Moneda de Chile.
Art. 44.

MULTAS

Aplicadas por Superintendencia de Bancos por infracción a normas sobre préstamos de urgencia.
Art. 19, Nº 1, inc. 2º.

NATURALEZA JURIDICA DEL BANCO

Institución autónoma con personalidad jurídica de duración indefinida.
Art. 12.
Institución de derecho público no considerada como integrante de la Administración del Estado.
Art. 14.

OBJETO DEL BANCO

Propender al desarrollo ordenado y progresivo de la economía nacional.
Art. 13.

OFICINA DE PLANIFICACION NACIONAL

Director de ODEPLAN integrante del Consejo.
Art. 2º.

OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS

Normas para establecer las relaciones que deben aplicarse a instituciones financieras.
Art. 18, Nº 8.

OPERACIONES BANCARIAS Y COMERCIALES

Facultad del Banco para realizarlas en cumplimiento de su objetivo.
Art. 24.

OPERACIONES EN MERCADO ABIERTO

Atribuciones relativas a emisión de valores y operaciones en mercado abierto.
Art. 22.

OPERACIONES REAJUSTABLES

Véase: Reajustabilidad.

ORGANISMOS INTERNACIONALES

Participación del Banco en representación del Gobierno.
Art. 21, Nº 1.

ORO

Facultad para comprarlo, venderlo, exportarlo e importarlo.
Art. 21, Nº 6, inc. 1º.

ORO

Facultad del Presidente de la República para decretar la suspensión de importar o exportar oro, previo informe del Consejo.

Art. 21, Nº 6, inc. 2º.

Fondo de reserva en oro.

Arts. 41 y 42.

Determinación del peso y contenido de fino de las barras de oro de la reserva por el Comité.

Art. 42, letra b), inc. 2º.

Destino del producto de la valorización de la reserva de oro.

Art. 43.

Facultad de ordenar acuñación de monedas de oro en la Casa de Moneda de Chile.

Art. 44.

Inaplicabilidad a las monedas de oro de las disposiciones referentes a medios de pago.

Art. 47.

PAPEL PARA BILLETES

Exención de impuestos o gravámenes.

Art. 55.

PERDIDAS

Cargos en los fondos de reserva para cubrir pérdidas ya producidas.

Art. 51.

PERSONAL

Aplicación de las normas del sector privado.

Art. 14.

Incompatibilidades de miembros del Comité pueden extenderse a determinados empleados.

Art. 29, inc. 3º.

Facultad del Comité de contratar el personal dentro de la planta aprobada por el Consejo.

Art. 31.

Delegación de facultades del Comité.

Art. 32.

Véase, además, la información bajo: Remuneraciones, Revisor General y Secretario.

PLANES NACIONALES DE AHORRO

Elaboración por el Consejo.

Art. 9º, letra e).

PODER LIBERATORIO

Billetes y monedas emitidos por el Banco.

Art. 47.

POLITICAS

Arancelaria, crediticia, de ahorro, de cambios internacionales, de comercio exterior, de mercado de capitales y monetaria. Fijación por el Consejo.

Arts. 3º y 9º.

Medios para lograr el objeto del Banco.

Art. 13.

POLITICAS DEL CONSEJO

Obligatoriedad de cumplimiento por organismos que tengan facultades normativas para ponerlas en ejecución.

Art. 11.

POTESTAD EMISORA

Exclusividad del Banco de emitir billetes y acuñar monedas.

Art. 17.

PRECIOS DE ACCIONES

Véase: Acciones.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Representantes del Presidente en el Consejo.

Arts. 2º y 5º, inc. 1º.

Suspensión de la facultad de exportar o importar oro previo informe del Consejo.

Art. 21, Nº 6, inc. 2º.

Nombramiento de integrantes del Comité.

Art. 27, inc. 3º.

Dictación de decreto supremo para no aplicación de incompatibilidades.

Art. 29, inc. 4º.

PRESIDENTE DEL BANCO

Integrante del Consejo.

Art. 2º.

Designación de representante alterno al Consejo.

Art. 5º, inc. 1º.

Integrante del Comité.

Art. 27, inc. 1º.

Delegación de facultades del Comité.

Art. 32.

Representación extrajudicial.

Art. 33, inc. 1º.

Ejercicio de facultades y funciones que señale el Comité.

Art. 33, inc. 2º.

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Ministro de Hacienda.

Art. 4º, inc. 1º.

PRESTAMOS DE URGENCIA

Concesión y plazo.

Art. 19, N° 1, inc. 1º.

Condiciones, renovación y sanciones administrativas.

Art. 19, N° 1, inc. 2º.

PROHIBICIONES

Realización de operaciones de crédito con personas, entes no mencionados en los artículos 19, N° 1, y 20.

Art. 25.

Inhabilidad de los miembros del Comité para intervenir o votar en operaciones que sean de su interés o de empresas particulares o parientes.

Art. 30.

PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL

Véase: Diario Oficial.

PUBLICIDAD

Normas para resoluciones de carácter general y particular del Consejo y del Comité.

Art. 40.

Véase además: Diario Oficial.

QUORUM

Consejo Monetario.

Art. 4º, inc. 2º.

Comité Ejecutivo.

Art. 27, inc. 1º.

REAJUSTABILIDAD

Facultad del Banco para fijar interés máximo bancario a operaciones reajustables y no reajustables.

Art. 18, N° 2.

De valores emitidos por el Banco.

Art. 22, N° 1, inc. 1º.

RECLAMACIONES DE ILEGALIDAD

Normas, plazo y monto de consignación.

Art. 35.

Requisitos del escrito de reclamación.

Art. 36, inc. 2º.

Rechazo del recurso.

Art. 36, inc. 2º.

Traslado al Banco del reclamo admitido.

Art. 37, inc. 1º.

Plazo para dictar sentencia.

Art. 37, inc. 2º.

RECLAMACIONES DE ILEGALIDAD

Declaración a beneficio fiscal del monto de consignación.

Art. 38.

Efectos de la aceptación del reclamo.

Art. 39.

REDESCUENTOS Y REFINANCIAMIENTOS

Facultad para redescantar y refinanciar a los bancos e instituciones financieras, documentos negociables en moneda nacional o extranjera.

Art. 19, Nº 2.

REFINANCIAMIENTO

Ver: Redescuentos y refinanciamientos.

REGIONALIZACION

Facultad del Banco para fijar distintos porcentajes de encaje o reservas técnicas en relación con la región en que se efectúen las colocaciones.

Art. 18, Nº 4, inc. 2º.

REGLAMENTO DE LA LEY

Rige a la Institución.

Art. 12, inc. 1º.

Normas para la compra y ventas de bonos o debentures.

Art. 22, Nº 3.

REGLAMENTO DE SALA

Consejo Monetario.

Art. 4º, inc. 1º.

REGLAMENTO DEL BANCO

Rige a la Institución.

Art. 12, inc. 1º.

REGULACION MONETARIA

Compra y venta de títulos del Fisco u otros con garantía del Estado.

Art. 22, Nº 2.

Compra y venta en mercado abierto de bonos, debentures y otros títulos de venta fija.

Art. 22, Nº 3.

REMESAS DE FONDOS

Obligación del Banco de pagar impuesto a los servicios y tarifas generales de remesas de fondos.

Art. 55.

REMOCION DE FUNCIONARIOS

Acuerdo unánime del Comité para remover al Secretario y Revisor General.

Art. 34, inc. 1º.

REMUNERACIONES DEL PERSONAL

Fijación de remuneraciones, deberes y obligaciones.
Art. 31.

REPRESENTACION DEL COMITE

Delegación de facultades del Comité en sus integrantes y otros funcionarios.
Art. 32.

REPRESENTACION EXTRAJUDICIAL

Corresponde al Presidente del Banco.
Art. 33, inc. 1º.

REPRESENTACION JUDICIAL

Ejercida por el Comité.
Art. 31.
Gerente General en los términos del Art. 8º del Código de Procedimiento Civil.
Art. 33, inc. 3º.

REPRESENTANTES ALTERNOS

Consejo Monetario.
Art. 5º.

RESCATE DE VALORES

Véase: Valores.

RESERVAS

Véase: Fondo de Reserva.

RESERVAS TECNICAS

Determinación por el Consejo de política sobre exigencias a instituciones financieras y de crédito.
Art. 9º, letra g).
Facultad para fijarlas y para dictar normas.
Art. 18, Nº 4, incs. 1º y 2º.
Publicación en Diario Oficial de acuerdos o resoluciones de carácter general.
Art. 40, inc. 1º.

RESOLUCIONES DEL COMITE

Derecho a reclamo ante Corte de Apelaciones de Santiago por resoluciones que se estimen ilegales.
Art. 35, inc. 1º.
Publicación en Diario Oficial de las resoluciones de carácter general.
Art. 40, inc. 1º.
Forma de notificación al público e interesados de las resoluciones de carácter particular.
Art. 40, inc. 4º.

RESOLUCIONES DEL CONSEJO

Publicación en Diario Oficial de las resoluciones de carácter general.
Art. 40, inc. 1º.

RETIRO DE BILLETES

En mal estado.
Art. 48, inc. 1º.

REVALORIZACIONES

Determinadas por el Comité al término del ejercicio anual.
Art. 50, inc. 1º.

REVISOR GENERAL DEL BANCO

Designación, renovación y subrogación.
Art. 34.
Funciones.
Art. 34, incs. 3º y 4º.
Obligación de enviar comunicación a Gerente General de observaciones sobre operaciones del Banco.
Art. 34, inc. 3º.
Obligación de enviar copia de sus observaciones a Superintendencia de Bancos.
Art. 34, inc. 4º.

SECRETARIO

Consejo Monetario.
Art. 8º, inc. 1º.
Funciones, designación, remoción y subrogación del Secretario del Banco.
Art. 34, incs. 1º y 2º.

SECTOR PRIVADO

Aplicación al Banco de las normas que rigen este sector.
Art. 14.

SOCIEDADES FINANCIERAS

Coordinación y orientación de actividades por el Consejo.
Art. 10.
Facultad del Banco para dictar normas sobre captación de Fondos y regulación de créditos.
Art. 18, N° 1, inc. 2º.

SUBGERENTES DEL BANCO

Delegación de facultades del Comité.
Art. 32.

SUBROGACION

Presidente del Consejo.
Art. 4º, inc. 1º.

SUBROGACION

Integrante del Comité.
Art. 28, inc. 1º y 33, inc. 1º.
Secretario y Revisor General del Banco.
Art. 34, inc. 1º.

SUCURSALES

Facultad para establecerlas en territorio nacional y fuera del país.
Art. 15.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Informe previo para fijación de capital autorizado del Banco.
Art. 16.
Consulta previa para aplicar acuerdos relativos a las atribuciones normativas del Banco.
Art. 18, Nº 6, inc. 2º.
Informe sobre necesidad y efectividad de circunstancias que motivan préstamos de urgencia a bancos.
Art. 19, Nº 1, inc. 2º.
Aplicación de sanciones por infracción a normas de administración financiera en relación con préstamos de urgencia.
Art. 19, Nº 1, inc. 2º.
Recepción de observaciones del Revisor General.
Art. 34, inc. 4º.
Fiscalización exclusiva del Banco.
Art. 52.
Obligación de presentarle informes, estados, balance y memoria anual del Banco.
Art. 53.
Presentación de estado de situación mensual del Banco.
Art. 54, inc. 1º.

SUPERINTENDENTE DE BANCOS

Asistencia a sesiones del Consejo.
Art. 7º.

TARIFAS GENERALES

Obligación del Banco de pagar impuestos a los servicios y tarifas generales de remesas de fondos o giros postales y telegráficos.
Art. 55.

TASAS DE INTERES

Atribución para fijar las aplicables a las operaciones que efectúe el Banco.
Art. 19, Nº 3.
Facultad para fijar tasas superiores a los intereses máximos establecidos para operaciones reajustables o no reajustables del Banco.
Art. 19, Nº 3.
Fijación a valores emitidos por el Banco.
Art. 22, Nº 1, inc. 1º.

TASAS DE INTERES

Publicación en el Diario Oficial de acuerdos o resoluciones de carácter general.

Art. 40, inc. 1º.

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Recepción a la par, cuando conste expresamente, de valores emitidos por el Banco.

Art. 22, Nº 1, inc. 4º.

TITULOS

Véase: Valores.

TRATADOS INTERNACIONALES

Aplicación de disposiciones que correspondan a finalidades del Banco.

Art. 21, Nº 2, inc. 1º.

UNANIMIDAD DE VOTACION

Véase: Acuerdos del Comité.

UNIDAD MONETARIA

Valor de billetes y monedas expresados en la unidad monetaria vigente.

Art. 46.

UTILIDAD PUBLICA

Expropiación de las acciones de las clases A, B y C.

Art. 1º transitorio, inc. 2º.

VALOR NOMINAL

De billetes emitidos por el Banco.

Art. 47.

VALORES

Facultad del Consejo para dictar normas sobre emisión y colocación de valores mobiliarios.

Art. 9º, letra d).

Facultad del Banco para emitir y colocar y para establecer montos, tasas de interés, plazos y clases de monedas.

Art. 22, Nº 1, inc. 1º.

Facultad del Banco para establecer reajustabilidad y calidad de nominativos, a la orden o al portador.

Art. 22, Nº 1, inc. 1º.

Facultad del Banco para rescatarlos mediante amortizaciones extraordinarias o adquirirlos en el mercado.

Art. 22, Nº 1, inc. 1º.

Facultad del Banco para emitir títulos sin plazos fijos de amortización.

Art. 22, Nº 1, inc. 2º.

VALORES

Facultad del Banco para colocarlos en el público o instituciones fiscales, empresas bancarias o instituciones financieras.

Art. 22, Nº 1, inc. 3º.

Facultad del Banco para comprar y vender en mercado abierto, títulos del Fisco con fines de regulación monetaria.

Art. 22, Nº 2.

Facultad del Banco para comprar y vender en mercado abierto, bonos, debentures u otros títulos de renta fija.

Art. 22, Nº 3.

Publicación en el Diario Oficial de resoluciones de aplicación general que adopte el Consejo.

Art. 40, inc. 2º.

Conservación de franquicias para los títulos de Renta emitidos durante la vigencia del D.F.L. 247, de 1960.

Art. 3º, transitorio.

VALORES EN GARANTIA

Facultad del Banco para recibirlos.

Art. 19, Nº 7.

VALORIZACION

Destino del producto de la valorización de la reserva de oro o en moneda extranjera.

Art. 43.

VICEPRESIDENTE DEL BANCO

Representante alterno al Consejo Monetario.

Art. 5º, inc. 1º.

Subrogación por ausencia, vacancia o impedimento.

Art. 5º, inc. 2º.

Integrante del Comité Ejecutivo.

Art. 27, inc. 1º.

Subrogante del Presidente en Comité Ejecutivo.

Art. 28, letra a); 33, inc. 1º.

Delegación de facultades del Comité.

Art. 32.

Ejercicio de facultades y funciones que señale el Comité.

Art. 33, inc. 2º.

VIGILANCIA DEL BANCO

Corresponde al Revisor General la vigilancia inmediata de todas las reparticiones del Banco.

Art. 34, inc. 3º.

V. LEY ORGANICA
DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE

DECRETO LEY Nº 2.079 (*)

(*) Publicado en el Diario Oficial del 18 de enero de 1978.

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO LEY N° 2.079, DE 1978

Fija Texto de la Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile

(Publicado en el "Diario Oficial" N° 29.966, de 18 de enero de 1978)

Núm. 2.079.— Santiago, 16 de diciembre de 1977.— Visto: lo dispuesto en los decretos leyes N°s. 1 y 128, de 1973; 527, de 1974, y 991, de 1976,

La Junta de Gobierno de la República de Chile ha acordado dictar el siguiente

DECRETO LEY:

Fijase el siguiente texto de la Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile:

TITULO I

NATURALEZA, OBJETO, CAPITAL Y DOMICILIO

Artículo 1º— El Banco del Estado de Chile es una empresa autónoma del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida, sometida exclusivamente a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que se relacionará con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda.

Artículo 2º— El Banco se regirá preferentemente por las normas de esta Ley Orgánica, y, en lo no previsto en ella, por la legislación aplicable a las empresas bancarias y demás disposiciones que rijan para el sector privado. No le serán aplicables, por tanto, las normas generales o especiales relativas al sector público, salvo que ellas dispongan de modo expreso que han de afectar al Banco del Estado de Chile.

Artículo 3º— El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el fin de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones.

Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a

una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda.

Artículo 4º— El capital autorizado del Banco es de \$ 4.000.000.000 (cuatro mil millones de pesos) y se enterará con los fondos que actualmente tiene contabilizados como capital y reservas en moneda nacional. Si dichos fondos no alcanzaren para completar el capital autorizado, éste se enterará con cargo a revalorizaciones o a las utilidades que se produzcan en los futuros ejercicios.

Este capital podrá ser aumentado por decreto supremo, previo informe favorable de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Artículo 5º— El Banco practicará balance general el 31 de diciembre de cada año, consultando las correcciones monetarias, provisiones, castigos y demás ajustes que correspondan de acuerdo con las normas impartidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, balance que se publicará en el Diario Oficial.

El Presidente de la República, previo informe de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y del Consejo Directivo del Banco, podrá destinar el todo o parte de las utilidades netas a beneficio fiscal, mediante decreto supremo, dictado al efecto dentro de los treinta días siguientes a la publicación del balance.

Las utilidades que no sean destinadas al Fisco pasarán a formar parte de las reservas del Banco.

Artículo 6º— El Banco tiene domicilio en la ciudad de Santiago y puede abrir o cerrar, dentro o fuera del territorio nacional, las sucursales o agencias que determine.

Artículo 7º— El Banco deberá establecer una progresiva descentralización de sus funciones en concordancia con las normas que rijan sobre regionalización del país. A tal efecto, el Consejo Directivo adoptará los acuerdos que las circunstancias requieran para el cumplimiento de esta finalidad, sin que le sean aplicables las disposiciones que, sobre la materia, rijan para los bancos comerciales.

TITULO II

DIRECCION Y ADMINISTRACION

PARRAFO PRIMERO

Del Consejo Directivo

Artículo 8º— El Banco estará dirigido por el Consejo Directivo y administrado por el Comité Ejecutivo. Cada vez que en este decreto ley se usen las expresiones "Consejo" y "Comité", se entenderá que se alude al Consejo Directivo y al Comité Ejecutivo, respectivamente.

Artículo 9º— La dirección superior del Banco corresponderá a un Consejo de siete miembros, que estará formado de la siguiente manera:

a) Por seis personas de la exclusiva confianza del Presidente de la República, quien las nombrará por decreto supremo emanado del Ministerio de

Hacienda, una de las cuales será designada Presidente del Banco y otra Vicepresidente del mismo.

El Presidente del Banco lo será también del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo a que se refiere el artículo 12 de este decreto ley.

El Vicepresidente del Consejo Directivo será el subrogante del Presidente.

b) Por un representante de los trabajadores del Banco, que será elegido por ellos mismos, conforme a las normas que rijan para los bancos comerciales.

En un mismo acto se elegirá al representante laboral y a un suplente. Ambos gozarán del mismo fuero de que gozan los dirigentes sindicales.

Los directores a que se refiere la letra a) precedente estarán afectos a las incompatibilidades y prohibiciones establecidas en los artículos 15 y 17 de este decreto ley.

Artículo 10.— El Consejo deberá funcionar a lo menos con la mayoría de sus miembros en ejercicio y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los miembros asistentes, salvo que la ley exija quórum especial.

En caso de empate, decidirá el voto del Presidente.

Artículo 11.— Serán funciones del Consejo:

a) Señalar la política general del Banco, estableciendo las normas generales a que deben ajustarse sus operaciones;

b) Dictar los reglamentos internos por los que se regirá el Banco;

c) Aprobar el sistema de remuneraciones del personal (1);

d) Crear o suprimir sucursales en el país o en el exterior;

e) Pronunciarse sobre los asuntos que le someta a su conocimiento el Comité;

f) Ejercer la supervigilancia y fiscalización superior del Banco. Para estos efectos, analizará periódicamente la marcha de sus operaciones y actividades;

g) Aprobar el balance y memoria anual, e informar al Presidente de la República sobre el funcionamiento y desarrollo de la empresa, y proponerle al término de cada ejercicio el destino de las utilidades, y

h) Ejercer las demás funciones que le señalen la ley o los reglamentos.

PARRAFO SEGUNDO

Del Comité Ejecutivo

Artículo 12.— La administración superior del Banco corresponderá al Comité formado por el Presidente, el Vicepresidente y el Gerente General de la empresa.

Artículo 13.— En caso de vacancia, ausencia u otra imposibilidad para ejercer sus funciones, los miembros del Comité serán subrogados en la siguiente forma:

a) El Presidente por el Vicepresidente;

b) El Vicepresidente por el Gerente General, y

c) El Gerente General por el funcionario del Banco que corresponda según el orden que previamente haya establecido el Comité.

(1) Letra sustituida por la que aparece en el texto, por el artículo 2º, N° 1 del DL. N° 2.759, de 6-7-79.

Artículo 14.— Las remuneraciones, asignaciones, gastos de representación y cualquier otro estipendio o beneficio de los integrantes del Consejo, del Comité y del Fiscal del Banco, serán fijados por el Consejo Monetario.

Artículo 15.— Los cargos de miembros del Comité y sus subrogantes estarán afectos a las incompatibilidades que rijan para los Directores de bancos comerciales, pero serán compatibles con la calidad de empleado de la exclusiva confianza del Presidente de la República.

En todo caso, el Presidente de la República podrá disponer que no rijan todas o algunas de ellas en relación con un nombramiento determinado, expresándolo fundadamente en el decreto respectivo.

Artículo 16.— El Comité funcionará con la mayoría de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría de los que asistan. El que presida tendrá voto decisorio en caso de empate.

El Comité dictará su propio Reglamento de Sala y a él deberá ajustar su funcionamiento interno.

Artículo 17.— Ningún miembro del Comité podrá intervenir o votar en operaciones de crédito, inversiones u otros negocios que interesen a él o a empresas o particulares con quienes mantenga vínculos de participación, dependencia o injerencias en su administración; igual prohibición regirá respecto de los negocios u operaciones que interesen a sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive.

No se entenderán comprendidos en estas prohibiciones los acuerdos destinados a producir efectos de carácter general.

Cualquier miembro del Comité que contraviniera las disposiciones de este artículo deberá pagar, a beneficio fiscal, una multa igual al valor del préstamo, inversión o negocio de que se trate. Los restantes miembros que, a sabiendas, concurren con su voto a la infracción, serán solidariamente responsables por el monto de la referida multa.

Artículo 18.— El Comité ejercerá la administración del Banco bajo su directa responsabilidad, debiendo, en todo caso, ajustar su acción a las disposiciones legales y reglamentarias, a las políticas y normas que impartan las autoridades monetarias, el Consejo y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en uso de sus atribuciones.

Sus miembros, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren afectarles, responderán personal y solidariamente con sus bienes de las pérdidas que irroguen al Banco por aquellas operaciones autorizadas, actos efectuados o resoluciones tomadas por el Comité en contravención de las disposiciones legales y demás normas a que se refiere el inciso anterior, quedando exentos de esa responsabilidad únicamente los que hubieren hecho constar su voto disidente en el acta de la sesión correspondiente.

Artículo 19.— Las funciones del Comité se extenderán a todo cuanto concierne a la administración y operación de la empresa. En su desempeño podrá acordar, ejecutar y celebrar cualquier acto, contrato, pacto o convención que conduzca al cumplimiento de los objetivos del Banco y especialmente le estará encargado:

a) Fijar con sujeción a las disposiciones legales que rijan esta materia, las condiciones y modalidades, tales como garantías, montos máximos y tasas de interés para las diversas operaciones del Banco;

- b) Fiscalizar el cumplimiento de sus acuerdos, normas e instrucciones;
- c) Aprobar el presupuesto anual de inversiones y gastos, sus modificaciones, las provisiones y castigos que corresponda hacer por cualquier causa, y el Balance y Memoria de cada ejercicio;
- d) Informar anualmente al Consejo sobre el funcionamiento y desarrollo de la empresa;
- e) Acordar las inversiones, adquisiciones y enajenaciones de bienes raíces, valores mobiliarios u otros bienes muebles;
- f) Resolver las solicitudes de crédito y demás operaciones autorizadas al Banco, cualesquiera sean su naturaleza y monto; acordar la contratación de créditos internos o externos mediante líneas de crédito, préstamos o en cualquier otra forma, ajustándose a las normas reglamentarias que rijan estas operaciones, y resolver sobre el otorgamiento de fianzas, avales u otras garantías;
- g) Nombrar, remover, trasladar, aceptar renunciaciones, enviar en comisión de servicio, sancionar disciplinariamente y poner término a los servicios del personal que el Reglamento califique de rango superior;
- h) Conocer los informes que el Gerente General someta a su consideración o resolución, de acuerdo con las normas que el propio Comité establezca, e
- i) En general, ejercer las demás funciones que el presente decreto ley u otras disposiciones legales o reglamentarias le encomienden.

Artículo 20.— El Comité podrá conferir mandatos especiales y delegar en cualquiera de sus integrantes, en uno o varios Comités o cargos de rango superior o en uno o varios funcionarios especialmente determinados, la atención o resolución de los asuntos que estimare conveniente, sin que en modo alguno puedan interferirse las funciones y facultades propias de las demás autoridades contempladas en el presente decreto ley.

Las delegaciones que faculden al delegatario para resolver operaciones de crédito u otras, podrán contener autorización para subdelegar el mandato.

Artículo 21.— El Comité designará a los funcionarios que tendrán la calidad de ministros de fe para atestiguar la veracidad y autenticidad de las actuaciones y documentos de la institución, como asimismo, respecto de sus propias deliberaciones y acuerdos.

PARRAFO TERCERO

Presidente, Vicepresidente, Gerente General, Fiscal y Contralor

Artículo 22.— El Presidente y el Gerente General tendrán, separada e indistintamente, la representación extrajudicial del Banco, y podrán delegar parcialmente las atribuciones que se les confieren.

La representación judicial corresponderá al Gerente General, con las facultades señaladas en el inciso primero del artículo 7º del Código de Procedimiento Civil, y a él deberán notificarse las demandas que se entablen contra el Banco, para emplazarlo válidamente.

Para desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, renunciar los recursos o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir, el Gerente General necesitará el acuerdo del Comité. No obstante, el Comité podrá conferirle todas o algunas de estas facultades para ser ejercidas en aquellos juicios cuyos montos no excedan los márgenes que expresamente señale el poder.

El Presidente y el Gerente General no estarán obligados a absolver posiciones en los juicios en que el Banco intervenga, debiendo sólo informar por escrito a pedido del tribunal competente.

Artículo 23.— El Presidente tendrá especialmente a su cargo la conducción de las relaciones del Banco con los poderes públicos y con las entidades bancarias y financieras, nacionales e internacionales. Le corresponderá además:

- a) Presidir las sesiones del Consejo, del Comité y convocar a sesión extraordinaria fijando la tabla respectiva;
- b) Ejercer la vigilancia superior de la empresa, y
- c) Cumplir con toda otra función que le encomiende este decreto ley, los reglamentos, el Consejo y el Comité.

Artículo 24.— Sin perjuicio de las funciones que se le confieren en el presente decreto ley, al Vicepresidente corresponderá en especial:

- a) Subrogar al Presidente en caso de ausencia, vacancia o cualquiera otra causa que impida a éste desempeñar el cargo, sin que sea necesario acreditarlo ante terceros. La subrogación comprenderá todas las funciones y facultades del Presidente, inclusive las que le pertenezcan por delegación, y
- b) Ejercer las funciones y atribuciones que el Consejo y el Comité le encomienden o deleguen.

Artículo 25.— El Gerente General será funcionario de la confianza exclusiva del Presidente de la República, quien lo nombrará mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda.

Ejercerá la administración inmediata del Banco de acuerdo a las facultades conferidas e instrucciones impartidas por el Comité. Le corresponderá en especial:

- a) Presentar al Comité personalmente o por intermedio de los funcionarios que indique, estados de situación o informaciones detalladas sobre la marcha de la empresa;
- b) Asistir a las sesiones del Consejo con derecho a voz;
- c) Impartir a las dependencias y su personal las instrucciones, observaciones y recomendaciones necesarias para la eficiente administración y buena marcha de las operaciones;
- d) Resolver las solicitudes de crédito y demás operaciones que se propongan al Banco, dentro de los límites fijados por el Comité;
- e) Efectuar las inversiones, adquisiciones y enajenaciones de bienes raíces, valores y otros bienes muebles que no excedan de los márgenes que le fije el Comité;
- f) Nombrar, remover, trasladar, enviar en comisión de servicio, sancionar con las medidas disciplinarias que autorice la reglamentación interna, aceptar renuncias y poner término a los servicios de los funcionarios del Banco, con excepción de los calificados como de rango superior;
- g) Proponer al Comité el nombramiento, remoción, traslado, comisión de servicio, sanciones disciplinarias, aceptación de renuncias y término de los servicios de los funcionarios calificados de rango superior;
- h) Someter la Memoria y Balance Anual de la empresa a la aprobación del Comité;
- i) Delegar parcialmente el ejercicio de sus atribuciones en otros funcionarios del Banco, excepto aquellas que por naturaleza tuviera que desempeñar personalmente, y

j) Ejercer todas las funciones que le encomiende el presente decreto ley, el Consejo, el Comité y, en general, cualquiera disposición legal o reglamentaria.

Artículo 26.— El Fiscal será el jefe superior del Departamento Jurídico y de su personal. Le corresponderá especialmente:

a) Ejercer la representación judicial del Banco ante los Tribunales de Justicia, administrativos u otros especiales, personalmente o por intermedio de abogados de su departamento;

b) Asistir a las sesiones del Consejo y del Comité con derecho a voz;

c) Velar porque los acuerdos, actos y contratos del Banco se ajusten a las normas legales vigentes, para cuyo efecto tomará conocimiento de todos ellos.

Las ilegalidades de los acuerdos que el Consejo o el Comité adopten o las inhabilidades que afecten a cualquiera de sus integrantes, serán representadas directamente a éstos; aquellas ilegalidades en que incurrieren otros funcionarios serán representadas al Gerente General del Banco. Sin perjuicio de lo anterior, el Fiscal dispondrá se practiquen de inmediato las primeras diligencias necesarias para restablecer la legalidad y/o precaver eventuales daños mayores a la empresa.

Si la representación no fuera aceptada, deberá poner de inmediato los antecedentes en conocimiento de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras;

d) Informar sobre los asuntos de orden legal que se sometan a su consideración, y en general, asesorar a las autoridades superiores del Banco y demás funcionarios de la empresa en las materias que requieran una apreciación de carácter jurídico;

e) Proponer al Gerente General o a la autoridad que corresponda el nombramiento, ascenso, traslado, aceptación de renuncia, sanciones disciplinarias o terminación de los servicios del personal de su Departamento, y

f) Ejercer las demás atribuciones y facultades que el presente decreto ley, el Consejo o el Comité le encomienden.

Artículo 27.— El Fiscal será funcionario de la confianza exclusiva del Presidente de la República, quien lo nombrará mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. En caso de vacancia, ausencia u otra imposibilidad para ejercer sus funciones, lo subrogará el abogado del Departamento Jurídico que corresponda según el orden de precedencia que fijará el Comité a proposición de aquél.

Artículo 28.— La inspección y fiscalización interna de las cuentas, servicios y dependencias del Banco corresponderá al Contralor.

Este funcionario será designado por el Comité y sólo podrá ser removido por éste con el voto favorable de la unanimidad de sus miembros en ejercicio. El mismo Comité señalará quién debe subrogarlo.

En el cumplimiento de sus funciones, el Contralor comunicará por escrito al Gerente General las observaciones que estime convenientes sobre las operaciones del Banco. Si ellas no fueran atendidas, dará cuenta al Comité. En todo caso, el Contralor deberá enviar directamente copia de todas sus observaciones al Consejo y al Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras.

TITULO III

OPERACIONES DEL BANCO

PARRAFO PRIMERO

Operaciones Bancarias

Artículo 29.— El Banco podrá efectuar las funciones, actividades, operaciones e inversiones propias de los bancos comerciales y de fomento, con sujeción a los fines y plazos que las respectivas leyes contemplen.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior serán aplicables a ellas, cualquiera que sea su naturaleza, las mismas obligaciones, limitaciones y prohibiciones que rigen para los bancos comerciales.

Artículo 30.— El Banco no podrá adquirir acciones, salvo que se las adjudique o reciba en pago de deudas contraídas a su favor; si así ocurriere, deberá enajenarlas dentro del término de un año, contado desde su adquisición. En casos justificados, el Superintendente podrá prorrogar este plazo hasta por otro año.

No obstante, estará facultado para realizar inversiones en bancos extranjeros o entidades internacionales, previa autorización del Banco Central.

Artículo 31.— El Banco destinará de preferencia a sus operaciones de fomento:

- a) Los recursos provenientes de sus operaciones de ahorro;
- b) Los recursos que le proporcionen instituciones de crédito con el objeto de financiar proyectos específicos, y
- c) Los demás recursos que obtenga en las actividades que, como institución de fomento y agente financiero, le estuvieren autorizadas.

Artículo 32.— El Banco no podrá rebajar ni condonar intereses penales, salvo que, excepcionalmente y por circunstancias especiales, así lo acuerde el Comité por la unanimidad de sus miembros en ejercicio.

PARRAFO SEGUNDO

Operaciones de Ahorro

Artículo 33.— El Banco podrá captar dinero del público en forma de depósitos o mediante otros sistemas o instrumentos que determinen y regulen las autoridades monetarias en uso de sus atribuciones.

Los reajustes, intereses, plazos y demás características de los sistemas e instrumentos de ahorro del Banco, se regirán por las normas que al efecto establezca el Banco Central de Chile.

Artículo 34.— El Banco podrá conceder a sus clientes de ahorro, créditos controlados en cuanto a su inversión, cuyos fines, plazos y demás condiciones serán fijados por el Comité ajustándose a las normas generales que señalen las autoridades monetarias.

Artículo 35.— Podrá por sí abrir cuenta, depositar y retirar sus depósitos de ahorro en el Banco toda persona que no sea absolutamente incapaz, mientras no se notifique a la empresa una resolución judicial en contrario.

Los representantes legales no podrán retirar los depósitos de sus representados relativamente incapaces, sin el consentimiento de éstos.

La cuenta abierta a nombre del impúber que tenga la calidad de hijo natural o simplemente ilegítimo, será administrada a título de tutor legal por la persona que abrió la cuenta a nombre del incapaz, mientras subsista su incapacidad.

También podrá abrir y administrar cuenta de ahorro a nombre del impúber, la persona a quien se haya otorgado la tuición del menor por sentencia judicial y la madre que, por encontrarse separada de hecho del padre del menor o por simple ausencia de éste, tuviere el cuidado del hijo y lo alimentare, circunstancias que deberán acreditarse a satisfacción del Banco.

Artículo 36.— Podrán también abrir y administrar cuentas de ahorro de simple giro y depósito las entidades sin personalidad jurídica, en conformidad con las normas que al efecto apruebe el Comité del Banco.

Artículo 37.— En caso de fallecimiento del titular de una cuenta, sus herederos podrán retirar estos depósitos hasta concurrencia de cinco sueldos vitales anuales de la Región Metropolitana: Santiago o su equivalente en moneda extranjera, sin necesidad de posesión efectiva de la herencia ni de justificar el pago o exención del impuesto que pudiera afectarle. Bastará en este caso la presentación de los respectivos comprobantes de estado civil.

A falta de herederos testamentarios, cónyuge sobreviviente o legitimarios, gozarán de dichas prerrogativas los hijos ilegítimos con exclusión de otros herederos abintestato, bastando para comprobar la calidad de hijo ilegítimo la notoria posesión de este estado civil, acreditada extrajudicialmente por el testimonio de personas que merezcan fe al Banco, el que, en caso de duda, podrá exigir la constitución de una fianza que asegure el reembolso de lo pagado.

Fallecido uno de los titulares de una cuenta bipersonal, los fondos se considerarán del patrimonio exclusivo del sobreviviente hasta concurrencia de la cantidad señalada en el inciso primero. El saldo sobre ese monto, si lo hubiere, pertenecerá por iguales partes al otro depositante y a los herederos del fallecido, con las mismas prerrogativas que este artículo establece.

Artículo 38.— Hasta concurrencia de la cantidad señalada en el artículo anterior los depósitos de ahorro serán inembargables, a menos que se trate de deudas provenientes de pensiones alimenticias declaradas judicialmente o que la ejecución tenga por objeto el pago de remuneraciones u otras prestaciones adeudadas a trabajadores del titular de los depósitos.

Artículo 39.— Los depósitos de ahorro y sus incrementos de cualquiera clase, hasta la cantidad de cinco sueldos vitales anuales de la Región Metropolitana: Santiago, quedarán exentos de la contribución de herencia, aunque el depositante fuere dueño de otros bienes. Se considerarán para estos efectos las distintas cuentas que pueda tener la misma persona.

TITULO IV

DEL PERSONAL

Artículo 40.— Las relaciones de los trabajadores del Banco con la empresa se regirán preferentemente por las disposiciones del presente decreto ley y,

en subsidio, por las del Código del Trabajo y demás normas legales comunes al sector privado.

Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de 6 meses, mediante decreto conjunto de los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social establezca, de acuerdo a las normas señaladas, el Estatuto del Personal del Banco. Dicho Estatuto cumplirá también la función de Reglamento Interno de la empresa (2).

Artículo 41.— La relación laboral entre el Banco y su personal tendrá su origen en el nombramiento decretado por autoridad competente de la empresa. Incorporado al Banco, el personal tendrá obligación de prestar servicios en cualquiera de sus oficinas o agencias, salvo estipulación expresa en contrario.

Artículo 42.— Facúltase al Presidente de la República para que, por decreto expedido a través del Ministerio de Hacienda y a proposición del Comité Ejecutivo, por conducto del Consejo Directivo, fije la Planta del Personal del Banco.

El sistema de remuneraciones del personal, sus beneficios, gratificaciones, incentivos o estipendios de cualquier naturaleza y las modificaciones que correspondan, serán aprobados por el Consejo Directivo (3).

Artículo 43.— Las personas designadas por el Presidente de la República para desempeñar cargos de su confianza exclusiva en el Banco del Estado, podrán optar, dentro del término de 60 días, contado desde la fecha en que asuman sus funciones, por el régimen previsional a que se hallaren acogidos al momento de su designación o afiliarse a la Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco del Estado de Chile. Las imposiciones correspondientes al empleador serán integradas por el Banco del Estado en el instituto previsional que corresponda, de acuerdo con la opción a que se hubieren acogido dichos funcionarios.

Artículo 44.— Los miembros del Consejo y el personal del Banco sólo podrán tener créditos en la empresa en los términos que reglamente el Consejo Monetario y dentro de las limitaciones de la Ley General de Bancos.

Artículo 45.— La organización sindical de los trabajadores del Banco estará sujeta a las mismas normas aplicables a las empresas del Estado.

A estos trabajadores les serán igualmente aplicables las normas que rijan para las referidas empresas en materia de negociación colectiva (4).

Artículo 46.— Derógase el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1960, y toda otra disposición contraria al presente decreto ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2° y 3° transitorios.

(2) El Estatuto del Personal del Banco del Estado de Chile fue aprobado por decreto N° 432, de 13-6-78, conjunto de los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial de 16-2-79.

(3) Inciso reemplazado por el que aparece en el texto, por el artículo 2°, N° 2 del DL. N° 2.759, de 6-7-79.

(4) Artículo reemplazado por el que aparece en el texto, por el artículo 2°, N° 3 del DL. N° 2.759, de 6-7-79. Véase además el artículo 6° de dicho decreto ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1º— El Banco podrá mantener durante 3 años la actividad destinada a la comercialización de productos, insumos u otros bienes, que actualmente desarrolla en las condiciones y con las modalidades que señale el Ministerio de Hacienda, previo informe del Ministerio de Agricultura.

Artículo 2º— El Banco deberá enajenar las acciones que actualmente posea, dentro de los 3 años siguientes a la fecha de publicación del presente decreto ley. El Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras podrá ampliar este plazo en casos justificados, hasta por dos años y por una sola vez.

Artículo 3º— Los créditos concedidos por el Banco con fines de fomento agrícola, industrial u otros de los que señala el Título V del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1960, y los créditos concedidos por la Corporación de Fomento de la Producción con arreglo al artículo 2º del decreto con fuerza de ley N° 378, de 1953, seguirán rigiéndose por las normas que le fueron aplicables a la fecha de su otorgamiento hasta la total extinción de los mismos.

Artículo 4º— La incompatibilidad a que se refiere el artículo 15 de este decreto ley, no afectará a los actuales Presidente, Vicepresidente y Gerente General del Banco.

Artículo 5º— El Comité someterá al Presidente de la República el proyecto del Estatuto del Personal a que se refiere el artículo 40, dentro del plazo de 90 días, contados desde la fecha de publicación del presente decreto ley.

Artículo 6º— Las personas que a la fecha de vigencia del presente decreto ley se encontraren desempeñando cargos cuya designación corresponda al Presidente de la República, tendrán el plazo de sesenta días para ejercer la opción a que se refiere el artículo 43.

Artículo 7º— Mientras no se dicte el decreto a que se refiere el artículo 40 de este decreto ley, el personal del Banco seguirá rigiéndose por las normas que le eran aplicables hasta la fecha de entrada en vigencia de este cuerpo legal.

Artículo 8º— Hasta que entre en vigencia el Estatuto Social de la Empresa, el representante de los trabajadores a que se refiere el artículo 9º de este decreto ley, será designado por el Ministro del Trabajo y Previsión Social con audiencia de los dirigentes laborales de la empresa.

Artículo 9º— Los actuales trabajadores del Banco mantendrán su régimen previsional y los cambios que puedan producirse en su régimen jurídico y laboral no menoscabarán ninguno de los derechos reconocidos a su favor.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.— AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.— JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.— GUSTAVO LEIGH GUZMAN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.— CESAR MENDOZA DURAN, General Director de Carabineros.— Sergio de Castro Spikula, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.— Saluda Atte. a Ud.— Pedro Larrondo Jara, Capitán de Navío (AB), Subsecretario de Hacienda.

VI. LEY GENERAL DE BANCOS

DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 252 (*)

(*) Publicado en el Diario Oficial del 4 de abril de 1960.

TEXTO REFUNDIDO Y SISTEMATIZADO DE LA
LEY GENERAL DE BANCOS

FIJA EL TEXTO DE LA LEY GENERAL DE BANCOS

Núm. 252.— Santiago, 30 de marzo de 1960.— Vistas las facultades que me confieren los artículos 202 y 207, N° 6, de la ley N° 13.305, de 6 de abril de 1959, vengo en dictar el siguiente

DECRETO CON FUERZA DE LEY:

El texto de la Ley General de Bancos con las modificaciones que ha tenido hasta la fecha y las que se le introducen por el presente decreto con fuerza de ley, será el siguiente:

TITULO I

DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (1)

TITULO II

DE LA FISCALIZACION (2)

Artículo 19.— Las instituciones sometidas a la fiscalización de la Superintendencia estarán obligadas a conservar durante diez años sus libros, formularios, correspondencia, documentos y papeletas. El Superintendente podrá autorizar la eliminación de parte de este archivo antes de ese plazo y exigir que determinados documentos o libros se guarden por plazos mayores. Podrá, asimismo, facultarlas para conservar reproducciones mecánicas o fotográficas de esta documentación en reemplazo de los originales.

El plazo se contará desde la fecha del último asiento operado en ellos o desde la fecha en que se hayan extendido, según corresponda.

En ningún caso podrán destruirse los libros o instrumentos que digan relación directa o indirecta con algún asunto o litigio pendiente.

El Superintendente podrá autorizar a las empresas bancarias para devolver al librador los cheques cancelados.

- (1) Este Título fue derogado por el Art. 27 del DL. N° 1.097, de 25-7-75, que crea la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y señala sus funciones.
(2) Este Título, con excepción del Art. 19, fue derogado por el Art. 27 del DL. 1.097, ya citado.

TITULO III

DE LAS SANCIONES (3)

Artículo 26.— Los directores y gerentes de una institución financiera que, a sabiendas, hubieren hecho una declaración falsa sobre la propiedad y conformación del capital de la institución financiera, o aprobado o presentado un balance adulterado o falso, o disimulado su situación, especialmente las sumas anticipadas a directores o empleados, serán castigados con reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de mil a diez mil unidades tributarias (4).

En caso de quiebra de la institución financiera, las personas que hubieren ejecutado tales actos serán consideradas como responsables de quiebra fraudulenta (5).

Artículo 26 bis.— Los directores, gerentes, funcionarios, empleados o auditores externos de instituciones financieras que alteren o desfiguren datos o antecedentes en los balances, libros, estados, cuentas, correspondencia u otro documento cualquiera o que oculten o destruyan estos elementos, con el fin de dificultar, desviar o eludir la fiscalización que corresponde ejercitar a la Superintendencia de acuerdo con la ley, incurrirán en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.

La misma pena se les aplicará si, con el mismo fin, proporcionan, suscriben o presentan esos elementos de juicio alterados o desfigurados. Esta disposición no excluye la aplicación de las reglas previstas en los artículos 14 a 17 del Código Penal (6).

TITULO IV

DE LA CONSTITUCION DE LAS EMPRESAS BANCARIAS

Artículo 27.— Las empresas bancarias deberán constituirse como sociedades anónimas, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias que rijan a tales sociedades y a las normas especiales establecidas en esta ley.

El prospecto que debe preceder a la formación de la sociedad será calificado previamente por el Superintendente y podrá ser rechazado sin expresión de causa. Lo mismo se aplicará para transformar una sociedad financiera en empresa bancaria (6 bis).

No podrá solicitarse la autorización de existencia de la sociedad, transcurridos diez meses desde la fecha del certificado de recepción del prospecto.

(3) Este Título, con excepción del Art. 26, fue derogado por el Art. 27 del DL. 1.097, de 25-7-75, que crea la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y señala sus funciones.

(4) Este inciso ha sido modificado en la forma que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra a), del DL. 1.638, de 30-12-76, y por el Art. 1º, letra a), del DL. 2.099, de 13-1-78.

(5) Inciso modificado por el Art. 1º, letra a), del DL. 2.099, de 13-1-78.

(6) Artículo agregado por el Art. 1º, letra b), del DL. 2.099, de 13-1-78.

En relación con la responsabilidad de los directores, consejeros, apoderados, administradores y gerentes de las instituciones financieras, véase el Art. 6º del DL. 1.683, de 7-1-77.

(6 bis) Este inciso fue modificado en la forma que aparece en el texto por el D.L. 3.460.

Cada organizador de una empresa bancaria deberá constituir una garantía igual al uno por ciento del capital de la sociedad proyectada, mediante un depósito, a la orden del Superintendente, que podrá ser a plazo indefinido, en el Banco Central de Chile, Banco del Estado de Chile, bancos comerciales o asociaciones de ahorro y préstamo. En ningún caso la garantía total podrá ser inferior al cinco por ciento de dicho capital (7).

Los organizadores de una empresa bancaria serán personal y solidariamente responsables de la devolución de los fondos recibidos en pago de la suscripción de acciones, responsabilidad que podrá hacerse efectiva sobre la garantía a que se refiere el inciso anterior.

Los organizadores no podrán recibir, directa ni indirectamente, remuneración alguna por el trabajo que ejecuten en tal carácter.

Artículo 28.— La solicitud en que se pida autorización para establecer una empresa bancaria nacional deberá presentarse al Ministerio de Hacienda, con tres copias autorizadas de la escritura pública que contenga los estatutos, y no podrá ser concedida sin informe favorable del Superintendente, quien, a este efecto, investigará, por todos los medios que estime convenientes, la calidad de sus administradores, comprobará la efectividad del capital de la empresa y calificará la conveniencia que exista en establecerla.

Dictado el decreto que autorice la existencia legal y apruebe los estatutos de la empresa bancaria, el Superintendente comprobará si se encuentra preparada para iniciar sus actividades. Cumplido dicho requisito, le concederá la autorización para funcionar, que tendrá el valor del decreto que declara legalmente instalada la sociedad anónima, y le fijará un plazo para iniciar sus actividades.

Esta autorización habilitará a la empresa para dar comienzo a sus operaciones, le conferirá las facultades y le impondrá las obligaciones establecidas en esta ley (8) (9).

Artículo 29.— Los bancos constituidos en el extranjero, para establecer sucursal en el país, se presentarán al Ministerio de Hacienda, con todos los antecedentes requeridos por las leyes y reglamentos sobre sociedades anónimas extranjeras y con los siguientes agregados:

- 1) Cuantía del capital y fondos de reserva que la empresa solicitante propone destinar a sus negocios en Chile.
- 2) Nombre de la ciudad chilena donde se propone establecer su oficina principal.
- 3) Las demás informaciones y documentos que sean necesarios para comprobar las condiciones financieras de la empresa.

El Superintendente hará las investigaciones del caso y examinará los estatutos y reglamentos de la empresa, para cerciorarse de que en ellos no hay nada contrario a la legislación chilena. Investigará, además, por todos los medios que

(7) Este inciso fue sustituido por el que aparece en el texto, por el Art. 2º del DL. 748, de 12-11-74.

(8) Artículo modificado en la forma que aparece en el texto, por el Art. 27 del DL. 1.097, de 25-7-75.

(9) Estos artículos se encuentran tácitamente modificados, ya que a contar desde la vigencia de la ley N° 17.308, de 1º de julio de 1970, tanto las empresas bancarias nacionales como las sucursales de bancos extranjeros, se autorizan por resolución de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, visada por el Ministro de Hacienda, y no por decreto de este Ministerio.

estime convenientes, si la empresa solicitante es entidad que ofrezca suficiente garantía para que se le pueda otorgar sin riesgo la autorización respectiva y si hay conveniencia general en que se establezca la sucursal en Chile. La solicitud no podrá ser aprobada sin informe favorable del Superintendente.

Dictado el decreto que habilite a la empresa para establecer la sucursal, el Superintendente verificará la radicación de su capital en el país, comprobará si se encuentra preparada para iniciar sus actividades, y cumplidos estos requisitos, le concederá la autorización para funcionar (10).

Artículo 30.— Los bancos extranjeros que operen en Chile gozarán de los mismos derechos que los bancos nacionales de igual categoría y estarán sujetos en general a las mismas leyes y reglamentos, salvo disposición legal en contrario.

El capital y reservas que asignen a su sucursal en el país deberá ser efectivamente internado y convertido a moneda nacional en conformidad a las normas del decreto ley N° 600, de 1974, Estatuto del Inversionista. Los aumentos de capital o reservas que no provengan de capitalización de otras reservas, tendrán el mismo tratamiento del capital y reservas iniciales.

Ningún banco extranjero podrá invocar derechos derivados de su nacionalidad respecto a las operaciones que efectúe en Chile.

Toda contención que se suscitare, cualquiera que fuere su naturaleza, será resuelta por los tribunales chilenos, en conformidad a las leyes de la República.

Los acreedores chilenos y los extranjeros domiciliados en Chile tendrán derecho preferente sobre el activo que el banco tuviere en el país (11).

Artículo 31.— Las empresas bancarias son instituciones de funcionamiento obligatorio con sujeción al horario vigente. Ninguna empresa bancaria podrá iniciar, suspender o poner término a sus operaciones sin previa autorización del Superintendente.

Ningún banco nacional podrá abrir o clausurar dentro o fuera del país, ni ningún banco extranjero establecido en Chile podrá abrir o clausurar dentro del país, oficina alguna sin haber obtenido previamente para ello autorización del Superintendente.

La disposición del inciso precedente no será aplicable al Banco Central de Chile.

Artículo 32.— Corresponderá al Superintendente fijar, por resolución que publicará en el "Diario Oficial", el horario para la atención del público en el Banco Central de Chile, Banco del Estado de Chile y bancos comerciales e hipotecarios, debiendo ser uniforme para todas las oficinas de una misma localidad.

Las instituciones bancarias a que se refiere el inciso anterior, trabajarán de lunes a viernes de cada semana, ambos días inclusive, en jornada única bancaria en todas las provincias del país, sin perjuicio de las facultades conferidas al Superintendente para determinar el horario de dichas instituciones (12).

Podrá, además, sin las limitaciones y formalidades indicadas, pero en las condiciones que señale, autorizar a las empresas bancarias para que presten

[10] Ver nota (9).

[11] Artículo modificado en la forma que aparece en el texto, por el Art. 6°, letra b), del DL. 818, de 27-12-74.

[12] Este inciso 2° fue intercalado por el Art. 1°, letra b), de la ley N° 16.324, de 28-9-65.

determinados servicios fuera de los días y horas de atención obligatoria al público.

Artículo 33.— El Banco Central de Chile, el Banco del Estado de Chile y los bancos comerciales e hipotecarios no atenderán al público los días sábado de cada semana, y 31 de diciembre, sin que por esta circunstancia deban considerarse esos días como festivos o feriados para los efectos legales, excepto en lo que se refiere al pago y protesto de letras de cambio (13).

Artículo 34.— Ninguna persona natural o jurídica que no hubiere sido autorizada para ello por otra ley, podrá dedicarse a giro que, en conformidad a la presente, corresponda a las empresas bancarias y, en especial, a captar o recibir en forma habitual dinero del público, ya sea en depósito, mutuo o en cualquiera otra forma.

Ninguna persona natural o jurídica que no hubiere sido autorizada por ley, podrá dedicarse por cuenta propia o ajena a la correduría de dinero o de créditos representados por valores mobiliarios o efectos de comercio, o cualquier otro título de crédito.

Tampoco podrá poner en su local u oficina plancha o aviso que contenga, en cualquier idioma, expresiones que indiquen que se trata de un banco, de una empresa bancaria o de una sociedad financiera; ni podrá hacer uso de membretes, cartas, títulos, formularios, recibos, circulares o cualquier otro papel que contenga nombres u otras palabras que indiquen que los negocios a que se dedica dicha persona son de giro bancario o de intermediación financiera. Le estará, asimismo, prohibido efectuar propaganda por la prensa u otro medio de publicidad en que se haga uso de tales expresiones.

Se presume que una persona natural o jurídica ha infringido lo dispuesto en este artículo cuando tenga un local u oficina en el que, de cualquier manera, se invite al público a llevar dinero a cualquier título o al cual se haga publicidad por cualquier medio con el mismo objeto.

Las infracciones a este artículo constituirán delito económico y se sancionarán con las penas que contempla el artículo 8º del decreto ley N° 280, de 1974. La Superintendencia, en este caso, pondrá los antecedentes a disposición del Consejo de Defensa del Estado para que inicie las acciones pertinentes, sin perjuicio de que exista acción pública para denunciar estos delitos.

En todo caso, si a consecuencia de estas actividades ilegales, el público recibiere pérdida de cualquiera naturaleza, los responsables serán castigados como autores del delito de estafa.

En caso de que, a juicio del Superintendente, pueda presumirse que existe una infracción a lo dispuesto en este artículo, la Superintendencia tendrá respecto de los presuntos infractores, las mismas facultades de inspección que su ley orgánica le confiere para con las instituciones fiscalizadas, pudiendo aplicar al efecto el artículo 17 de dicha ley.

(13) Este artículo ha sido modificado en la forma que aparece en el texto, por los Arts. 1º, letra c), de la ley 16.324, de 28-9-65, y 9º, inc. 2º del DL. 1.171, de 5-9-75. El Art. 9º recién citado establece que a partir del año 1976, el Banco del Estado, los bancos comerciales, hipotecarios y de fomento y las sociedades financieras efectuarán un solo balance general al 31 de diciembre de cada año. Como consecuencia de ello, este precepto suprimió en el Art. 33 de la Ley General de Bancos la expresión "30 de junio", que figuraba a continuación de la palabra "semana".

Cualquier organismo público o privado, que tome conocimiento de alguna infracción a lo dispuesto en este artículo, podrá efectuar la denuncia correspondiente a la Superintendencia (14).

Artículo 35.— El Superintendente podrá, sin embargo, autorizar a los bancos extranjeros no establecidos en Chile para mantener representaciones que actúen como agentes de negocios de sus casas matrices y tendrá sobre ellas las mismas facultades de inspección que esta ley le confiere respecto de las empresas bancarias. En caso alguno estas representaciones podrán efectuar actos propios del giro bancario. La autorización podrá revocarse en cualquier momento si la representación no cumple con esta disposición o si su subsistencia fuere inconveniente.

Artículo 36.— Toda empresa bancaria deberá mantener en el Banco Central de Chile, a la orden del Superintendente, un depósito en moneda corriente igual al uno por mil del término medio de su activo, como garantía del cumplimiento de la presente ley. Dicha suma se ajustará dentro del mes de enero de cada año y se determinará en la forma que establece el artículo 7º, sobre el promedio del activo del año anterior (15).

Los bancos hipotecarios cumplirán con esta disposición efectuando el depósito en el Banco del Estado de Chile o en un banco comercial.

Este precepto no se aplicará al Banco Central de Chile.

Artículo 37.— Si una empresa no pagare en su oportunidad las cuotas que se le hubieren fijado en conformidad al artículo 7º, o cualquiera multa, el Superintendente las hará efectivas sobre el depósito a que se refiere el artículo anterior. La empresa afectada no podrá oponerse a esta medida con ningún recurso judicial (16).

Artículo 38.— Si la garantía a que se refiere el artículo 36 llegare a ser menor de la suma que en él se determina, el Superintendente requerirá a la empresa para que la complete dentro del plazo de diez días. Si no lo hiciere, podrá revocarle la autorización para funcionar.

Artículo 39.— El Superintendente cancelará la garantía una vez que la empresa bancaria, previa la autorización exigida en el artículo 31, haya puesto término a sus operaciones, comprobado el entero pago de las multas impuestas y de los aportes ordenados por el artículo 7º, establecido su propia solvencia y garantizado en su totalidad a los acreedores (17).

(14) Este artículo fue reemplazado por el que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra b), del DL. 1.638, de 30-12-76.

En relación con este artículo, cabe señalar que el Art. 8º del DL. 2.099, de 13-1-78, dispone que: "Se impondrá el máximo de las penas señaladas en el artículo 467 del Código Penal, a los que sabiendo o debiendo saber el estado de insolvencia en que se encuentran la o las empresas que administraren, solicitaren por sí o por interpósita persona, por medio de la prensa, radio, televisión o por cualquier otro medio de publicidad, dinero o valores en depósito o en préstamo. La pena se aumentará en un grado si el solicitante consumare su propósito y recibiere efectivamente el dinero o los valores solicitados en préstamo o depósito.

Por las personas jurídicas responderán penalmente sus gerentes o administradores que al momento de cometerse el delito se desempeñaren como tales, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal".

(15) (16) (17) Las referencias de estas disposiciones al Art. 7º deben entenderse hechas al Art. 8º del DL. 1.097, de 25-7-75, que crea la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y señala sus funciones.

TITULO V

DE LA ADMINISTRACION DE LAS EMPRESAS BANCARIAS

Artículo 40.— La dirección y la administración de las empresas bancarias se ejercitarán en conformidad a las disposiciones legales que rijan la materia, a los estatutos de cada banco y con sujeción a las normas impartidas por el Superintendente.

Artículo 41.— Toda elección de Directores será publicada en un periódico del domicilio de la empresa y deberá ser puesta en conocimiento de la Superintendencia, a quien se enviará copia autorizada de la escritura pública a que debe reducirse ante el Notario de Hacienda del departamento respectivo el acta de la junta de accionistas o sesión de directorio en que los nombramientos se hubieren hecho.

Deberán igualmente comunicarse y reducirse a escritura pública los nombramientos de gerente y subgerente.

Artículo 42.— Las vacantes de directores que se produzcan serán servidas por los suplentes, si los hubiere. En los demás casos, el directorio en la primera reunión que celebre, procederá a nombrar el o los reemplazantes, que durarán en sus funciones hasta la próxima junta ordinaria de accionistas, en la cual se hará el nombramiento definitivo. El director así nombrado por la junta, durará en el cargo sólo por el tiempo que falte para completar el periodo del director reemplazado.

El directorio, con aprobación del Superintendente, podrá mantener una o dos vacantes hasta la celebración de la próxima junta ordinaria, si no existieren directores suplentes.

Si por cualquiera causa no se celebrare en la época establecida la junta de accionistas llamada a hacer la elección periódica de los directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieren cumplido su periodo hasta que se les nombre reemplazantes, y el directorio estará obligado a citar, a la brevedad posible, a la junta para hacer el nombramiento.

Artículo 43.— El directorio celebrará sesión ordinaria por lo menos una vez al mes y todos los acuerdos que adopte se consignarán en el acta respectiva.

El gerente deberá dar cuenta al directorio, en cada sesión ordinaria, de toda adquisición o enajenación de bienes muebles o inmuebles, acciones y valores mobiliarios.

Artículo 44.— Se presentará al directorio, en cada sesión ordinaria, o a una comisión ejecutiva compuesta de no menos de cinco de sus miembros, una minuta de todas las nuevas operaciones de crédito y renovaciones que se hubieren efectuado en cada una de las oficinas de la institución (18).

En esta minuta se señalará la actividad del deudor, la clase de operación de que se trate, el destino del crédito y las garantías otorgadas a favor del banco. Se podrán omitir las operaciones inferiores a la cuantía que el Superintendente determine anualmente para cada empresa.

(18) Inciso modificado en la forma que se expresa en el texto por el Art. 1º, letra ñ), del DL. 3.345, de 29-4-80.

Además, cuando el monto total de los compromisos directos e indirectos de una misma persona para con el banco se eleven a una cantidad superior a una suma que determinará el Superintendente para la respectiva empresa, se acompañará un estado de todas sus obligaciones vigentes y de sus garantías, y se agregarán, además, informes sobre la situación financiera de las personas que respondan por esas obligaciones. Este estado se repetirá cada vez que las deudas del cliente experimenten un aumento superior a la cantidad referida.

La minuta se archivará juntamente con la lista de los directores asistentes a la reunión, certificada y numerada por la persona encargada de preparar el documento y a ella se agregarán los estados a que se refiere el inciso anterior.

Artículo 45.— Cada vez que un banco otorgue a una misma persona natural o jurídica, créditos que sobrepasen el 5% del capital pagado y reservas de aquél, deberá presentar a la Superintendencia, dentro del plazo de diez días, un estado detallado de los créditos vigentes con el respectivo deudor, con indicación de las garantías. Mientras subsista dicho exceso, el banco repetirá la presentación de los estados referidos al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año, dentro de los diez días siguientes a las respectivas fechas.

La falta de presentación o la presentación tardía de los estados de cada deudor, serán sancionadas con multa de dos sueldos vitales mensuales de la provincia de Santiago (19).

Artículo 46.— El Superintendente o el delegado que designe al efecto podrá resolver administrativamente cualquier cuestión que se suscite en una junta de accionistas, sea con relación a la calificación de poderes o a cualquier otra que pueda afectar a la legitimidad de la asamblea, de los acuerdos que se adopten o de los directores que en ella se elijan, sin perjuicio del derecho de los interesados para ejercer las acciones que les correspondan ante la justicia ordinaria.

Cualquiera que sea la resolución de la justicia, no podrá ella afectar la validez de los acuerdos adoptados con la concurrencia de los directores elegidos en esa junta, ni de los actos celebrados en virtud de tales acuerdos.

Artículo 47.— Las empresas bancarias extranjeras no estarán obligadas a tener directorio para la administración de sus negocios dentro del territorio de la República, pero deberán tener un agente ampliamente autorizado para que las represente con todas las facultades legales.

Las responsabilidades y sanciones que afecten al directorio o a los directores de las empresas bancarias corresponderán o podrán hacerse efectivas en el apoderado de las sucursales de los bancos extranjeros.

Las empresas bancarias extranjeras podrán efectuar sus operaciones en Chile, en conformidad con sus prácticas habituales, siempre que no sean contrarias a las disposiciones que rijan la materia y no afecten a la seguridad de los negocios.

Las remesas de las utilidades líquidas que obtengan las empresas bancarias extranjeras se harán previa autorización de la Superintendencia y con sujeción al decreto ley N° 600, de 1974, Estatuto del Inversionista, y a las demás disposiciones que rigen la materia (20).

(19) Este inciso fue modificado en la forma que aparece en el texto, por el Art. 6°, letra c), del DL. 818, de 27-12-74.

(20) Este inciso fue reemplazado por el que aparece en el texto, por el Art. 6°, letra d), del DL. 818, de 27-12-74.

TITULO VI

DE LAS COMISIONES DE CONFIANZA

Artículo 48.— Los bancos comerciales e hipotecarios podrán establecer un departamento especial para desempeñar las siguientes comisiones de confianza:

1) Aceptar mandatos generales o especiales para administrar bienes de terceros.

2) Ser depositarios, secuestres o interventores en cualquier clase de negocios o asuntos.

3) Ser liquidadores de sociedades civiles anónimas, de sociedades comerciales o de cualquier clase de negocios.

4) Ser guardadores testamentarios generales conjuntos, curadores adjuntos, curadores especiales y curadores de bienes. En su carácter de curadores adjuntos, podrá encomendárseles la administración de parte o del total de los bienes del pupilo.

El nombramiento de guardador podrá también recaer en un banco, en los casos de los artículos 351, 352, 360, 361, 464 y 470 del Código Civil.

Las tutelas y curadurías servidas por un banco se extenderán sólo a la administración de los bienes del pupilo, debiendo quedar encomendado el cuidado personal de éste a otro curador o representante legal.

Las divergencias que ocurrieren entre los guardadores serán resueltas por la justicia en forma breve y sumaria.

Lo dispuesto en el artículo 412 del Código Civil se aplicará a los directores y empleados del banco tutor o curador.

5) Ser albacea con o sin tenencia de bienes y administradores proindiviso.

6) Ser asignatarios modales cuando el modo ha sido establecido en beneficio de terceros. En tales casos se entenderá que la asignación modal envuelve siempre cláusula resolutoria.

No regirá para los bancos el mínimo de remuneración que señala el artículo 1.094 del Código Civil.

7) Ser administradores de los bienes que se hubieren donado o que se hubieren dejado a título de herencia o legado a capaces o incapaces, sujetos a la condición de que sean administrados por un banco.

Podrán sujetarse a esta misma forma de administración los bienes que constituyen la legítima rigurosa, durante la incapacidad del legitimario.

Las facultades del banco respecto a dichos bienes serán las de un curador adjunto cuando no se hubiere establecido otra cosa en la donación o en el testamento.

8) Ser administradores de bienes constituidos en fideicomiso, cuando así se haya dispuesto en el acto constitutivo. Ni el propietario fiduciario ni el fideicomisario, ni ambos de consuno, podrán privar al banco de la administración.

Si no se determinaren los derechos, obligaciones y responsabilidades del banco, tendrá éste las del curador de bienes.

9) Ser administradores de bienes gravados con usufructo, cuando así se haya establecido en el acto constitutivo. Los derechos y obligaciones del banco serán los que hubiere señalado el constituyente y, en su defecto, los que el artículo 777 del Código Civil confiere al nudo propietario cuando el usufructuario no rinde caución.

Ni el usufructuario ni el nudo propietario, ni ambos de consuno, podrán privar al banco de la administración.

10) Desempeñar el cargo de representante de los tenedores de bonos en las emisiones hechas en conformidad a la ley N° 4.657 (21).

Los bancos podrán excusarse de aceptar los encargos que se les confieran y renunciar a los mismos sin expresar causa aun respecto de los que trata el N° 4, pero deberán tomar las medidas conservativas urgentes.

Artículo 49.— Los bancos necesitarán de la autorización previa del Superintendente para la apertura del departamento de comisiones de confianza, la que podrá ser revocada por motivos fundados.

Artículo 50.— En el ejercicio de las facultades que se confieren a los bancos por el artículo 48, éstos quedarán sujetos a las disposiciones del derecho común, en cuanto no hubieren sido modificadas por esta ley, pero no necesitarán rendir caución ni prestar juramento en los casos en que las leyes lo exijan.

Artículo 51.— No constituyen comisiones de confianza los depósitos de custodia que reciban los bancos, ni los poderes especiales que tengan por objeto atender esos servicios, comprar o vender acciones, bonos y demás valores mobiliarios, percibir dividendos o intereses y representar a los dueños de las acciones, bonos y valores en lo que a éstos se refiera, como tampoco los que tengan por fin la cobranza de créditos o documentos.

Artículo 52.— Los dineros sobre que versen las comisiones de confianza o que provengan de ellas, como asimismo las cosas fungibles constituidas en fideicomiso, serán invertidos de acuerdo con las instrucciones recibidas o con el objeto de la comisión de confianza o en la forma que determinen los actos constitutivos.

A falta de instrucciones o determinaciones, sólo podrán invertirse en bienes raíces, en acciones de bancos comerciales e hipotecarios, y de sociedades anónimas calificadas de primera clase por la Superintendencia del ramo, o en primeras hipotecas sobre bienes raíces hasta un monto que no exceda del cincuenta por ciento del valor de la propiedad hipotecada y se tomará como máximo, para este efecto, el avalúo fiscal para la contribución de bienes raíces.

Podrán, asimismo, invertirse en depósitos de ahorro para la vivienda de acuerdo con lo dispuesto en el DFL. N° 2, de 1959 (22).

Los bancos sólo podrán mantener esos dineros a su disposición por el tiempo necesario para darles la debida inversión y abonarán intereses sobre ellos a la tasa más alta que corresponda.

Artículo 53.— En caso de quiebra o liquidación de un banco, el Superintendente o el liquidador, con autorización de aquél, podrá encomendar a otra institución bancaria la atención de las comisiones de confianza que estaban a cargo de la empresa declarada en quiebra o en liquidación.

(21) La referencia de este número a la ley 4.657, sobre Emisión de Bonos por Sociedades Anónimas, debe entenderse hecha al DL. 1.064, de 14-6-75, que sustituyó su texto.

(22) El inciso final del Art. 79 del DFL. N° 205, de 5-4-60, sobre Asociaciones de Ahorro y Préstamo, cuyo texto definitivo se fijó por ley 16.807, publicada en el D. Of. de 20-7-68, establece lo siguiente: "Los bancos comerciales e hipotecarios que desempeñen comisiones de confianza, de acuerdo con el Título VI del Decreto con Fuerza de Ley N° 252, de 1960, podrán invertir los dineros a que alude el inciso 1° del artículo 52 de ese texto legal, a falta de instrucciones o determinaciones de su propietario o titular, en hacer depósitos en las Asociaciones".

Lo mismo se aplicará si una empresa bancaria, por motivos calificados por el Superintendente, no debiere o no pudiere seguir atendiendo comisiones de confianza.

Igualmente, podrá el Superintendente encomendar a un banco determinadas comisiones de confianza no aceptadas o renunciadas por otro banco, si no se hubiere designado un reemplazante por el que hizo el encargo.

En tales eventos deberá designarse a un banco que reúna los requisitos legales y de preferencia de la misma localidad. La resolución que dicte el Superintendente constituirá título suficiente para que la empresa bancaria que se designe pueda desempeñarse con las mismas facultades que la anterior, desde que sea reducida a escritura pública.

TITULO VII (23)

DE LA LIQUIDACION FORZOSA Y DE LA QUIEBRA DE LAS EMPRESAS BANCARIAS

Artículo 54.— Si una empresa bancaria suspendiere el pago de sus obligaciones, el gerente dará aviso inmediato al Superintendente, quien investigará las causas que hayan motivado la suspensión, resolverá si la empresa puede continuar funcionando, y adoptará, en tal caso, las medidas para que se normalice la atención del público.

El Superintendente podrá, en este evento, tomar a su cargo la administración de la empresa.

Artículo 55.— Si el Superintendente estimare que una empresa bancaria no tiene la solvencia necesaria para continuar operando o que la seguridad de los depositantes exige la liquidación, procederá a efectuarla por sí o por la persona que designe, con las facultades, atribuciones y deberes de los liquidadores de sociedades anónimas.

El liquidador o el síndico, en su caso, deberán transferir los créditos hipotecarios sujetos al Título XII de esta ley, a otras instituciones financieras públicas o privadas que se harán cargo del pago de las letras de crédito. Los demás acreedores de la empresa liquidada o fallida no podrán oponerse a esta transferencia. Estos créditos se entenderán cedidos por el solo ministerio de la ley a la institución que los adquiera con el único requisito de figurar en el contrato de cesión. El adquirente gozará de todos los derechos, garantías y privilegios inherentes o accesorios a éstos (24).

Artículo 56.— Resuelto por el Superintendente que una empresa bancaria debe ser liquidada, no podrá ésta ser declarada en quiebra mientras dure la liquidación. Tampoco podrán entablarse contra ella, durante el mismo tiempo, acciones ejecutivas ni decretarse embargos o medidas precautorias, por obligaciones anteriores a la resolución del Superintendente.

A medida que existan fondos disponibles, podrá el Superintendente, después de reservar los recursos para atender los gastos de la liquidación, pagar

(23) En relación con este Título, cabe señalar que el artículo 7° del decreto ley N° 1.683, de 7 de enero de 1977, prescribe lo siguiente: "La liquidación de las instituciones financieras se efectuará por la persona que designe el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, y se sujetará a lo dispuesto en el Título VII de la Ley General de Bancos".

(24) Inciso agregado por el Art. 1°, letra o), del DL. 3.345, de 29-4-80.

a los acreedores que gocen de preferencia y distribuir el resto entre los acreedores comunes en proporción al monto de sus respectivos créditos. Cuando un acreedor sea, a la vez, deudor del banco, la compensación tendrá lugar sólo al tiempo de los repartos de fondos y hasta concurrencia de las sumas que vayan abonándose a su crédito, y siempre que también en ese momento se cumplan los demás requisitos legales.

Si por cualquier causa no alcanzaren a pagarse íntegramente las obligaciones del banco, serán ellas cubiertas a prorrata, sin perjuicio de las preferencias legales.

Artículo 57.— Cuando el Superintendente tome a su cargo la liquidación de una empresa bancaria, podrá designar los delegados que estime conveniente para que lo asistan en el desempeño de su cometido.

Podrá, con el mismo objeto, contratar los servicios del personal que sea necesario y ocupar empleados de la empresa en liquidación.

Artículo 58.— Si en la liquidación de una empresa bancaria, el activo no fuere suficiente para pagar a todos los acreedores, el Superintendente cobrará las cuotas de acciones que aún no hubieren sido pagadas, procediendo contra los accionistas o contra los anteriores dueños en conformidad a la ley sobre transferencia de acciones, de 6 de septiembre de 1878, según convenga a los intereses de la empresa en liquidación.

Artículo 59.— El Superintendente podrá entregar la liquidación a los dueños de la empresa desde el momento en que queden totalmente pagados los créditos de los depositantes y acreedores y cubiertos los gastos de la liquidación.

Artículo 60.— Si algún acreedor pidiere la declaración de quiebra de una empresa bancaria, el juzgado al cual se presentare la demanda dará aviso inmediato al Superintendente, quien procederá en la forma que indica el artículo 54.

Si comprueba que la solvencia subsiste, adoptará las medidas para que la empresa continúe funcionando, y las comunicará al tribunal, quien ordenará el archivo de los antecedentes; si estima que no es posible tal prosecución, dará aviso al mismo tribunal para que la gestión siga el curso señalado por la ley.

El Superintendente dará su resolución dentro del plazo de treinta días contados desde que reciba la notificación a que se refiere el inciso primero. Durante este plazo nadie podrá entablar contra la empresa bancaria acción ejecutiva y quedarán suspendidas todas las tramitaciones de la quiebra.

No procederá la declaración de quiebra ni se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 54 si una empresa hubiere suspendido transitoriamente sus operaciones o el pago de sus obligaciones, por huelga del personal o por otra causa de fuerza mayor que impida su funcionamiento, a menos que simultáneamente ocurra alguno de los casos contemplados en el artículo 25 (25).

(25) La referencia de este inciso al Art. 25 debe entenderse hecha al Art. 23 del DL. 1.097, de 25-7-75, que crea la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y señala sus funciones.

Declarada la quiebra de una empresa bancaria tendrán aplicación las demás normas de este Título y el Superintendente o la persona que él designe actuará como síndico con todas las facultades legales.

Artículo 61.— Mientras tenga a su cargo los negocios y bienes de una empresa bancaria, podrá el Superintendente iniciar y proseguir contra los accionistas, directores, gerentes, empleados o deudores las acciones judiciales que correspondan a aquélla.

TITULO VIII

REGLAS GENERALES APLICABLES A LOS BANCOS COMERCIALES (26)

Artículo 62.— Por banco comercial se entenderá toda institución que se dedique al negocio de recibir dinero en depósito y darlo a su vez en préstamo, sea en forma de mutuo, de descuento de documentos o en cualquiera otra forma.

Artículo 63.— (27).

Artículo 64.— Los estatutos de un banco comercial deberán contener las siguientes disposiciones, además de las señaladas en el artículo 426 del Código de Comercio y en el Reglamento de Sociedades Anónimas:

1) El nombre del banco, en el que podrá omitirse la indicación de que se trata de una sociedad anónima.

2) La ciudad de la República en que se instalará su casa matriz u oficina principal, y que constituirá su domicilio social, sin perjuicio de las sucursales o agencias que establezca en conformidad a la ley. En esa ciudad deberán funcionar el directorio y la gerencia general de la empresa (28) (29).

(26) En relación con las normas jurídicas aplicables a los bancos comerciales, el Art. 5º del DL. 818, de 27-12-74, dispone: "A contar desde la vigencia de este decreto ley, todos los bancos comerciales se regirán por las normas aplicables al sector privado para todos los efectos legales, cualquiera que sea la proporción de su capital que pertenezca a instituciones o entidades del Estado".

(27) Este artículo fue derogado por el Art. 1º, letra m), del DL. 3.345, de 29-4-80.

(28) Este número fue reemplazado por el que aparece en el texto, por el Art. 6º, letra e), del DL. 818, de 27-12-74.

(29) En relación con este número, el Art. 3º del DL. 749, de 13-11-74, prescribe:

"Artículo 3º— Los bancos comerciales que mantengan sucursales en distintas regiones del país deberán establecer consejos locales para la resolución de las operaciones de las respectivas regiones, de acuerdo con las normas generales que al efecto imparta el Superintendente de Bancos.

"Los consejos locales estarán compuestos por el Jefe de la oficina respectiva y por dos consejeros designados por el banco de entre las personas naturales o representantes de las personas jurídicas de la región, cuyas cuentas corrientes o depósitos tuvieren más de cinco años de antigüedad en alguna de las oficinas que el banco mantuviere en la región respectiva. Esta antigüedad no se exigirá en caso de sucursales nuevas, sino una vez transcurrido el plazo señalado desde la fecha de su instalación.

"Los consejos locales deberán funcionar en las ciudades donde tengan su asiento y los consejeros locales deberán tener su residencia en los lugares en que opere el consejo de que formen parte."

3) El número de los directores del banco y el nombre de los integrantes del directorio provisional que deban ser designados por los accionistas (30).

4) El nombre y domicilio del gerente provisional y del subgerente que lo reemplazará en caso de ausencia o incapacidad.

Artículo 65.— Los bancos comerciales estarán sujetos a las siguientes disposiciones:

1) Las acciones sólo podrán ser nominativas.

2) Los aportes de los accionistas sólo podrán consistir en dinero efectivo, esto es, en moneda legal de Chile. No se aplicará esta regla en los casos de fusión de bancos ni en los de adquisición del activo y pasivo de un banco por otro.

3) No podrán emitir acciones de industria, acciones para remunerar servicios, ni acciones con privilegio o preferencia.

4) No se establecerá límite alguno en el número de acciones por las que cada accionista podrá votar en las juntas, salvo los que impongan o autoricen las leyes (31).

5) En las elecciones que se efectúen en las Juntas de Accionistas, cada accionista dispondrá de un voto por cada acción que posea o represente y podrá acumular sus votos en favor de una sola persona o distribuirlos en la forma que estime conveniente y se proclamará elegidos a los que en una misma y única votación resulten con mayor número de votos, hasta completar el número de personas que haya que elegir (32).

6) El banco, al constituirse, deberá tener cinco accionistas a lo menos.

7) Los directorios de los bancos comerciales estarán compuestos de nueve miembros, de los cuales ocho serán elegidos por los accionistas, que podrán designar dos suplentes. Los directores durarán 3 años en sus funciones y podrán ser reelegidos.

Habrá, además, un director elegido por los trabajadores de la respectiva empresa, los cuales deberán elegir un suplente, todo ello de conformidad a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 3º del decreto ley Nº 818, de 1974 (33).

8) No podrá ser director de un banco la persona que hubiere sido condenada o estuviere procesada por delito sancionado con pena principal o accesoria de suspensión o inhabilitación temporal o perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos.

Tampoco podrá serlo el fallido no rehabilitado (34).

(30) Este número fue reemplazado por el que aparece en el texto, por el Art. 6º, letra f), del DL. 818, de 27-12-74.

(31) Este número fue reemplazado por el que aparece en el texto, por el Art. 6º, letra g), del DL. 818, de 27-12-74.

(32) Este número fue reemplazado en la forma que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra c), del DL. 2.099, de 13-1-78.

(33) Este número fue sustituido, por el que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra j), del DL. 3.345, de 29-4-80. Debe tenerse presente que el Art. 11 del DL. 3.345, derogó el inc. 1º del Art. 3º del DL. 818, de 27-12-74.

(34) En relación con las inhabilidades que establece este número, cabe señalar que el Art. 11 del DL. 2.099, de 13-1-78, dispone lo siguiente: "Se aplicarán a los directores de las sociedades financieras las inhabilidades e incompatibilidades contenidas en los N.os 8, 10, 11 y 12, del artículo 65, de la Ley General de Bancos. A los gerentes, subgerentes y apoderados generales de dichas sociedades se les aplicará lo dispuesto en el artículo 95, letra b), del DFL. 251, de 1931". Asimismo, es necesario tener presente que el Art. 8º transitorio del mencionado DL. 2.099 establece: "Las personas que se vean afectadas por alguna incompatibilidad"

9) No podrán establecerse requisitos especiales para ser elegido director derivados de la nacionalidad o profesión.

10) Es incompatible el cargo de director de un banco comercial con el de parlamentario o director o empleado de cualquiera institución financiera, y con el de empleado de la designación del Presidente de la República. También es incompatible el cargo de director de un banco comercial con el de empleado o funcionario de cualquiera de las entidades a que se refiere el número 17) de este artículo. Estas incompatibilidades no alcanzarán a los que desempeñen cargos en la enseñanza superior, secundaria o especial (35) (36).

11) No podrán ser, a la vez, directores de un mismo banco los cónyuges o los parientes en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad inclusive (37).

12) No podrá una persona desempeñar, a la vez, el cargo de director y de empleado del mismo banco. Esta disposición no obsta para que un director desempeñe, en forma transitoria y por no más de noventa días, el cargo de gerente.

Esta incompatibilidad no regirá para el director representante de los trabajadores, quien no podrá ser dirigente sindical o delegado del personal del mismo banco (38) (39).

13) Los accionistas podrán hacerse representar en las juntas por otros accionistas, por medio de una carta poder dirigida a la sociedad. El texto de estas cartas poderes será fijado por la Superintendencia.

Podrán también hacerse representar por una persona que no sea accionista; pero en este caso el mandato deberá otorgarse en carta poder firmada ante notario o por escritura pública.

Las cartas poderes que no designen el nombre del mandatario de puño y letra del poderdante, se entenderán otorgadas a los directores, y serán distribuidas entre los directores titulares elegidos por los accionistas, por iguales partes en relación al número de acciones que dichos poderes representen.

La Superintendencia podrá ordenar que los poderes sean calificados, en la forma que determine, antes de la celebración de una Junta de Accionistas. En este caso, sólo podrán ser presentados en la Junta los poderes así calificados (40).

14) El miembro del directorio que, sin permiso de éste, dejare de concurrir a sesiones durante un lapso de tres meses, cesará en su cargo por esa sola circunstancia.

15) Los requisitos, incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones y sanciones que esta ley establece para los directores, se aplicarán en la misma forma a los consejeros que los bancos designen para sus sucursales u oficinas.

16) Los directores y consejeros locales no estarán sujetos a la inhabilidad establecida en el artículo 95, letra b) del DFL. N° 251, de 1931; pero el

bilidad establecida en el artículo 11, deberán optar en el término de 60 días por uno de los cargos incompatibles. Si así no lo hicieren, cesarán de pleno derecho en todos los cargos incompatibles".

(35) Este número fue reemplazado por el que aparece en el texto, por el Art. 1°, letra a), del DL. 3.345, de 29-4-80.

(36) (37) (39) Ver nota (34).

(38) Este inciso fue agregado por el Art. 6°, letra h), del DL. 818, de 27-12-74.

(40) Este número fue reemplazado por el que aparece en el texto, por el Art. 6°, letra i), del DL. 818, de 27-12-74.

cargo se computará para los efectos del artículo 96, inciso primero del mismo cuerpo legal (41) (42).

17) No podrán ser accionistas de un banco comercial el Fisco, los Servicios, Instituciones Fiscales, Semifiscales, Organismos Autónomos, Empresas del Estado y, en general, todos los Servicios Públicos creados por ley, como asimismo las empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción o, en las mismas condiciones, representación o participación (43) (44).

(41) Este número fue agregado por el Art. 6º, letra j), del DL. 818, de 27-12-74, y modificado por los Arts. 8º del DL. 1.171, de 5-9-75, y 1º, letra d), del DL. 2.099, de 13-1-78.

(42) A continuación se transcriben los Arts. 95, letra b), y 96 del DFL. N° 251, de 22-5-31, sobre Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio:

"Artículo 95.— No podrán ser directores ni gerentes de una sociedad anónima: b) Los Directores, Gerentes, Subgerentes o apoderados generales de instituciones bancarias, de las Sociedades colocadoras de acciones a que se refiere la ley N° 16.394 y de las Sociedades regidas por el DFL. N° 324, de 1960. Esta prohibición no se aplicará a los directores de instituciones bancarias cuya designación provenga de la aplicación de una disposición legal."

"Artículo 96.— Ninguna persona podrá ser Director de más de tres Sociedades Anónimas, incluidas las Compañías de Seguros, no computándose en esta limitación hasta dos Sociedades filiales o Sociedades complementarias de aquellas a que se refiere el artículo 103 de la Ley N° 13.305.

"Las personas elegidas o designadas Directores de un número mayor de Sociedades que el señalado en el inciso primero de este artículo, deberán optar por los cargos de Director que deseen conservar, dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha en que se procedió a su elección o designación. En caso contrario, las elecciones o designaciones de Director que excedan de dicho máximo serán nulas de pleno derecho. De igual nulidad adolecerán las designaciones y elecciones que contravengan el artículo anterior. En ambos casos los administradores responderán solidariamente frente a terceros de los actos ejecutados o contratos celebrados por la Sociedad en esas circunstancias.

"Las limitaciones indicadas en este artículo y en el precedente no regirán respecto de las Sociedades Anónimas cuyas finalidades se relacionan exclusivamente con actividades deportivas, educacionales, de beneficencia u otras semejantes, en las que sus directores no reciban remuneración.

"Por decreto supremo fundado del Ministerio que corresponda, podrá exceptuarse a determinada persona de la obligación establecida en el inciso primero de este artículo, para que pueda ejercer el cargo de director de una sociedad anónima, cuando la mayoría de las acciones de dicha sociedad anónima pertenezca al sector público." (Este inciso final fue agregado por el decreto ley N° 849, de 15 de enero de 1975).

(43) Este número fue agregado por el Art. 6º, letra j), del DL. 818, de 27-12-74, y modificado por el Art. 1º, letra b), del DL. 3.345, de 29-4-80.

(44) En relación con este número, cabe tener presente que el Art. 2º del DL. 1.645, de 3-1-77, modificado por el Art. 18 del DL. 2.099, de 13-1-78, prescribe lo siguiente:

"Artículo 2º— Declárase que la prohibición contenida en el artículo 65. N° 17, de la Ley General de Bancos no es ni ha sido aplicable a aquellos casos en que las entidades a que se refiere dicha disposición hayan recuperado o recuperen acciones bancarias como consecuencia de la resolución o resciliación de los contratos de compraventa de esas acciones que celebren o hubieren celebrado. Tampoco regirá dicha prohibición respecto de las mismas acciones bancarias que la Corporación de Fomento de la Producción adquiera en remate efectuado a requerimiento de ella, conforme al procedimiento establecido en el artículo 6º de la ley N° 4.287.

TITULO IX

DEL CAPITAL, RESERVAS Y DIVIDENDOS DE LOS BANCOS COMERCIALES

Artículo 66.— El monto del capital pagado y reservas de un banco no podrá ser inferior al equivalente de 400.000 Unidades de Fomento.

Si el capital pagado y reservas se redujeren de hecho a una cantidad inferior al mínimo, el banco estará obligado a completarlo dentro de un año, plazo que el Superintendente podrá ampliar por motivos calificados hasta por otro año. Si no lo completare, se le revocará la autorización para funcionar (45) (46).

"La mencionada Corporación podrá pactar la resciliación de los contratos a que se refiere este artículo, si el comprador se allanare a renunciar a obtener la restitución de las cantidades pagadas como precio de las acciones.

"No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la Corporación podrá, con acuerdo previo del Consejo de la Corporación adoptado por la unanimidad de sus miembros, convenir dichas resciliaciones sin que sea necesario que el comprador efectúe la renuncia a que se refiere el citado inciso".

También en relación con este N° 17, procede señalar que los Arts. 1° y 2° transitorios del DL. 818, de 1974, reemplazados por el Art. 5° del DL. 2.099, de 13-1-78, disponen lo siguiente:

"Artículo primero transitorio.— Las instituciones a que se refiere el artículo 65 N° 17 de la Ley General de Bancos deberán enajenar antes del 31 de diciembre de 1980 todas las acciones bancarias que posean.

"La transferencia de dichas acciones se hará en las condiciones que establezca el consejo o autoridad respectiva. Las ventas podrán hacerse en forma directa, mediante el sistema de propuesta o licitación o en bolsas de valores.

"Lo dispuesto en el artículo 65 N° 17 de la Ley General de Bancos no regirá durante los años 1977 a 1980 respecto de la Corporación de Fomento de la Producción cuando se trate de suscripción de acciones bancarias provenientes de aumentos de capital de las empresas en que sea accionista. Asimismo, y hasta el 31 de diciembre de 1979, dicha Corporación podrá, previo acuerdo del Consejo Monetario, adquirir acciones bancarias mediante la permuta de acciones de un determinado banco por acciones de otro banco o la dación en pago que lo efectúen deudores de créditos vencidos y protestados".

"Artículo segundo transitorio.— Las acciones que no se paguen al contado quedarán, de pleno derecho, constituidas en prenda para asegurar el pago del precio insoluto y sujetas a la prohibición de gravarlas y enajenarlas sin autorización del vendedor hasta que el pago se efectúe. Se tomará nota de esta prenda y prohibición en el correspondiente Registro de Accionistas. La parte del precio que se pague a plazos superiores a noventa días será siempre reajutable.

"En las enajenaciones de acciones pertenecientes a las entidades a que se refiere el N° 17 del artículo 65 de la Ley General de Bancos, tendrá mérito ejecutivo el documento en que conste que el pago del precio de venta o de parte de él se efectuará a plazo, siempre que la firma del comprador hubiere sido autorizada por un notario. Dicho documento estará exento de todo impuesto. Esta exención se entenderá haber tenido vigencia a contar de la fecha en que comenzó a regir el DL. N° 619, de 1974.

"Lo establecido en el inciso anterior será también aplicable a los instrumentos que den constancia de las posteriores transferencias de las acciones bancarias que hubieren pertenecido a alguna de las entidades a que se refiere el N° 17 del artículo 65 de la Ley General de Bancos y que, mientras se mantengan vigentes la prenda y la prohibición contempladas en el inciso 1° de este artículo, efectúen los adquirentes de ellas o sus sucesores a cualquier título."

(45) Este artículo fue reemplazado por el que aparece en el texto por el artículo 1°, letra b), del D.L. N° 3.460.

(46) Debe considerarse que el artículo transitorio del D.L. N° 3.460, estableció lo siguiente:

"Los bancos y sociedades financieras en actual funcionamiento, así como también aquéllos cuyo prospecto de formación o solicitud para establecerse haya sido aceptado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de-

Artículo 67.— Al tiempo de otorgarse la escritura social, deberá encontrarse totalmente suscrito el capital del banco y pagado, a lo menos, el mínimo a que se refiere el artículo anterior.

Si se estableciere con un capital superior a ese mínimo, el exceso deberá pagarse dentro del plazo máximo de un año, contado desde la fecha del decreto que autorice la existencia y apruebe los estatutos del Banco.

Art. 68.— (47).

Artículo 69.— Los bancos comerciales podrán aumentar su capital en cualquier tiempo, mediante reforma de los estatutos. Las acciones que se emitan deberán quedar totalmente suscritas y pagadas en el plazo que se fije en el decreto supremo que apruebe la reforma a propuesta del Superintendente (48).

Artículo 70.— Sólo con autorización del Superintendente, un banco comercial podrá acordar la reducción del capital. En ningún caso se autorizará que el capital quede reducido a una cantidad inferior al mínimo legal.

Artículo 71.— Se prohíbe a los bancos comerciales anunciar en forma alguna su capital autorizado o suscrito sin indicar al mismo tiempo el monto de su capital pagado. Se prohíbe, asimismo, a las sucursales de los bancos extranjeros anunciar en forma alguna la cuantía del capital y reservas de la institución bancaria matriz sin indicar, al mismo tiempo, la cuantía del capital y reservas asignados a la sucursal que funcione en Chile.

Artículo 72.— Los fondos de reserva se formarán con recursos tomados de ganancias líquidas, con el excedente que el banco hubiere obtenido por las acciones colocadas a un precio superior a su valor nominal, o con los demás arbitrios que las leyes permitan emplear.

Artículo 73.— Todo banco comercial debe constituir un fondo denominado "fondo de reserva legal", que ascenderá al 25% de su capital pagado. Para formar este fondo, el banco destinará, por lo menos, un 10% de sus utilidades líquidas.

berán completar el capital pagado y reservas mínimo que fija este decreto ley dentro del plazo de tres años, contado desde la fecha de su publicación. Dichas empresas presentarán a la Superintendencia un plan de capitalización en un plazo de 180 días contado desde la misma fecha. La no presentación del plan o el incumplimiento de éste, una vez aprobado, se sancionará en conformidad al artículo 19 del decreto ley N° 1.097, de 1975.

"Si un banco o sociedad financiera no enterare el capital pagado y reservas mínimo que corresponda dentro del plazo señalado en el inciso anterior, le será revocada la autorización de existencia, procediéndose a su liquidación forzosa en conformidad a la ley.

"Mientras estas empresas estén sujetas al mencionado plan de capitalización, su capital pagado y reservas no podrá ser inferior al que resulte de aplicar el sistema que regía en la ley que se modifica."

(47) Este artículo fue derogado por la letra c) del artículo 1° del D.L. N° 3.460.

(48) A contar desde la vigencia de la ley 17.308, de 1-7-70, las reformas de estatuto se aprueban por resolución de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y no por Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda.

Los bancos podrán, de acuerdo con la ley o con sus estatutos, formar otros fondos de reserva.

Artículo 74.— Los términos "fondo de reserva" o "reservas" usados por esta ley se refieren a todos los fondos de que trata el artículo anterior [49].

Artículo 75.— La junta ordinaria de accionistas, a propuesta del directorio de la empresa, podrá acordar al término de cada ejercicio el reparto de un dividendo que deberá tomarse de las ganancias líquidas, después de pasar a la reserva legal la cantidad que corresponda, del fondo destinado al efecto o de otros arbitrios que las leyes autoricen.

Si se hubiere perdido una parte del capital o del fondo de reserva legal de la empresa, no podrá repartirse dividendo mientras no se haya reparado la pérdida.

Artículo 76.— El directorio de una empresa podrá acordar, bajo su responsabilidad, el reparto de dividendos trimestrales, siempre que la empresa haya completado el fondo de reserva legal y que dicho reparto se haga con cargo a utilidad producida que aparezca de balances confeccionados especialmente con este objeto y previa comprobación y autorización de la Superintendencia.

Artículo 77.— Los directores o gerentes de un banco que, a sabiendas, hubieren propuesto u ordenado el pago de dividendos en contravención a lo dispuesto en los dos artículos anteriores, serán solidariamente responsables del importe del dividendo repartido en tales condiciones.

TITULO X

DEL ENCAJE Y DEL LIMITE MAXIMO DE LOS DEPOSITOS Y OBLIGACIONES DE LOS BANCOS COMERCIALES

Artículo 78.— Todo banco comercial y el Banco del Estado de Chile, deberán mantener como encaje:

- 1) Por sus depósitos exigibles a la vista, el 10%.
- 2) Por sus depósitos exigibles a plazo, el 4%.
- 3) Por las demás obligaciones que determine el Superintendente, las tasas que éste fije, que no podrán exceder de las señaladas en los números 1) y 2), según sean a la vista o a plazo (50).

Para estos efectos se considerarán depósitos u obligaciones a la vista, aquellos cuyo pago pueda ser legalmente requerido dentro de un plazo inferior a treinta días. Los que sólo puedan serlo en un plazo de treinta días o más, se considerarán a plazo.

Las tasas de encaje para los depósitos, establecidas en los números 1) y 2) de este artículo, podrán ser modificadas por el Banco Central de Chile

[49] El inciso 2° de este artículo que trataba de las "reservas adicionales", fue derogado por el Art. 1°, letra a), del DL. 1.171, de 5-9-75.

[50] Cabe señalar que la facultad a que se refiere el numeral 3) corresponde en la actualidad al Banco Central de Chile, como consecuencia de lo dispuesto en el Art. 18, N° 4, del DL. 1.078, de 1975.

de acuerdo con la facultad que le confiere su ley orgánica. En ningún caso podrá fijar tasas inferiores a las que se determinan en dichos números (51).

Artículo 79.— El encaje deberá estar constituido por billetes y monedas de curso legal en el país, que estén disponibles en caja o depositados a la vista en el Banco Central de Chile. Se considerará como parte del encaje el depósito de garantía a que se refiere el artículo 36. En ningún caso servirán para constituir el encaje las monedas de oro chilenas.

Servirán también de encaje para los depósitos u obligaciones en moneda extranjera, los billetes o monedas de curso legal del país respectivo y los depósitos de estas divisas constituidos en el Banco Central de Chile.

Para los efectos de este artículo, la Superintendencia fijará periódicamente las equivalencias de las divisas (52).

Artículo 80.— El encaje que deben mantener las instituciones fiscalizadas por la Superintendencia se calculará por períodos mensuales o quincenales, según los acuerde el Banco Central de Chile, quien podrá determinar que dicha exigencia se cumpla en relación con el promedio de depósitos u obligaciones del mes o quincena precedente, según corresponda. Para tal efecto, se entenderán por períodos quincenales los comprendidos entre los días 1º y 15 y entre el 16 y el último día de cada mes calendario.

Las instituciones que no mantengan el encaje a que estén obligadas incurrirán en una multa de un porcentaje equivalente a un duodécimo de la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor durante los doce o los seis meses anteriores al mes precedente a aquel en que ocurra la infracción, según que el encaje sea mensual o quincenal. La multa se calculará sobre el término medio a que hubiere ascendido el déficit durante el mes o quincena en que éste se produzca. El referido porcentaje, en ningún caso podrá ser inferior al cuatro o dos por ciento, según que el encaje se haga mensual o quincenalmente. Si el déficit se repitiera, la multa correspondiente se aplicará con un recargo del 50% en los meses o quincenas siguientes a la primera infracción.

Si la falta de encaje se originare por causa de cierre bancario y no se prolongare por más de quince días contados desde la fecha de cesación del cierre, el Superintendente podrá rebajar o condonar la multa (53).

Artículo 81.— Los depósitos y obligaciones para con terceros de un banco comercial no podrán exceder de veinte veces su capital pagado y reservas. La infracción a este precepto será castigada con multa de dos por mil sobre el exceso de los depósitos y obligaciones por cada día que lo mantenga.

La proporción a que se refiere el inciso primero podrá ser disminuida por el Superintendente, con aprobación del Presidente de la República, hasta en un cincuenta por ciento (54).

(51) Artículo modificado, en la forma en que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra f), del DL. 2.099, de 13-1-78.

(52) Artículo modificado, en la forma que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra c), del DL. 3.345, de 29-4-80.

(53) Este artículo fue reemplazado, por el que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra a), del DL. 1.847, de 4-7-77.

(54) Artículo modificado, en la forma que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra d), del DL. 3.345, de 29-4-80.

Artículo 82.— El Superintendente estará facultado para dictar las normas por las cuales las empresas bancarias deberán regirse para dar cumplimiento a las obligaciones a que se refiere este Título.

TITULO XI

DE LAS OPERACIONES DE LOS BANCOS COMERCIALES (55) (56) (57) (58)

Artículo 83.— Los bancos comerciales podrán efectuar las siguientes operaciones:

1) Recibir depósitos y celebrar contratos de cuenta corriente bancaria.

- (55) El Art. 5º de la Ley 17.236, de 21-11-69, autorizó a los bancos comerciales para invertir hasta un 5% de sus fondos de reserva en la realización o adquisición de obras de arte.
- (56) El Art. 16 del DL. 231, de 31-12-73, faculta a los bancos comerciales y al Banco del Estado de Chile, para actuar como delegados del Servicio de Tesorerías en la recaudación de toda clase de tributos y en el pago de obligaciones fiscales. Por su parte, el Art. 47 del Código Tributario, aprobado por DL. 830, de 1974, dispone que: "El Ministro de Hacienda podrá facultar al Banco del Estado de Chile, a los bancos comerciales y a otras instituciones, para recibir de los contribuyentes el pago de cualquier impuesto que se haga dentro de los plazos legales o reglamentarios. Los pagos deberán comprender la totalidad de las cantidades incluidas en los respectivos boletines, giros u órdenes de ingreso. Si el impuesto debe legalmente enterarse por cuotas, el pago abarcará la totalidad de la cuota correspondiente". En virtud de las disposiciones citadas se dictó el Decreto de Hacienda N° 255, de 20-3-79, publicado en el D. Of. de 7-4-79, que reglamenta la facultad de los contribuyentes para pagar sus impuestos, contribuciones y demás obligaciones tributarias y fiscales o las cuotas en que ellos se hayan dividido, en el Banco del Estado de Chile, en los bancos comerciales, en los bancos de fomento y en las sociedades financieras.
- (57) El Art. 2º del DL. 1.171, de 5-9-75, modificado por el Art. 6º del DL. 2.099, de 13-1-78, dispone: "Los bancos comerciales podrán establecer en las condiciones generales que determine el Consejo Monetario un departamento de ahorro e inversión, cuyas cuentas se reflejarán separadamente en la contabilidad de la empresa.
"Su función será captar depósitos a plazo superior a un año que serán reajustables e invertir y colocar la totalidad de ellos en valores o préstamos también reajustables.
"Las inversiones que haga el banco con cargo a este fondo no estarán afectas al límite que señala el artículo 83 de la Ley General de Bancos.
"Los préstamos que se efectúen con estos recursos deberán otorgarse a un plazo superior a un año y que no exceda de tres años."
- (58) El Art. 5º del DFL. N° 115, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado en el D. Of. de 26-1-79, prescribe: "Las instituciones de previsión podrán celebrar convenios con el Banco del Estado de Chile y con bancos comerciales para que éstos reciban de los empleadores las imposiciones, aportes y dividendos, y para que paguen por cuenta de aquéllas a sus beneficiarios una o más prestaciones de seguridad social.
"Un reglamento dictado por intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social fijará las modalidades que deberán aplicarse para la celebración de dichos convenios".
El reglamento a que hace mención el inc. 2º del artículo transcrito está contenido en el decreto N° 104, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado en el D. Of. de 23-10-79.

Las captaciones podrán documentarse mediante la aceptación de letras de cambio, la suscripción de pagarés o contratos de mutuo (59).

2) Hacer préstamos con o sin garantía (60).

3) Descontar letras de cambio, libranzas, pagarés y otros documentos que representen obligación de pago (61).

3 bis) Emitir letras de crédito y transferirlas sobre hipotecas constituidas a su favor y realizar al efecto las operaciones a que se refiere el artículo 86, N.ºs. 1, 2, 3 y 4 con arreglo a lo dispuesto en el Título XII de esta ley. Las obligaciones del mutuuario en estas operaciones se computarán para los efectos de los límites que establece el artículo 84, N.ºs. 1 y 7 (62).

4) Adquirir, ceder y transferir efectos de comercio, con sujeción a las normas que acuerde el Banco Central en conformidad a su Ley Orgánica (63) (64).

5) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos.

6) Efectuar operaciones de cambios internacionales con arreglo a la ley (65).

7) Emitir cartas de crédito, con plazos que no excedan de un año.

8) Avalar letras de cambio y otorgar fianzas simples y solidarias con sujeción a las normas y limitaciones que imparta el Banco Central (66).

9) Emitir letras, libranzas, órdenes de pago y giros contra sus propias oficinas o corresponsales.

10) Emitir boletas o depósitos de garantía, que serán inembargables por terceros extraños al contrato o a la obligación que caucionen.

11) Recibir valores y efectos en custodia, en las condiciones que el mismo banco fije y dar en arrendamiento cajas de seguridad para el depósito de valores y efectos.

(59) En relación con este número, véase el DL. 1.683, de 7-1-77, que establece un sistema de seguro para los depósitos y captaciones efectuados en instituciones financieras.

El inc. 2º de este número fue agregado por el Art. 1º, letra e), del DL. 3.345, de 29-4-80.

(60) Este número fue modificado, en la forma en que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra g), del DL. 2.099, de 13-1-78.

En relación con este N.º 2), debe tenerse presente que el Art. 8º del DL. 280, de 1974, sobre delito económico, modificado por el Art. 7º del mencionado DL. 2.099, dispone lo siguiente:

"El que utilizare créditos de fomento o de reconstrucción con un objetivo distinto de aquel que sirvió de base para su otorgamiento, será penado con presidio menor en sus grados medio a máximo.

"El que obtuviere créditos de instituciones de crédito públicas o privadas suministrando o proporcionando datos falsos o maliciosamente incompletos acerca de su identidad, actividades o estado de situación o patrimonio, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio".

(61) Este número fue sustituido por el Art. 1º, letra c), del DL. 1.171, de 5-9-75, y modificado por el Art. 1º, letra h), del DL. 2.099, de 13-1-78.

(62) Este número fue agregado por el Art. 1º, letra b), del DL. 1.847, de 4-7-77, y modificado en la forma que aparece en el texto por el Art. 1º, letra j), del DL. 2.099, de 13-1-78, y el Art. 1º, letras f) y n) del DL. 3.345, de 29-4-80.

(63) Este número fue sustituido por el que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra d), del DL. 1.171, de 5-9-75.

(64) En relación con este N.º 4) procede señalar que el Art. 6º del DL. 1.638, de 30-12-76, dispone que la intermediación, cesión o venta de efectos de comercio por parte de las instituciones autorizadas legalmente para efectuar este tipo de operaciones, se sujetará a las normas que al efecto dicte el Consejo Monetario.

(65) Este número fue modificado, en la forma que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra f), del DL. 3.345, de 29-4-80.

(66) Este número fue modificado, en la forma que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra i), del DL. 2.099, de 13-1-78.

11 bis) Encargarse de la emisión y garantizar la colocación en el país o en el exterior, de acciones, debentures y otras obligaciones de sociedades anónimas chilenas y servir de representante de los tenedores de debentures, cobrando las comisiones que determine la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Podrán, asimismo, garantizar el servicio de bonos y debentures de sociedades anónimas chilenas. Los montos de los valores mobiliarios cuya colocación o servicios se encuentren garantizados por el banco, se incluirán en los límites del inciso 2º del artículo 83 y del Nº 9 del artículo 84 (67).

12) Aceptar y ejecutar comisiones de confianza, de acuerdo con el Título VI de esta ley.

12 bis) Servir de agentes financieros de instituciones y empresas nacionales, extranjeras o internacionales, para la colocación de recursos en el país (68).

13) Adquirir, conservar y enajenar, sujeto a las normas que fije el Banco Central, bonos de la deuda interna y cualquiera otra clase de documentos representativos de obligaciones del Estado o de sus instituciones. Los bancos podrán adquirir, conservar y enajenar oro amonedado o en pastas, dentro del margen general que fija el inciso 2º de este artículo (69) (70).

14) Adquirir, conservar y enajenar bonos u obligaciones de renta de instituciones internacionales a las que se encuentre adherido el Estado de Chile.

15) Adquirir, conservar y enajenar valores mobiliarios en general, y, en especial, los emitidos por sociedades anónimas, asociaciones de ahorro y préstamo y cooperativas chilenas. Podrán también hacerlo en acciones de bancos extranjeros con autorización del Banco Central y de la Superintendencia, sin que rijan en este caso los márgenes que establece el artículo 84 Nº 9 de la presente ley (71).

Podrán también adquirir por cuenta propia letras de crédito emitidas por otras empresas bancarias (72) (73).

16) Adquirir, conservar, edificar y enajenar bienes raíces necesarios para su funcionamiento o el de sus servicios anexos. El banco podrá dar en arrendamiento la parte de los inmuebles que no esté utilizando o los bienes raíces que requiera para futura expansión.

17) Adquirir, conservar y enajenar los bienes corporales muebles necesarios para su servicio o para la mantención de sus inversiones.

El conjunto de las inversiones que el banco efectúe en las clases de bienes y valores a que se refieren los Nros. 14), 15), 16) y 17) no podrá exceder del total de su capital pagado y reservas (74).

(67) (68) Estos números fueron agregados por el Art. 1º, letra g), del DL. 3.345, de 29-4-80.

(69) El Art. 83, desde este número en adelante, fue sustituido por lo que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra e), del DL. 1.171, de 5-9-75.

(70) Este número fue modificado, en la forma que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra i), del DL. 3.345, de 29-4-80.

(71) Este número fue modificado, en la forma que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra h), del DL. 3.345, de 29-4-80.

(72) Este inciso fue agregado por el Art. 1º, letra c), del DL. 1.847, de 4-7-77.

(73) En relación con este Nº 15), el Art. 8º del DL. 818, de 27-12-74, dispone: "Los bancos comerciales, hipotecarios o de fomento no podrán hacer aportes ni tener participación en sociedades financieras."

(74) En relación con este inciso, el Art. 1º transitorio del DL. 1.171, de 5-9-75, establece: "Los bancos comerciales podrán conservar por un plazo máximo de tres años las inversiones que actualmente poseen, aun cuando excedan de los márgenes que esta ley establece, siempre que ellas estuvieren encuadradas dentro de los límites que la ley anterior señalaba."

El banco que adquiera bienes en exceso de lo dispuesto en el inciso anterior, incurrirá en una multa hasta del uno por ciento sobre el exceso de la inversión realizada por cada día que lo mantenga.

La limitación indicada no se aplicará, sin embargo, cuando los bienes le hubieren sido transferidos en pago de deudas previamente contraídas a su favor por deudores que hubieren caído en insolvencia y siempre que no tuvieran otras garantías en las cuales hacerlas efectivas; o cuando se los adjudiquen en remate judicial en pago de obligaciones garantizadas con prendas o hipotecas constituidas a su favor.

En estos casos, el banco estará obligado a enajenar dichos bienes dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de su adquisición.

Si el capital pagado y reservas del banco disminuyeren por hecho fortuito o si por cualquiera otra causa de la misma naturaleza éste resultare excedido en sus inversiones, deberá enajenar bienes equivalentes al exceso dentro del mismo plazo. En casos justificados, el Superintendente podrá prorrogar estos plazos hasta por otro año.

Al banco obligado a enajenar bienes dentro de un determinado plazo que no cumpliera con dicha obligación se le aplicará la multa señalada en el inciso 3º de este número.

Sin perjuicio de las inversiones a que se refiere este artículo, los bancos deberán dar cumplimiento a aquellas obligaciones que les imponen las leyes sobre vivienda u otras disposiciones legales (75).

Artículo 84.— Todo banco comercial estará sujeto a las limitaciones siguientes:

1) No podrá conceder créditos, directa o indirectamente, a una misma persona natural o jurídica, por una suma que exceda del 5% de su capital pagado y reservas.

Podrá, sin embargo, conceder dichos créditos hasta por un 25% de su capital pagado y reservas si lo que excede del 5% corresponde a créditos caucionados por garantías reales de un valor igual o superior a dicho exceso. No se

(75) Sin perjuicio de las operaciones enumeradas en este artículo, debe tenerse presente que el Art. 8º del DL. 1.638, de 30-12-76, dispone lo siguiente: "Artículo 8º. Los bancos comerciales y de fomento y el Banco del Estado de Chile podrán, en las condiciones generales que determine el Consejo Monetario, recibir dinero en depósitos de ahorros en cuentas individuales para la adquisición, construcción, reparación, terminación o ampliación de viviendas y para la adquisición o construcción de oficinas y locales comerciales.

"Los préstamos que se otorguen con el objeto señalado en el inciso anterior, no estarán afectos a la limitación de plazo que señala el N° 2 del artículo 83 de la Ley General de Bancos.

"No se aplicará a los depósitos de ahorro a que se refiere este artículo, lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley General de Bancos. El Banco Central de Chile podrá, en conformidad con la facultad que le confiere su ley orgánica, fijar encajes y reservas técnicas por dichos depósitos.

"El mutuo concedido para los fines señalados en este artículo y la hipoteca que lo garantice deberán otorgarse conjuntamente. Estos créditos serán siempre a la orden y los derechos del acreedor serán transferibles mediante endoso escrito a continuación, al margen o al dorso del título de los mismos.

"El endoso deberá contener el nombre, apellidos y domicilio del endosatario, la fecha en que se haya extendido y las firmas del endosante y el cesionario. Las firmas de las partes serán autorizadas por un notario y deberá anotarse al margen de la inscripción hipotecaria respectiva."

considerarán para los efectos de este artículo las garantías constituidas sobre letras de cambio, libranzas o pagarés comerciales (76).

Esos mismos límites se elevarán al 20% y al 40%, respectivamente, si el exceso corresponde a créditos concedidos en monedas extranjeras para exportaciones de cualquier naturaleza o para importaciones de materias primas o artículos de consumo esenciales, maquinarias, repuestos u otros elementos destinados a la producción (77).

Los préstamos que un banco comercial otorgue a otra institución financiera establecida en el país no podrán exceder del 30% del capital pagado y reservas del Banco acreedor (78).

La Superintendencia podrá establecer normas sobre la valorización de las garantías para los efectos de este artículo (79).

Si un banco otorgare créditos en exceso de los límites fijados en la presente disposición, incurrirá en una multa equivalente al 10% del monto de dicho exceso.

2) Los porcentajes que se establecen en el número anterior se reducirán a la mitad:

a) En los créditos a sociedades en que el banco sea accionista.

b) En los créditos a personas naturales que sean dueñas de más del 5% del capital del banco o a personas jurídicas que posean más del 10% de él.

El banco que infringere estas limitaciones, será sancionado con una multa equivalente al 10% del valor del exceso del crédito concedido.

3) No podrá aceptar ni conservar en garantía de créditos, acciones de otra empresa bancaria cuyo valor exceda del 10% del capital pagado y reservas de esa empresa o del mismo porcentaje de su propio capital pagado y reservas. Esta limitación no impedirá que se acepten acciones de otra empresa bancaria para asegurar el pago de una deuda previamente contraída de buena fe.

4) No podrá conceder crédito alguno con garantía de sus propias acciones. Podrá, sin embargo, recibirlas en garantía cuando ello resulte necesario para evitar una pérdida ocasionada por una deuda previamente contraída de buena fe; pero en tal caso, deberán ser realizadas dentro del plazo de un año contado desde la fecha de constitución de la prenda.

La contravención a la disposición anterior o a ésta, será sancionada con una multa igual al valor de las acciones recibidas en garantía.

5) No podrá conceder, directa o indirectamente, crédito alguno con el objeto de habilitar a una persona para que pague o conserve acciones del propio banco. Si contraviniera esta disposición, pagará una multa igual al valor del crédito.

6) (80).

7) No podrá conceder, directa o indirectamente, a un director o empleado créditos que excedan de dos sueldos vitales anuales de la provincia de Santiago, ni renovarlos o prorrogarlos sin el acuerdo previo de los dos tercios del directorio y sin dejar testimonio de ello en el acta respectiva (81).

(76) Inciso reemplazado, en la forma en que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra k), del DL. 2.099, de 13-1-78, y modificado por el Art. 1º, letra k), del DL. 3.345, de 29-4-80.

(77) Inciso modificado por el Art. 1º, letra k), del DL. 3.345, de 29-4-80.

(78) Inciso reemplazado por el que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra k), del DL. 3.345, de 29-4-80.

(79) Inciso agregado por el Art. 1º, letra k), del DL. 2.099, de 13-1-78.

(80) Número derogado por el Art. 1º, letra m), del DL. 3.345, de 29-4-80.

(81) Este inciso fue modificado, en la forma que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra f), del DL. 1.171, de 5-9-75.

Al considerarse la solicitud de crédito formulada por alguno de los directores, éste deberá abstenerse de votar.

El monto total de los créditos a los directores y empleados de un banco no podrá exceder de un 1,5% del capital pagado y reservas de la empresa (82).

No podrá concederse a un mismo director o empleado créditos que excedan del 10% del límite fijado en el inciso anterior (83).

Estas limitaciones se aplicarán de igual modo respecto de las obligaciones de directores y empleados vigentes al tiempo de asumir sus funciones.

Se considerarán concedidos a un director o empleado los créditos que se otorguen a una sociedad colectiva o en comandita en que cualquiera de ellos fuere socio solidario o a una sociedad de cualquier naturaleza en que directores o empleados del mismo banco tengan más del 50% del capital social o de las utilidades.

Todo banco que contraviniera cualquiera de estos preceptos, deberá pagar una multa igual al valor del crédito. Los directores que concurran con su voto a una contravención y el director o gerente a quien se hubiere concedido el crédito, quedarán solidariamente responsables del valor de la multa.

8) Salvo los casos especiales determinados por esta ley, ningún banco comercial podrá, directa o indirectamente, adquirir acciones de sociedades en comandita, mercaderías, productos, ganados y frutos del país. Si se viere obligado a tomarlos en adjudicación o dación en pago, con motivo de créditos concedidos anteriormente, deberá enajenarlos dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de adquisición (84).

9) No podrá el banco adquirir predios agrícolas, acciones de bancos comerciales nacionales, sociedades financieras y bolsas de comercio o poseer acciones que representen más del 10% del capital de una sociedad anónima ni invertir más del 20% de su capital y reservas en valores mobiliarios emitidos por una misma sociedad (85) (86).

La infracción a este precepto o al anterior, será sancionada con una multa igual al valor de los bienes adquiridos (87).

Artículo 85.— Cuando en virtud de esta ley corresponda determinar el monto de las obligaciones de una persona natural o jurídica en favor de un banco, se observarán las siguientes reglas:

(82) Este inciso fue sustituido por el que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra g), del DL. 1.171, de 5-9-75.

(83) Este inciso fue modificado, en la forma que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra h), del DL. N° 1.171, de 5-9-75.

(84) Este número fue reemplazado por el Art. 1º, letra i), del DL. 1.171, de 5-9-75, y modificado en la forma que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra l), del DL. 2.099, de 13-1-78.

(85) Inciso sustituido por el que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra j), del DL. 1.171, de 5-9-75, y modificado por el Art. 1º, letra l), del DL. 3.345, de 29-4-80.

(86) El Art. 28 del DL. 2.565, de 3-4-79, dispone: "Las sociedades anónimas, con exclusión de los bancos y sociedades financieras, podrán adquirir acciones o derechos en sociedades de cualquier tipo cuyo objeto social principal sea la plantación o explotación de bosques, sin que rijan a este respecto limitaciones legales o reglamentarias".

(87) Sin perjuicio de las limitaciones contenidas en este Art. 84, cabe señalar que el Art. 2º de la ley 14.601, de 16-8-61, prescribe lo siguiente: "Las instituciones bancarias no podrán aceptar como garantía de operaciones de crédito la fianza o solidaridad de personas que desempeñan cargos de representación popular, salvo en el caso de operaciones de comunidades o sociedades en que tengan participación".

1) Al computar las deudas de un individuo se incluirán no sólo sus obligaciones directas o indirectas, sino también las contraídas por las sociedades colectivas o en comandita en que sea socio solidario o por las sociedades de cualquier naturaleza en que tenga más del 50% del capital o de las utilidades.

2) En las deudas contraídas por una sociedad colectiva o en comandita se incluirán no sólo las obligaciones directas o indirectas de estas sociedades, sino también las contraídas a favor del banco por sus socios solidarios o por cualquiera de los socios que tengan más del 50% del capital o de las utilidades.

3) En las deudas de una sociedad anónima o de una sociedad de responsabilidad limitada se incluirán, a más de las obligaciones directas o indirectas de la sociedad, las contraídas personalmente por cualquiera de los socios a favor de la misma institución, siempre que tenga en la sociedad más del 50% del capital o de las utilidades.

4) En caso de pluralidad de deudores, la obligación se considerará por el total como deuda de cada uno de los obligados, a menos que conste fehacientemente lo contrario.

TITULO XII (88)

DE LAS OPERACIONES HIPOTECARIAS

Artículo 86.— El Banco del Estado, los bancos comerciales y los bancos de fomento podrán conceder préstamos, en moneda nacional o extranjera mediante la emisión de letras de crédito por igual monto que aquéllos y su reembolso se hará por medio de dividendos anticipados.

Las letras de crédito deberán estar expresadas en moneda corriente, en unidades de fomento o en moneda extranjera. Estas últimas, en todo caso, se pagarán en moneda corriente.

Con el objeto de conceder estos préstamos, los bancos podrán efectuar las siguientes operaciones:

1. Emitir letras de crédito y transferirlas sobre hipotecas constituidas a su favor.

2. Recaudar las cuotas que deban pagar los deudores hipotecarios y pagar los intereses y amortizaciones a los tenedores de letras de crédito.

3. Amortizar en forma directa o indirecta las letras de crédito que hubieren emitido. La amortización indirecta podrá ser por compra, rescate o sorteo a la par.

4. Comprar y vender letras de crédito por cuenta propia o ajena (89).

Artículo 87.— Corresponderá al Consejo Monetario:

1) Establecer las normas sobre préstamos hipotecarios mediante emisión de letras de crédito.

2) Fijar a los bancos los límites para la adquisición por cuenta propia de letras de crédito de su propia emisión.

(88) Este Título fue reemplazado íntegramente en la forma en que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra m), del DL. 2.099, de 13-1-78.

(89) Artículos modificados, en la forma que aparece en el texto, por el Art. 1º, letra n) del DL. 3.345, de 29-4-80.

Artículo 88.— El producto de los préstamos en letras de crédito que se concedan para edificaciones o para la construcción de obras destinadas al mejor aprovechamiento agrícola o industrial del inmueble, se entregará por cuotas sucesivas, a medida del avance de las obras y servirá de base para la operación el valor del terreno y el costo de aquéllas y de las mejoras permanentes adheridas a él (90).

Artículo 89.— Las letras de crédito se emitirán formando series. Pertencerán a una serie las que devenguen un mismo interés, tengan igual amortización y hayan sido emitidas en idéntica moneda.

Las letras de crédito que emitan los bancos podrán ser reajustables o no y podrán emitirse nominativas o al portador. Si se emitieren nominativas, su transferencia se efectuará mediante traspaso del título, firmado por el cedente y el cesionario, inscrito en un registro especial que deberá llevar el banco para este efecto. El tipo y corte de las letras será determinado por la institución emisora (91).

Artículo 90.— Las personas que contrataren préstamos en letras de crédito sobre hipotecas se obligarán a pagarlos en las cuotas anticipadas o dividendos que fije el contrato, los que comprenderán la amortización, el interés y la comisión.

El no pago de todo o parte de una obligación en letras de crédito dará derecho al banco mutuante para cobrar al deudor el máximo del interés que la ley permita estipular al momento del pago efectivo (92).

Artículo 91.— Los bancos no podrán emitir letras de crédito sino por la cantidad a que ascendieren las respectivas obligaciones hipotecarias constituidas a su favor.

Toda letra de crédito que emitan se anotará en un Registro que deberá llevar la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. El Superintendente podrá delegar esta función en las oficinas del Banco Central de Chile o en las Tesorerías Comunes cuando se trate de bancos sin oficina en Santiago.

Las inscripciones en el Registro se harán con la presentación de una copia autorizada de los documentos en que conste la obligación hipotecaria, por una cantidad igual al valor nominal de las letras. Se hará constar el hecho de haberse registrado la letra mediante la aposición de un sello oficial.

Artículo 92.— El Banco pagará en las épocas fijadas la parte del capital y los intereses convenidos. Tratándose de letras de crédito de amortización indirecta, el pago de los intereses se efectuará en las épocas señaladas y la amortización se hará por compra, rescate o sorteo a la par, según lo estime conveniente, de letras por un valor nominal igual al fondo de amortización correspondiente al período respectivo.

En caso de sorteo, las letras que hayan de amortizarse en cada período, se determinarán a la suerte en el período anterior.

Todo sorteo o incineración de letras de crédito deberá ser realizado ante notario.

(90) (91) Ver nota (89).

(92) Artículo modificado en la forma que aparece en el texto por el Art. 1º, letra n), del DL. 3.345, de 29-4-80.

Tratándose de letras de crédito sorteadas, los bancos no podrán negarse al pago del capital de ellas ni al de sus reajustes o intereses ni se admitirá para su pago oposición de tercero, a no ser que tratándose de letras nominativas, se alegare por éste pérdida de la misma letra cuya amortización o intereses se cobraren.

Toda letra sorteada deja de ganar reajustes e intereses desde el día señalado para su amortización (93).

Artículo 93.— La amortización de las letras de crédito podrá hacerse en forma ordinaria, ya sea directa o indirectamente, o en forma extraordinaria.

Se entiende por amortización ordinaria directa aquella en que periódicamente el emisor paga parte del capital y de los intereses convenidos, cuyos valores se expresan en el respectivo cupón.

La amortización ordinaria indirecta es aquella que se efectúa mediante compra o rescate de letras o por sorteo a la par, hasta por un valor nominal igual al fondo de amortización correspondiente al período respectivo.

La amortización extraordinaria consiste en la aplicación que el banco emisor debe hacer del pago anticipado en dinero que el deudor ha efectuado del todo o parte de su deuda, retirando de la circulación por compra, rescate o sorteo a la par, letras de crédito por igual valor. La amortización extraordinaria se produce también cuando el deudor paga anticipadamente el todo o parte de su deuda mediante la entrega de letras de crédito. Estas letras serán recibidas al valor que represente el título, descontadas las amortizaciones parciales de él, o bien, si se tratare de letras cuyos cupones comprendan sólo el pago de intereses, serán recibidas a la par (94).

Artículo 94.— Las obligaciones en letras de crédito deberán garantizarse con primera hipoteca.

Sin embargo, se admitirán hipotecas sobre inmuebles ya gravados, siempre que, deducida de su valor la deuda anterior, sus reajustes e intereses, quedare margen suficiente para que el nuevo préstamo no exceda de los límites que fije el Consejo Monetario (95).

Artículo 95.— El deudor hipotecario de préstamos en letras puede reembolsar extraordinariamente el todo o parte del capital insoluto de su deuda, sea en dinero o en letras de la misma serie del préstamo y cuyo valor nominal no amortizado corresponda al total o a la parte del préstamo que se paga.

En estos casos, para quedar definitivamente libre de toda obligación para con el banco por el capital o parte del capital reembolsado, deberá pagar el interés y la comisión correspondiente a un período de amortización de las letras de su préstamo por toda la cantidad que hubiere anticipado.

Artículo 96.— El pago total o parcial extraordinario hecho voluntariamente por el deudor podrá efectuarse en todo tiempo, menos en los meses en que deban efectuarse los sorteos.

Artículo 97.— Si el inmueble hipotecado experimentare desmejoras o sufriende daños de modo que no ofrezca suficiente garantía para la seguridad del

(93) (94) Artículos modificados en la forma que aparece en el texto por el Art. 1º, letra n), del DL. 3.345, de 29-4-80.

(95) Artículo modificado en la forma que aparece en el texto por el Art. 1º, letra n), del DL. 3.345, de 29-4-80.

crédito, el banco tendrá derecho a exigir su reembolso. Cuando las pérdidas o desmejoras del inmueble no puedan imputarse a culpa del deudor, el banco exigirá nueva garantía o aumento de garantía para su crédito.

Artículo 98.— Cuando los deudores no hubieren satisfecho las cuotas o dividendos en el plazo estipulado y requeridos judicialmente no los pagaren en el término de diez días, el juez decretará, a petición del banco, el remate del inmueble hipotecado o su entrega en prenda pretoria al banco acreedor.

El deudor podrá oponerse, dentro del plazo de cinco días, al remate o a la entrega en prenda pretoria. Su oposición sólo será admisible cuando se funde en alguna de las siguientes excepciones:

- 1) Pago de la deuda;
- 2) Prescripción;
- 3) No empecer el título al ejecutado.

En virtud de esta última excepción no podrá discutirse la existencia de la obligación hipotecaria, y para que sea admitida a tramitación deberá fundarse en algún antecedente escrito y aparecer revestida de fundamento plausible. Si no concurrieren estos requisitos el tribunal la desechará de plano.

La oposición se tramitará como incidente.

La apelación de las resoluciones que se dicten en contra del demandado en este procedimiento se concederá con el solo efecto devolutivo. El tribunal de alzada podrá decretar a petición de parte, la suspensión del cumplimiento de la sentencia del tribunal de primera instancia mientras se encuentre pendiente la apelación si existieren razones fundadas para ello, lo que resolverá en cuenta.

Si no se formulare oposición, o se hubiere desechado la formulada, se procederá al remate del inmueble hipotecado o a su entrega en prenda pretoria al banco acreedor, según corresponda.

Artículo 99.— Entregado el inmueble en prenda pretoria, el banco percibirá las rentas, entradas o productos del inmueble, cualquiera que fuere el poder en que se encuentre y cubiertas las contribuciones, gastos de administración y gravámenes preferentes a su crédito, las aplicará al pago de las cuotas adeudadas, llevando cuenta para entregar al deudor el saldo, si lo hubiere. En cualquier tiempo en que el deudor efectúe el pago de las cantidades debidas al banco, le será entregado el inmueble.

Ordenado el remate, se anunciará por medio de avisos publicados cuatro veces en días distintos y debiendo mediar veinte días a lo menos, entre el primer aviso y la fecha de la subasta, en un periódico del departamento en que se sigue el juicio y, si allí no lo hubiere, en uno de la capital de la provincia. Las publicaciones podrán hacerse tanto en días hábiles como inhábiles.

Llegado el día del remate, se procederá a adjudicar el inmueble a favor del mejor postor. El banco se pagará de su crédito sobre el precio del remate.

El mínimo y las demás condiciones del remate serán fijados por el juez sin ulterior recurso, a propuesta del banco; pero el mínimo del primer remate no podrá ser inferior al monto del capital adeudado, dividendos insolutos, intereses penales, costas judiciales y primas de seguro que recarguen la deuda. Los gastos del juicio serán tasados por el juez.

Cuando haya de procederse a nuevo remate, el número de avisos y el plazo que deba mediar entre la primera publicación y la fecha de la subasta, se reducirán a la mitad.

Artículo 100.— Si, además del banco, otros acreedores tuvieren hipotecas respecto del inmueble, se les notificará la resolución que entregue en prenda

pretoria el inmueble al banco, o la que disponga el remate. Si esos acreedores hipotecarios fueren de derecho preferente al banco, gozarán de su derecho de preferencia para ser cubiertos con las entradas que el inmueble produjere en el caso de entrega en prenda pretoria y sin perjuicio de ésta, o con el producto de la venta del inmueble, en caso de remate.

Los acreedores serán notificados personalmente para el primer remate y para los siguientes por cédula, en el mismo lugar en que se les hubiere practicado la primera notificación, si no hubieren designado un domicilio especial en el juicio.

Los créditos del Fisco y de las Municipalidades gozarán de la preferencia que les acuerdan los artículos 2.472 y 2.478 del Código Civil respecto de los créditos del banco, sólo cuando se trate de impuestos que afecten directamente a la propiedad hipotecada y que tengan por base el avalúo de la propiedad raíz, y de créditos a favor de los servicios de pavimentación, de conformidad con las leyes respectivas.

Artículo 101.— Los subastadores de propiedades en juicios regidos por el procedimiento que señala esta ley no estarán obligados a respetar los arrendamientos que las afecten, salvo que éstos hayan sido otorgados por escritura pública inscrita en el Conservador de Bienes Raíces respectivo con antelación a la hipoteca del banco o autorizados por éste.

En las enajenaciones que se efectúen en estos juicios, no tendrá aplicación lo dispuesto en los números 3º y 4º del artículo 1.464 del Código Civil y el juez decretará sin más trámite la cancelación de las interdicciones y prohibiciones que afecten al predio enajenado, aun cuando hubieren sido decretadas por otros tribunales.

En estos casos los saldos que resultaren después de pagado el banco y los demás acreedores hipotecarios, quedarán depositados a la orden del juez de la causa para responder de las interdicciones y prohibiciones decretadas por otros tribunales y que hubiesen sido canceladas en virtud de lo dispuesto en el inciso anterior.

Artículo 102.— Se seguirá el procedimiento señalado en esta ley, tanto en el caso de tratarse del cobro contra el deudor personal del banco como en los casos contemplados en los artículos 1377 del Código Civil y 758 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 103.— Iniciado el procedimiento judicial, el banco designará un depositario en el carácter de definitivo para que, de acuerdo con las reglas generales, tome a su cargo el inmueble hipotecado.

Artículo 104.— Salvo el caso previsto en el artículo 98, los litigios que pudiesen suscitarse entre el banco y sus deudores, cualquiera que sea su cuantía, se decidirán breve y sumariamente por el Juez de Letras en lo Civil de Mayor Cuantía del domicilio del banco, con apelación a la Corte respectiva, tribunal que procederá en la misma forma. Las apelaciones deducidas por el demandado se concederán en el solo efecto devolutivo.

En los juicios que el banco siga contra sus deudores, no se tramitarán tercerías de dominio que no se funden en títulos vigentes inscritos con anterioridad a la respectiva hipoteca.

Artículo 105.— Los que falsificaren las letras de crédito, hicieren circular o introdujeran maliciosamente en el territorio de la República las letras falsifi-

cadass, serán castigados con las penas asignadas a los falsificadores de billetes del crédito público.

Artículo 106.— Las obligaciones hipotecarias a que se refiere este título se entenderán líquidas siempre que en la respectiva escritura se haga referencia a las tablas de desarrollo de la deuda, aprobadas por la Superintendencia y protocolizadas en una notaría.

TITULO XIII (96) (97) (98)

DE LOS BANCOS DE FOMENTO

Artículo 107.— Los bancos de fomento tendrán por objeto realizar las operaciones señaladas en la presente ley o que faculden otros textos legales.

Dichas entidades se regirán por las disposiciones de la presente ley, con las siguientes excepciones:

a) podrán emitir acciones con privilegio, no obstante lo dispuesto en el artículo 65, N° 3; y

b) no podrán recibir depósitos en cuenta corriente bancaria.

Los bancos de fomento deberán incluir en su razón social la expresión "Banco de Fomento".

Artículo 108.— Los bancos de fomento podrán efectuar especialmente las siguientes operaciones:

a) Contraer préstamos y en general toda clase de créditos y emitir bonos o debentures, en moneda nacional o extranjera, reajustables o no, sin garantía, y

b) Proporcionar capitales a sociedades anónimas chilenas mediante la suscripción de acciones y debentures. Estas inversiones, sumadas a los bienes raíces y corporales muebles del banco respectivo, no podrán exceder del 100% de su capital pagado y reservas.

Artículo 109.— Todas las menciones que la presente ley hace a los "bancos comerciales", se entenderán también efectuadas a los bancos de fomento.

TITULO XIV (99)

DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS

Artículo 110.— Las sociedades financieras que sólo podrán constituirse como sociedades anónimas, son entidades cuyo único y específico objeto social es actuar como agentes intermediarios de fondos y realizar las operaciones que les autoriza el presente título. Su nombre debe contener la palabra "Financiera".

(96) Este Título fue agregado por el Art. 1º, letra p), del DL. 3.345, de 29-4-80.

(97) Cabe tener presente que el Título XIII, "Disposiciones Transitorias", de la ley primitiva, fue derogado por el Art. 1º, letra n), del DL. 2.099, de 13-1-78.

(98) El Art. 2º del DL. 3.345, de 29-4-80, derogó la Ley 16.253, que autorizó el establecimiento de Bancos de Fomento.

(99) Este Título fue agregado por el Art. 1º, letra q), del DL. 3.345, de 29-4-80.

Artículo 111.— Las sociedades financieras se regirán por las disposiciones de la presente ley, por las del Código de Comercio y los preceptos del Reglamento de Sociedades Anónimas que sean aplicables a los bancos.

Todas las referencias a bancos, empresas bancarias o bancos comerciales que se hacen en esta ley se entenderán hechas también a las sociedades financieras, siempre que sean aplicables a éstas.

Artículo 112.— Las sociedades financieras deberán tener un capital pagado y reservas no inferiores al equivalente de 200.000 Unidades de Fomento (100).

Artículo 113.— No regirán para estas sociedades el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, ni las siguientes disposiciones de esta ley: Título VI y artículos 29, 30, 35, 44, 47, 62, 65, N° 7, 66 inciso primero, 68, 81, y 83 N°s. 1, en cuanto a celebrar contratos de cuenta corriente bancaria, 6, 7, 9, 10, 11, 11 bis, 12 y 12 bis.

Las sociedades financieras podrán efectuar especialmente las siguientes operaciones:

a) recibir depósitos, salvo en cuenta corriente bancaria. Las captaciones podrán documentarse mediante la aceptación de letras de cambio o la suscripción de pagarés o contratos de mutuo.

b) emitir bonos o debentures en conformidad a la ley respectiva, sin garantía, y

c) efectuar las operaciones de intermediación de documentos permitidos por el Consejo Monetario.

Artículo 114.— Las sociedades financieras quedarán sujetas a las siguientes prohibiciones:

a) efectuar cualquiera operación en moneda extranjera o expresada en moneda extranjera que no estuviere autorizada por el Banco Central. En ningún caso podrán efectuar operaciones de comercio exterior, y

b) pactar o mantener cuentas corrientes mercantiles, cuentas simples, de gestión o en participación o actuar como mandatarias a nombre propio.

Artículo 115.— El total de los compromisos para con terceros de las sociedades financieras no podrá exceder de quince veces su capital pagado y reservas. La infracción a este precepto será castigada con multa del uno por mil del exceso por cada día en que lo mantenga.

(100) Este artículo fue reemplazado por el que aparece en el texto, por el artículo 1°, letra b), del D.L. N° 3.460.
Véase también la nota (46).

SINTESIS HISTORICA
DE LA
LEY GENERAL DE BANCOS

I.— LEY GENERAL DE BANCOS: DECRETO LEY N° 559, DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1925

1.— Modificaciones y normas complementarias:

- D.L. N° 730, de 1° de diciembre de 1925.
- D.L. N° 735, de 4 de diciembre de 1925.
- D.L. N° 763, de 16 de marzo de 1926.
- D.L. N° 782, de 22 de diciembre de 1925.

- 2.— Ley N° 4.070 (19-6-26), modificó artículo 67.
- 3.— D.F.L. N° 65 (30-3-31), derogó artículos 44 a 49, inclusive.
- 4.— D.F.L. N° 192 (20-5-31), modificó artículos 27 inc. 1° y 76 inc. 1°, N° 7; sustituyó artículos 33 N° 3, 75 N° 13, 76 letra b) N° 1, 76 N° 6 y 79; agregó inciso al artículo 77.
- 5.— Ley N° 4.997 (7-10-31), modificó artículo 62; reemplazó artículo 73 letras a) y b); agregó penúltimo inciso al artículo 73.
- 6.— Ley N° 5.086 (24-3-32), sustituyó artículo 76 N° 6; se derogó artículo 77.
- 7.— Ley N° 5.581 (1-2-35), agregó N° 19 al artículo 75 e incisos al N° 7 del Art. 76.
- 8.— Ley N° 5.621 (29-5-35), derogó artículos 44 al 49, inclusive.

II.— DECRETO DE HACIENDA N° 2.115 (26-8-35). FIJA TEXTO DEFINITIVO

Modificaciones o complementaciones al decreto N° 2.115:

- 9.— Ley N° 6.672 (27-9-40), modificó artículo 1° inciso 1°, 4° inciso 2°, 8° inciso final, 25, 26, 62 inciso 1°, 76 N° 4 inciso 1° y N° 5; *sustituyó* artículo 18; *agregó* inciso al artículo 1° y letra c) al N° 1 del artículo 76.
- 10.— Ley N° 6.811 (5-2-41), deroga artículos 44 a 49, inclusive.

III.—DECRETO DE HACIENDA N° 3.154 (8-10-47). FIJA TEXTO DEFINITIVO DE LA LEY GENERAL DE BANCOS

Modificaciones o complementaciones al decreto N° 3.154:

- 11.— Ley N° 9.633 (5-8-50), *modificó* inc. 2° del artículo 3° e inc. 5° del artículo 73; *reemplazó* artículo 16; *sustituyó* inc. 1° del artículo 56 e incisos 2° y 4° del artículo 73, y el artículo 75.
- 12.— Ley N° 9.686 (3-10-50), agregó artículo a continuación del artículo 36.
- 13.— Ley N° 10.343 (28-5-52), modificó inciso 2° del artículo 3°.
- 14.— Ley N° 10.814 (22-11-52), derogó artículos 44 a 49, inclusives.
- 15.— Ley N° 11.234 (9-9-53), modificó inciso 1° del artículo 56.
- 16.— Ley N° 11.809 (4-3-55), modificó inciso 1° del artículo 56.
- 17.— Ley N° 12.084 (18-8-56), agregó incisos al artículo 7°.

IV.—D.F.L. N° 252 (4-4-60). FIJA TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE BANCOS

Modificaciones o complementaciones al D.F.L. N° 252:

- 18.— D.F.L. N° 352 (6-4-60), reemplazó el artículo 25 y modificó el artículo 115.
- 19.— Ley N° 14.171 (26-10-60), reemplazó el N° 4 del artículo 83.
- 20.— Ley N° 14.572 (20-5-61), agregó inciso nuevo al artículo 80.
- 21.— Ley N° 15.020 (27-11-62), modificó el inciso 2° del artículo 1°.
- 22.— Ley N° 16.253 (19-5-65), agregó incisos al artículo 22 y sustituyó el inciso final del artículo 80.
- 23.— Ley N° 16.324 (28-9-65), agregó inciso final al artículo 4°; intercaló inciso 2° en el artículo 32; modificó el artículo 33.
- 24.— Ley N° 17.236 (21-11-69), autoriza a los Bancos Comerciales para invertir hasta un 5% de sus fondos de reserva en la realización o adquisición de obras de arte.
- 25.— Ley N° 17.271 (2-1-70), sustituyó inciso 2° del artículo 118.
- 26.— Ley N° 17.382 (6-11-70), asimila a las agencias, sucursales y oficinas de instituciones bancarias que funcionen en provincias distintas de Santiago y Valparaíso, las obligaciones indicadas en el artículo 78 del D.F.L. N° 252, de 1960.
- 27.— Ley N° 17.399 (2-1-71), sustituyó inciso 2° del artículo 118.

- 28.— Decreto N° 482 (30-6-71), que aprobó y puso en vigencia el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros.

V.— LEGISLACION DESDE 1973 A LA FECHA

- 29.— D.L. N° 7 (19-9-73), suspendió la vigencia del inciso 2° del D.F.L. N° 252, de 1960, en lo relacionado con la duración del cargo de Superintendente de Bancos.
- 30.— D.L. N° 231 (31-12-73), prohíbe, por el tiempo que indica, el establecimiento de nuevos bancos comerciales y fija otras disposiciones.
- 31.— D.L. N° 455 (25-5-74), fija disposiciones para las operaciones de crédito de dinero.
- 32.— D.L. N° 748 (12-11-74), introduce modificaciones que indica a la ley N° 16.253, sobre Bancos de Fomento.
- 33.— D.L. N° 749 (13-11-74), adopta medidas para el funcionamiento de los bancos comerciales.
- 34.— D.L. N° 818 (27-12-74), determina régimen de propiedad y administración de los bancos y modifica la Ley General de Bancos.
- 35.— D.L. N° 1.000 (28-4-75), faculta al Banco Central de Chile para fijar normas a bancos y entes financieros y modifica el artículo 80 de la Ley General de Bancos.
- 36.— D.L. N° 1.097 (25-7-75), crea la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y señala sus funciones; deroga los títulos I, II y III del D.F.L. N° 252, de 1960, y los incisos finales de los artículos 28 y 80.
- 37.— D.L. N° 1.171 (5-9-75), modifica leyes bancarias y fija otras normas sobre instituciones financieras.
- 38.— D.L. N° 1.123 (4-8-75), sustituye la unidad monetaria.
- 39.— D.L. N° 1.638 (30-12-76), modifica la Ley General de Bancos.
- 40.— D.L. N° 1.645 (3-1-77), modifica decretos leyes N.os 818, 1.068 y 1.527.
- 41.— D.L. N° 1.683 (7-1-77), establece normas sobre seguros y garantías para depósitos y captaciones.
- 42.— D.L. N° 1.847 (4-7-77), introduce modificaciones a la legislación bancaria.
- 43.— D.L. N° 2.099 (13-1-78), introduce modificaciones a la legislación bancaria y financiera.
- 44.— D.L. N° 3.345 (29-4-80), introduce modificaciones a la legislación bancaria y financiera.
- 45.— D.L. N° 3.460, aumenta el capital mínimo de los bancos y sociedades financieras.

INDICE ANALITICO
DE LA
LEY GENERAL DE BANCOS

ACCIONES

Carácter de nominativas.
Art. 65.

APERTURA DE OFICINAS

Apertura y cierre de Oficinas.
Art. 31.

ARCHIVOS

Conservación y eliminación.
Art. 19.

BANCOS COMERCIALES

Concepto
Art. 62.

BANCOS DE FOMENTO

Objeto
Art. 107, inc. 1º.
Disposiciones que los rigen y excepciones.
Art. 107, inc. 2º y 109.
Razón social.
Art. 107, inc. 3º.
Operaciones especiales.
Art. 108.

BANCOS EXTRANJEROS

Administración de las sucursales
Art. 47.
Constitución de las sucursales.
Art. 29.
Normas aplicables.
Art. 30.
Representación de los bancos comerciales extranjeros.
Art. 35.
Remesa de utilidades.
Art. 47.

CAPITAL

Aumento de capital.
Art. 69.
Capital mínimo de un banco comercial para constituirse.
Art. 66.

CAPITAL

Publicidad del capital
Art. 71.
Reducción del capital.
Art. 70.
Oportunidad de entero.
Art. 67.

CIERRE DE OFICINAS

Art. 31.

COMISIONES DE CONFIANZA

Apertura del Departamento de
Art. 49.
En caso de quiebra.
Art. 53.
Operaciones que constituyen comisiones de confianza.
Art. 48.
Operaciones que no constituyen comisiones de confianza.
Art. 51.
Inversión de los dineros provenientes de
Art. 52.
Legislación aplicable.
Art. 50.

CONSEJO MONETARIO

Facultad del Consejo Monetario para reglamentar las normas sobre préstamos hipotecarios.
Art. 87 N° 1.
Facultad para fijar a los bancos los límites para la adquisición por cuenta propia de letras de crédito de su propia emisión.
Art. 87 N° 2.

CONSTITUCION

De empresas bancarias.
Arts. 27 y 28.

CREDITOS

Márgenes individuales de crédito.
Art. 84 Nos. 1 y 2.
Márgenes de crédito a directores o empleados.
Art. 84 N° 7.
Deudores complementarios.
Art. 85.

DELITO ECONOMICO

Infracción al artículo 34 sobre Reserva del Comercio Bancario constituye delito económico.

DEPOSITO EN GARANTIA

Para garantizar el cumplimiento de la ley.
Art. 36.
Como fondo constitutivo de encaje.
Art. 79.

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Arts. 40 al 47.

DIRECTORES

Elección de
Art. 41.
Reemplazo de
Art. 42.
Composición del directorio.
Art. 65 Nº 7.
Incompatibilidades e inhabilidades.
Art. 65 Nos. 8, 10, 11, 12, 15 y 16

DIVIDENDOS

Reparto de
Arts. 75, 76 y 77.

DOCUMENTOS

Conservación y eliminación de
Véase ARCHIVOS.

ENCAJE

Forma de constituir el encaje.
Art. 79.
Períodos de encaje.
Art. 80.
Obligación de encaje.
Art. 78.
Tasa de encaje.
Art. 78.
Multa por no mantener encaje.
Art. 80.

ESTATUTOS

Arts. 28 y 64.

FONDOS DE RESERVA

Arts. 72, 73, 74.
Ver además CAPITAL.

GARANTIA

Ver DEPOSITO EN GARANTIA.

GERENTE

Nombramiento.
Art. 41.

JUNTA DE ACCIONISTAS

Facultades de la Superintendencia.
Art. 46.
Juntas ordinarias.
Art. 75.
Límite de votación.
Art. 65 Nos. 4 y 5.
Poderes.
Art. 65 Nos. 13 y 46.

LETRAS DE CREDITO

Art. 83 Nº 3 bis, y
Arts. 86 al 106.

LIMITACIONES

Art. 84.
Véase además CREDITOS.

LIQUIDACION FORZOSA Y QUIEBRA

Liquidación de empresas bancarias.
Arts. 54 y 55.
Pago a los acreedores.
Art. 56.
Delegados del Superintendente.
Art. 57.
Cobro de cuotas de acciones no pagadas.
Art. 58.
Declaración de quiebra.
Art. 60.
Entrega de liquidación dueños de la empresa.
Art. 59.

MICROFILMACION

Microfilmación de documentos.
Art. 19.

PODERES DE ACCIONISTAS

Ver JUNTA DE ACCIONISTAS.

QUIEBRA

Ver LIQUIDACION FORZOSA Y QUIEBRA.

RELACION DEUDA - CAPITAL

Art. 81.

RESERVA DE COMERCIO BANCARIO

Art. 34.

SANCIONES

A Directores, Gerentes, Funcionarios y Auditores externos.

Arts. 26 y 26 bis.

Ver además DELITO ECONOMICO.

SOCIEDADES FINANCIERAS

Concepto.

Art. 110.

Objeto.

Art. 110.

Capital.

Art. 112.

Constitución.

Arts. 110 y 111.

Disposiciones que las rigen y excepciones

Arts. 111 y 113.

Relación deuda-capital.

Art. 115.

Operaciones especiales.

Art. 113.

Operaciones prohibidas.

Art. 114.

SUCURSALES

Apertura y cierre de oficinas.

Art. 31.

De Bancos Extranjeros.

Art. 29.